CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

COMISION DE PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DE DON LUIS FERNANDEZ Y FERNANDEZ-MADRID

Sesión celebrada el lunes, 11 de junio de 1990

Orden del día:

- Dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (expediente 621/000005) y sobre el proyecto de ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria (procedente del Real Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre) (expediente 621/000006).
-

Se abre la sesión a las dieciséis horas.

DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1990

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señores Senadores.

Vamos a iniciar esta primera sesión de la Comisión de Presupuestos en la que vamos a debatir los presupuestos generales del Estado para 1990. Cuando terminemos con este debate empezaremos con el proyecto de ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, que también corresponde discutir a esta Comisión.

Ya sabrán los miembros de la Comisión que, en virtud del acuerdo a que han llegado la Mesa y los portavoces en reunión formal que a este efecto hemos mantenido, los turnos de petición de palabra para la defensa de las enmiendas de cada grupo parlamentario serán de un tiempo de cinco minutos, tiempo que viene dado en función del calendario legislativo de la Cámara y de la marcha de la Comisión en general. Para consumir turnos en contra se dispondrá de cinco minutos. En cuanto a las enmiendas particulares, como es habitual en esta Comisión ya en años anteriores, se dispondrá de un minuto. Los turnos de portavoces podrán consumir hasta un máximo de tres minutos.

En cualquier caso, esta Mesa —cuya capacidad está acreditada aunque hoy la Presidencia se encuentre un

poco afónica— no por eso va a dejar de considerar cualquier incidencia que pueda presentarse. Todo ello se resolverá como es norma democrática y cortés, afortunadamente, de esta Cámara, de la Mesa y de quienes constituyen esta Comisión.

Empezamos, pues, a considerar los vetos presentados al proyecto de ley. (*El señor García Sánchez pide la palabra.*)

Tiene la palabra, señoría.

El señor GARCIA SANCHEZ: Es para decir que, como a las ocho se va a proceder a la votación, sería conveniente pasar lista ahora.

El señor PRESIDENTE: Agradezco la ilustración, a la que está muy obligado el Grupo Socialista por razones obvias.

Me faltaba decir que esta mañana hemos acordado, también para un mejor orden —no quiero decir para mayor comodidad porque los señores Senadores son agueridos y estarían dispuestos a todo—, que vamos a proceder a las votaciones en dos momentos concretos del día: a las dos en punto de la tarde y a las ocho de la noche. Es decir, que las votaciones de todo lo que hayamos discutido o deliberado a lo largo del día será votado —repito— a las dos y a las ocho. El que haya votaciones a las ocho no tiene que ver con ningún fenómeno italiano, es para que los señores Senadores sepan que a esa hora se vota. Es posible que después de la votación continúen las tareas de la Comisión, cosa que no dependerá de los goles sino de cómo llevemos el desarrollo científico —vamos a llamarle así— de esta Comisión. Este acuerdo ha sido tomado esta mañana en reunión conjunta de la Mesa de esta Comisión con la Junta de Portavoces.

Creo que no me queda ninguna observación que hacer en orden a organización —aunque apelo al señor Letrado—, con lo cual creo que podemos empezar con el proyecto de ley.

A petición del portavoz del Grupo Socialista se va a pasar lista de los señores Senadores. (*Pausa.*)

Por el señor Secretario se procede a la comprobación de los señores Senadores presentes y representados.

Discusión
de los vetos

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, para la defensa de su veto y, si acaso, de su enmienda número 2, tiene la palabra el Senador Pujana, del Grupo Mixto, por un tiempo de cinco minutos.

El señor PUJANA ARZA: Gracias, señor Presidente.

No creo que vaya a necesitar los cinco minutos, voy a intervenir telegráficamente.

Presentamos este veto al proyecto de ley de Presupuestos Generales de 1990 porque del análisis del conjunto del proyecto no se desprende en absoluto la estructuración del Estado como Estado de las autonomías. Es decir, de la lectura de los presupuestos se puede deducir, perfectamente que éste es un Estado absoluta y exclusivamente centralizado. Por tanto, no se valoran los presupuestos

con arreglo a las competencias de cada administración, sea ésta central o autonómica, tal y como deberían valorarse.

Por otra parte, la valoración es diferente. Las competencias de la Administración central se valoran de una forma totalmente distinta a las de la Administración autonómica. Por tanto, ya desde su raíz es rechazable esta estructura de presupuesto.

Pero, no solamente ocurre esto, sino que el proyecto, junto con las medidas fiscales contenidas en el Decreto 7/1989, y la política monetaria restrictiva, produce un reparto desigual de la carga en el conjunto de la sociedad perjudicando a los económicamente más débiles, y no ofreciendo soluciones convincentes para el desempleo, el desequilibrio externo, comercial y de pagos, la financiación de la inversión y de la economía y la disminución diferencial de inflación.

Por otra parte, es evidente que se margina a la Comunidad Autónoma Vasca en los proyectos de inversión pública para la formación de capital fijo, lo cual corresponde competencialmente a la Administración central.

Por tanto, en virtud de cuanto se ha expuesto, y fundamentalmente en las materias a que nos hemos referido, tanto en cuanto a la estructura del propio presupuesto, a la valoración del mismo como a las consecuencias de la aplicación de este proyecto de ley, Eusko Alkartasuna presenta este veto ante sus señorías con la esperanza de que lo consideren.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Antes de continuar me dirijo al representante del Grupo Socialista para rogarle me comunique si va a contestar en el turno en contra veto por veto o si va a contestar al final a todos conjuntamente. Como es evidente, de ser este segundo supuesto, cuente el Grupo Socialista con la benevolencia que esta Presidencia tendría —que necesitado está de ella— dándole más tiempo para intervenir que a los grupos de la minoría.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista va a agrupar los vetos. Responderá cuando lo estime pertinente. En cualquier caso, cuando haya materia para responder.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Ello quiere decir que el Grupo Socialista podrá utilizar el turno en contra y que, por supuesto, tendrá la oportunidad de hacer uso de la palabra durante cinco minutos tantas veces como vetos haya propuestos. Si no los agota, mejor para todos.

En cuanto a los vetos, recuerden que se votarán todos al final de la tarde.

Invito al portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos a que, también por tiempo máximo de cinco minutos, defienda el veto que tiene presentado a este proyecto de ley.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presi-

dente. Yo también voy a ser muy breve, porque creo que todo o mucho ya se dijo en el Congreso, y además estamos ya en el mes de junio —las razones por las que este proyecto ha llegado cuando ha llegado ya nos las explicará alguien en su día— y, efectivamente, esto es una continuación de otros Presupuestos que no han arreglado absolutamente nada, y ya hablaremos de los que ha pasado el último año, el anterior, etcétera, es decir, que todos los problemas de esta economía siguen donde están prácticamente, no se ha hecho absolutamente nada y entendemos que lo que hacemos con estos Presupuestos es simplemente cumplir una obligación legal y, en consecuencia, no arregla ni los problemas de la competitividad.

Todo el mundo dice que el problema de la competitividad es importante, y ahora nos han pedido colaboración a todas las fuerzas políticas. Debe ser que el 1990 es un año que hay que apuntar en algún sitio, y, mientras tanto, otros países ya están avanzando mucho. Desde luego, si no mejoramos la competitividad, difícilmente vamos a solucionar el grave problema del paro y otra serie de temas estructurales.

Yo me adhiero, por razones claras, a la opinión de que nuestra Comunidad Autónoma queda francamente marginada. Nosotros siempre hemos apoyado cualquier inversión que se haga en otros temas, llámese líneas del Mediterráneo, etcétera; no tenemos nunca nada contra nadie, sino que apoyamos cualquier inversión en otras áreas, pero si ésta es la política del futuro, ¿qué va a pasar con otra gran población del resto de España que para las inversiones se va a quedar en un segundo o tercer plano? Nos estamos jugando el futuro no sólo de esta generación, sino de varias generaciones. Por tanto, no concebimos cómo esto que ha pasado con estos Presupuestos haya podido pasar con la actual situación económica mundial.

Nosotros mantendremos el veto, que explicaremos, porque aunque podríamos dar muchas más razones, esto es lo fundamental para mantener el veto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo del Centro Democrático y Social tiene presentado el veto número 3, y, también por tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Quetglas para su defensa.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado este veto por razones fundamentales de fondo sobre el contenido de los Presupuestos.

En primer lugar, nosotros partimos de la base de que no son acertados los supuestos de cálculo sobre los que se basa y se estructura el propio Presupuesto en relación a la evolución de variables fundamentales como es el producto interior bruto o la tasa de inflación. El hecho de estar discutiendo el Presupuesto a mitad del ejercicio nos permite ya efectuar ciertos contrastes sobre cuál es el comportamiento de la economía en relación a los supuestos sobre los que se basó el Presupuesto, y se está contras-

tando con la realidad que esos supuestos básicos no se están produciendo.

La estructura del endeudamiento público para financiar el déficit con una deuda, a nuestro juicio, con exceso de cargas financieras y excesivamente a largo plazo, así como las retribuciones, que siguen una vez más subiendo por debajo de lo que debería ser correctamente la suma de la inflación más los incrementos de productividad, no se está produciendo adecuadamente, con lo cual se están añadiendo dificultades serias para la adecuación del sector público y, en concreto, de la Administración pública a las necesidades de los retos del futuro. Y, por último, un planteamiento de desequilibrio por el peso específico de los gastos, y muy concretamente de los gastos sociales, todo ello, en fin, nos hace juzgar a este Presupuesto como no suficientemente colaborador para mantener la competitividad de la economía española, muy especialmente hacia los retos de la integración que supone la entrada en vigor del Acta Unica a partir del 1 de enero de 1993.

Esas son las razones fundamentales por las que nuestro Grupo presenta esta propuesta de veto a la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra, también por tiempo máximo de cinco minutos, para defender su veto, número 4.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo presenta esta enmienda de veto a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 solicitando, por tanto, su devolución al Gobierno, porque entendemos que no contiene las medidas necesarias de política económica, sobre todo para afrontar los retos de mayor competitividad que exige nuestra plena incorporación a las Comunidades Europeas, pero además tampoco prevé las actuaciones presupuestarias suficientes en los problemas sociales que afectan a amplios sectores de nuestra sociedad.

Por unas u otras razones que ahora no vamos a detallar —no es el momento—, se ha perdido un año para la reorientación de la política económica española. Con ser ello importante, tiene una mayor gravedad porque los restantes países europeos nos llevan ya mucha ventaja. Por otra parte, aunque es evidente que nuestra economía está creciendo, y hemos de reconocerlo, también lo es que presenta, como hemos dicho, importantes desequilibrios, muy superiores a los de las restantes economías europeas.

En cuanto a algunos aspectos concretos por los cuales presentamos esta enmienda de veto a la totalidad, hemos de referirnos, primero, a que no hay expectativa de reducción de la inflación; tampoco se prevén medidas de reducción de nuestro déficit exterior; no se prevén, en tercer lugar, perspectivas de reducción sobre los elevados tipos de interés; entendemos que también faltan medidas para la corrección de la caída del ahorro familiar; no hay expectativas para la mejora de competitividad y, final-

mente, y punto sexto, no hay expectativas de equiparar nuestra tasa de paro a la que tienen los demás países de la Comunidad Económica europea.

Como no nos satisface suficientemente el proyecto de ley de sus Presupuestos, hemos de presentar la enmienda de veto a la totalidad del proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Popular, para la defensa de su enmienda de veto, número 1, tiene la palabra.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Quería tratar una cuestión previa, si me permite. En el artículo dos hay un error en la estimación de los créditos, que se cuantifican en 18.064.972.778 (miles de pesetas). Si sus señorías ven el anexo número I de programas, o se permiten sumar el de las funciones que se regulan en el artículo dos, «in fine», tiene la cifra exacta, como conocen, de 18.074.133.947.

Hay otro error —y esto está fuera de tiempo, espero, señor Presidente— en el artículo nueve, «in fine», donde dice: «Anexo II de la presente Ley, los apartados segundo, cinco a) y nueve», ahora es diez, en el texto que procede del Congreso.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por su ilustración, que esta Mesa acoge con satisfacción. Se ha tomado nota de ello por el señor Letrado, y haremos la corrección cuando llegue el tren a esa estación. Parece más oportuno que lo hagamos entonces y no retrasemos la marcha del debate, toda vez que se trata de errores mecánicos.

Yo ruego al señor Letrado que tome nota para que al llegar a esos puntos exactos se haga la corrección.

En ese caso, sin haber contado el tiempo reglamentario y empezando ahora mismo, tiene hasta cinco minutos para defender la enmienda de veto número 1.

El señor GARCIA ROYO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como se ha dicho, el veto que presenta el Grupo Popular es a unos Presupuestos de vigencia semestral escasamente, unos programas cuyos errores hemos expuesto y se van a subsanar, por lo que no vamos a entrar más en ese tema, pero sí quiero hacer una especial mención en términos de déficit inicial, necesidades de financiación.

En la documentación que se nos remite, en la página 8 de los Presupuestos consolidados, señor Presidente, pese a que se nos quiere presentar por el Gobierno socialista un déficit presupuestario inicial de unos 900.000 millones de pesetas, en realidad no es así. Estamos en condiciones de decir que en términos de necesidades de financiación, puesto que la caja es única, el pagador no deja de ser el Estado, no sé por qué se ha de excluir el capítulo noveno, que es nada menos que el pago de pasivos financieros, señor Presidente. Es algo que viene reiteradamente formu-

lándose y no dejará de extraerse de los capítulos de ingresos correspondientes.

Mantiene, pues, mi Grupo que en este momento el déficit presupuestario inicial, en términos de necesidad de financiación, con arreglo a la contabilidad europea, está en un billón novecientos ochenta y nueve mil millones de pesetas, exactamente el 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto, que, para este ejercicio, a título informativo, señor Presidente, es de 49 billones 500.000 millones de pesetas.

Estos presupuestos, señor Presidente, señorías, se había dicho que eran moderadamente expansivos; pues no. Hay un defecto estructural: es la primera vez que se asiste en catorce años a presenciar cómo unos Presupuestos para 1990 no tienen término comparativo en los Presupuestos iniciales para 1989. Se arranca, señor Presidente, del resultado de la liquidación del Presupuesto de 1989 y ello origina tremendas diferencias. Luego hablaremos de las inversiones, para que se vea cómo pesa el intento numérico, nada más que numérico por parte del Gobierno socialista, y encomiable, de que haya crecido; es puramente virtual, y ese 24,8 por ciento del crecimiento de las inversiones que no es sino recuperar lo no ejecutado durante el ejercicio de 1989.

Pasando ya al contenido económico, efectivamente, para no ser repetitivo, puesto que será motivo de desarrollo en el Pleno, no son Presupuestos que alienen un crecimiento sostenido o estable, no alientan la inversión, puesto que penalizan el ahorro, no reducen la tasa de paro, no mejoran los servicios de los impuestos, sobre todo en materia de recaudación, como luego observaremos al estudiar el Título I, y fundamentalmente no mejoran el control del gasto que (como puede decir en este momento quien hace uso de la palabra como portavoz del Grupo Popular, perteneciendo al Tribunal de Cuentas hemos asistido a algo del tenor que ya repetí no hace pocos días cuando presentamos el informe de la cuenta definitiva del año 1985), por no tener asumido el criterio del devengo y el de caja, se están, yo no quería decir camuflando en el peor sentido, sino desvirtuando la cuantía del déficit y de 409.000 millones que entonces se establecieron por la Intervención General del Estado, órgano del Gobierno socialista, pasa al Tribunal de Cuentas, órgano de nuestra Cámara, de nuestro Parlamento, y se duplica a 900.000 millones de pesetas.

Quiero recalcar a sus señorías la ejecución presupuestaria que para este ejercicio se ha tenido. Fíjense ustedes que para unos presupuestos de 19 billones, vienen impactados automáticamente por tres billones 380.000 millones de pesetas, y se incorporan créditos extraordinarios y suplementos de créditos del ejercicio anterior, porque se incorporan modificaciones presupuestarias que no se ejecutaron, porque se incorporan generaciones de crédito que no tuvieron lugar en el ejercicio de 1989 y porque se generan créditos también por sumas distintas hasta tres billones 380.000 millones de pesetas. Yo me pregunto, señor Presidente, si no es para reclamar como uno de los motivos de veto y de devolución al Gobierno, que se aumente el control presupuestario en esta Cámara ya que,

por ejemplo, hasta ahora ha introducido el Gobierno socialista aquí el esquema de siete programas que van a ser seguidos y controlados, pero de los 317 programas o de las 13 funciones es imposible tener un seguimiento adecuado en esta Cámara. Lo que hoy son presupuestos, mañana —cuántas veces se ha dicho esta frase— es cheque en blanco para el Gobierno socialista.

En cuanto a los ingresos, en el ejercicio anterior, señor Presidente —y son datos que se nos han presentado por la Intervención General del Estado y siempre remitido a diciembre, es el término fatal del presupuesto, aunque tenga prórroga por un mes más— observamos que hay una recaudación superior en 839.000 millones de pesetas con motivo de una mejor gestión tributaria. Efectivamente, es plausible; de ahí se deducen 370 que me parece que se tienen que devolver en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y quedan 500.000 millones de pesetas netos. Pues en estos 500.000 millones de pesetas —que es también uno de los motivos que ampara el veto, la falta de credibilidad en los presupuestos— la falta de credibilidad origina que esos 500.000 millones no van a reducir el déficit, no van a reducir la deuda tanto interior como exterior, no van a una mayor inversión, no, señor Presidente; van al consumo, al gasto consuntivo, con lo cual se ve que es el afán fagocitario, el afán extremo de recaudación al margen de la Cámara, y se lleva por vías que no son las que impactan directamente en la contención del déficit que ahora acabamos de denunciar como imprevisto. No sirvieron las medidas monetarias, de febrero de 1989, señor Presidente, no sirvieron las medidas monetarias o las presupuestarias como consecuencia de la huelga paralizantemente salvaje o salvajemente paralizante. El agravamiento de desequilibrio que se produjo por sobrevaloración de la peseta como consecuencia de adherirnos al sistema monetario europeo, y para nosotros fundamentalmente el hecho de querer ganar en aquel momento una cierta credibilidad ante el electorado disolviendo las Cámaras y formalizando unos presupuestos cuyas consecuencias vamos a recoger en estos para 1990... Perdón, señor Presidente, no sé si me quiere decir algo.

El señor PRESIDENTE: Le quiero decir que ya se ha pasado dos minutos de la hora, pero creo que lo ha entendido su señoría suficientemente bien y por eso no me atrevía a decírselo.

El señor GARCIA ROYO: Entonces para sentar precedente de que no me voy a exceder en el tiempo, muchas gracias y doy por terminada mi defensa del veto.

El señor PRESIDENTE: muchas gracias, señoría.

Con la intervención del señor García Royo en nombre del Grupo Popular, se han considerado los cinco vetos presentados. Por tanto, concedo la palabra al Grupo Socialista, que tiene veinte minutos como máximo para contestar a los diversos vetos presentados.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor

Presidente, espero que pueda contestar en bastante menos tiempo.

Yo creo que todos nosotros podríamos ponernos de acuerdo en algo, estoy seguro que si a nosotros ahora se nos ofreciera el panorama ideal de una economía que va a crecer sistemáticamente el 5 por ciento del Producto Interior Bruto año tras año, de una economía que va a ir recuperando empleo hasta solucionar definitivamente el problema del paro año tras año, de una economía que va a ir recortando el diferencial de precios con respecto a la Comunidad Económica Europea y de la OCDE año tras año, y de una economía que a pesar de las necesarias importaciones de bienes de equipo que implica toda economía en proceso de crecimiento y desarrollo, no tenga excesivos problemas en sus reservas de divisas, yo creo que si ese panorama ideal se nos presentara aquí a todos nosotros, sin duda la responsabilidad de todos nosotros haría que lo firmáramos de manera inmediata, sin duda. Pues bien, señorías, si ustedes recogen la evolución de la economía española del año 1989 y de los meses transcurridos de 1990, tendrán que concluir que eso es lo que está ocurriendo.

Yo no voy a discutir aquí la conveniencia o no de que ustedes interpongan un veto a la totalidad de los presupuestos, ¡faltaría más! Pero desde luego, desde un punto de vista de fondo, de acuerdo con los argumentos empleados por ustedes, eso es totalmente incorrecto. Hoy, antes de entrar aquí, todos hemos podido ver en televisión que se ha dado las cifras de empleo correspondientes al mes de mayo, y se han creado 59.200 empleos; es decir ha sido un ritmo de crecimiento de casi 2.000 por día, y ese ritmo de crecimiento económico es lo que ha ocurrido en los últimos años, señorías.

Incluso en cuanto a la evolución de los precios, en cuanto a ese análisis que ustedes se creen que nosotros no deseamos tocar porque es algo que va en contra de los propios postulados, que nosotros defendemos, estamos tremendamente orgullosos del control que está existiendo sobre los precios, y no puedo estar de acuerdo en absoluto con las palabras del Senador García Royo cuando dice que las medidas de política económica del pasado año no surtieron efecto. Señor García Royo, las medidas de política económica del pasado año sí surtieron efecto, porque contribuyeron a que el diferencial de inflación que se estaba disparando con respecto a la CEE, haya finalizado el año incluso por debajo, y le aconsejo que usted revise sus datos y verá que eso que le digo es absolutamente correcto.

Respondiendo ya individualmente a algunos de los planteamientos de sus señorías, quiero decirles lo siguiente:

Al señor Pujana, en cuanto de lo que apuntaba sobre la inflación, creo haber respondido. Revise su señoría la evolución de los precios en España, en la Comunidad Económica Europea y en la OCDE, y le aseguro que ese planteamiento es beneficioso para España.

En cuanto a que no se están ofreciendo soluciones al problema de inversión en el País Vasco, quiero decirle lo siguiente: ya hace tiempo que los economistas sabemos,

y sin duda el señor Aguirre lo sabe mejor que yo, que la inversión no es solamente función inversa de la tasa de interés, como nos decían en el comienzo de los cursos de la carrera de Economistas; la inversión es una variable muy errática que fundamentalmente es función de las expectativas de los empresarios, y en el País Vasco las expectativas han sido generalmente muy negras, y en parte alguna responsabilidad tendrán ustedes, que no nosotros.

El señor Aguirre nos dice que difícilmente podemos arreglar el problema del paro. Señor Aguirre, yo creo que, a tenor de la evolución que está teniendo el nivel de empleo, no creo que usted reconozca como mala la política económica en este sentido cuando, repito, la tasa de paro se está reduciendo sistemáticamente y en este país se está generando empleo. El problema es mantener el crecimiento del PIB a un 5,2 por ciento, como puede haber finalizado en el año 1989, sin tener problemas de demanda y sin tener problemas en los precios. Ese es el grave problema que pretenden corregir estos presupuestos, que son moderadamente restrictivos, no moderadamente expansivos, como decía el señor García Royo.

El representante del Grupo de Convergencia i Unió pedía mayor competitividad. Efectivamente, creo, señoría, que esto es justamente lo que defienden estos presupuestos y lo que defiende el Gobierno y este Grupo político que le sustenta, y esto es lo que pedimos todos, ese acuerdo de competitividad que obligue a todo el mundo.

Respecto al problema del paro, me limito a lo que he señalado al resto de los intervinientes, porque al fin y al cabo, tal como apuntaba el representante del Grupo del CDS, afrontar ese reto del futuro que exige el Mercado Unico de 1993 es, sin duda, lo que queremos todos, y afrontarlo de la mejor manera posible.

Señor García Royo, creo que si algo está creciendo mucho en España es precisamente la inversión, y desde luego la inversión pública. No comparto el análisis que usted hace del déficit, no sé de dónde ha sacado usted esas cifras, desde luego el déficit, si se cumplen los ingresos —ya bastante ajustados, por cierto—, va a ser en el año 1990 del 1,6 por ciento del PIB y ligeramente inferior al que ha habido en el año 1989.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Hay un turno de portavoces, para quien desee utilizarlo.

El Senador Pujana tiene la palabra durante tres minutos como máximo.

El señor PUJANA ARZA: Muchas gracias, señor Presidente.

He oído con mucha tristeza la respuesta que ha dado el portavoz socialista a mi intervención. Creo que ha sido una intervención totalmente desafortunada, y lo digo con toda cordialidad.

Primero, en cuanto a la inflación, me ha dicho que se han cumplido las previsiones. Pues bien, jamás se han cumplido ni siquiera las previsiones que el Gobierno ha establecido acerca del control de la inflación, y eso es

constatable cien por cien, y, si no, hablen con sus sindicatos.

En lo que se refiere al País Vasco, nosotros no nos vamos a eximir de las responsabilidades que podamos tener, pero desde luego el Estado tampoco, y el Estado tiene muchas competencias que no ejerce, que es a lo que me refiero.

En cuanto a las expectativas, creo que el Estado no será un empresario más en lo que a su competencias y a sus obligaciones atañe. Si eso tiene que ser así, señoría, y ante su afirmación dura, yo le tengo que contestar que de seguir las cosas así, cada vez vamos aumentando más los que pensamos que no nos interesa este Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Aguirre tiene la palabra durante tres minutos.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Voy a contestar a mi querido amigo el portavoz socialista, lo que dijo aquí el Ministro de Economía cuando él no era Senador, en el debate de Presupuestos para el año 1989. Tome nota, le voy a decir hasta la página: página 599, debate de Presupuestos, 1989. El señor Solchaga decía: «Inflación. Es compatible el crecimiento del 5 por ciento con nuestra tasa de inflación del 3 por ciento». Subráyelo, tome nota y que nos explique el señor Solchaga esta compatibilidad. Hablando de nuestras exportaciones e importaciones, dijo el señor Solchaga: «Ambas magnitudes, exportaciones e importaciones, en vez de separarse van convergiendo, con lo cual nuestro déficit externo se irá reduciendo». Coja usted los datos de la balanza por cuenta corriente de 1987, 1988 y 1989 y dígame si algo de esto es cierto, con números; no hace falta haber ido a la Facultad de Económicas. Esto lo dice alguien del Ministerio: el Ministro. Ustedes, que son el Partido que sustenta a ese Gobierno y a ese Ministro, sabrán la credibilidad de lo que está ocurriendo.

Le podría decir muchísimas más cosas de debates en los cuales aquí se ha demostrado con números que no se cumplían las previsiones. Hay algo que sí aprendí y es no echar las culpas a casi nadie, porque en economía nadie tiene la verdad absoluta; pero ustedes no admiten ni una coma, nada absolutamente, lo que dice el Ministerio debe ser un dogma para ustedes. Pero ese es su problema, no el nuestro. Lo que le digo es que en todos los debates que ha habido en los Presupuestos se puede demostrar que se ha incumplido la presentación expuesta por el Ministro.

Yo creo que lo que ha dicho sobre el País Vasco se debe a desconocimiento, porque, evidentemente, nosotros vivimos allí con la ETA y hoy han matado a uno a cuyo hermano yo conozco muchísimo. Por tanto me parece de bastante mal gusto sacar estos temas. Nosotros conocemos esos problemas perfectamente; pero eso es una coartada que se usa aquí, porque mire —y no quiero sacar otros temas a colación— hay muchas inversiones que se podrían haber hecho allí y no han ido porque no ha interesado que fueran. Puestos a hablar de todo, le diré que incluso hay enmiendas de ustedes de este año que atentan contra el

Estatuto de Autonomía, y le voy a decir que una en concreto que es inconcebible: en el tema de las Cámaras de la Propiedad tenemos competencias exclusivas. Se está hablando de que hay que pactar y no ir al Tribunal Constitucional —eso lo está diciendo Felipe González—. Pues bien es de ustedes y esa enmienda se carga una competencia exclusiva de nuestro Estatuto. Podríamos todos decir muchísimas cosas, pero no ha sido el ánimo de este portavoz llevar el tema por ahí. Yo lo que quiero es que a poder ser nos arreglemos, si en algo nos podemos arreglar; pero, desde luego, de echar culpas creo que habría que repartirlas. Los que vivimos allí y allí tenemos nuestra casa somos los que primero tenemos el riesgo de que algo nos pase.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Vamos a mantener los tiempos y a ser posible las cortesías parlamentarias, cuando nos refiramos a alguna persona digamos su cargo o por lo menos lo que es costumbre en este viejo país que es el don por delante, porque todo el mundo lo tenemos.

El Portavoz del Grupo del Centro Democrático y Social tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo no quiero entrar en el detalle del debate, pero me parece que es evidente que la primera de las cuestiones a las que nosotros nos referimos al plantear nuestro veto de totalidad trata de los errores de cálculo sobre los que se sustenta y basa el presupuesto.

Primera hipótesis, crecimiento del PIB al nivel del 4 por ciento. El comportamiento de la economía española en este semestre nos está apuntando claramente mucho más hacia el cinco que al cuatro, y eso va a producir que toda la estructura de ingresos sobre los que se basa el presupuesto va a ser errado, y no como benévolamente, a mi juicio, atribuye el señor García Royo, por una mejor gestión tributaria van ustedes a recaudar más; ustedes van a recaudar más simplemente porque el PIB va a crecer por encima de lo previsto, porque las medidas contra el recalentamiento de la economía no están surtiendo el efecto que necesitan.

Hay una serie de variables que no les van a cuadrar nunca. Es evidente que la inversión tiene niveles muy elevados, del orden del 28 por ciento del PIB, pero la tasa de error no es suficiente para cubrirlo. El ahorro público, por mucho esfuerzo que haga, nunca va a poder cubrir esa diferencia, porque entre otras cosas la capacidad del ahorro público no va más allá del simple enjugar el déficit que en este momento tenemos, con lo cual no llegaríamos a los niveles de inversión que necesitamos para mantener la competitividad de la economía española, que son más cercanos al 30 por ciento que al 27 ó 28 que tenemos en la actualidad.

Por tanto esas variables y la respuesta que el presupuesto arbitra en términos de política económica tiene un gran sentido continuista.

Respecto a la política del Gobierno en muchos de los aspectos en los que ya ha demostrado su incapacidad para hacer frente a estos desequilibrios, quiero insistir en la política monetaria porque recuperar el ahorro, y muy especialmente el ahorro privado, nos parece que a estas alturas ya no tiene sentido, a pesar de que, evidentemente, las autoridades fiscales del Gobierno están reconociendo, y se han mostrado dispuestos a arbitrar en la próxima reforma fiscal, medidas fiscales para estimular el ahorro privado, porque no podemos dejar eternamente en manos del capital extranjero nuestra recuperación en la inversión. No es una respuesta presupuestariamente satisfactoria a los desequilibrios que nuestra economía demuestra.

La estructura de la deuda pública comparada con la estructura de deuda pública que tienen países de nuestro entorno es sencillamente disparatada en cuanto a sus costes de gestión y a sus costes financieros. No quiero insistir una vez más sobre un tema sobre el que nada se ha contestado, que es la cuestión de las retribuciones de los funcionarios y el de los salarios y sueldos públicos, porque lo que están produciendo es un desequilibrio básico y están atentando contra un comportamiento muy positivo en términos de productividad del sector público español. Porque (eso también hay que decirlo) la productividad del sector público está por encima de los incrementos de las retribuciones tanto como el del privado y, en cambio, no se está produciendo una respuesta en términos retributivos a eso.

¿Cuáles son las consecuencias de esa política? Pues no hay ni una sola de ellas que sea buena. Es decir, está claro que la masa salarial no está subiendo a los niveles del seis por ciento que pretende el Gobierno. Pero está produciendo disfunciones básicas como es la excesiva dependencia de retribuciones complementarias, de retribuciones discrecionales a la productividad, etcétera, etcétera, que desincentivan y desprofesionalizan a la Administración Pública, y eso es tremendamente grave.

El conjunto de objeciones nos parece que es suficientemente sólido y serio, y no podemos aceptar un panorama idílico y triunfalista con el que nos ha obsequiado el portavoz socialista. Creemos que los desequilibrios de la economía española siguen estando ahí, están diagnosticados perfectamente y la respuesta presupuestaria a estos desequilibrios no es la adecuada, razón por la cual, por supuesto, nuestro Grupo insiste en el mantenimiento del veto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a otro grupo, algunos señores senadores se han dirigido «soto voce» a esta mesa, advirtiéndole la falta de taquígrafos. Esta presidencia quiere decir que, con mucha antelación, enviamos un escrito al Presidente de la Cámara para que fuera provista de taquígrafos esta sesión. Nos sorprende que no están aquí. Vamos a hacer la gestión en el momento oportuno de inquirir la razón de la ausencia, pero insisto en que la Mesa, en su tiempo y por escrito, como

está ordenado, así lo hizo. En cualquier caso, se está grabando todo el debate que aquí se está produciendo.

El portavoz del Grupo parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros hemos reconocido que, efectivamente, mejoramos económicamente y también que estamos dispuestos a decir y a reconocer que lo hicimos globalmente, pero entendemos que no lo suficiente y, por tanto, tendríamos que recuperar más la distancia, la diferencia que nos separa de los otros países de la Comunidad Económica Europea.

En cuanto a la competitividad, es verdad que el Gobierno la defiende y, además, ha ofrecido un pacto de competitividad, pero no olvidemos que este pacto es posterior a la confección y, por tanto, a la elaboración de estos Presupuestos. Fue posterior, precisamente, a raíz de la presentación de estos Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nosotros entendemos que esos Presupuestos no están adaptados a lo que necesitaría la competitividad española de cara a uno de enero de 1990. Por lo tanto, por esta razón, entre otras, nos vemos obligados a mantener veto a la totalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Por el Grupo Popular? (Pausa.)

El señor García Royo tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a contestar puntualmente al portavoz socialista.

Yo creo que usted no se ha visto los Presupuestos porque me pregunta de dónde he extraído yo la cuestión en términos de necesidades. De un libro que no edito yo, que lo edita el Ministerio; está en la página 8 del libro que menos se lee, el de los Presupuestos consolidados. La pregunta no sé si es que encierra ignorancia o es capciosa. Ahí lo tiene usted, un billón 900 mil pesetas.

Me imaginaba que tendría que salir a relucir en el tema de la generación de empleo este debate. Yo le diré a usted que puede que esos 55.000 nuevos puestos que se han generado sea una consecuencia estacional y me tendría que definir algo que en este momento está flotando; es decir, que me diga cómo se componen esas listas ingentes de parados si todos los sectores que realmente están parados están incluidos en las listas, porque alguien, y precisamente no próximo al partido Popular, ya está indagando que es posible que llegemos a cuatro millones de parados. No lo he dicho yo, pero lo apunto.

Me dice usted que las medidas presupuestarias y tributarias del año pasado han servido. Bueno, dígame usted cómo está la sanidad, la justicia, la enseñanza, los transportes públicos, y entonces le diré que eso ha funcionado. Porque yo tengo que medir el grado, digamos, de bienestar o del servicio público prestado como consecuencia de

la financiación que ha tenido. Es algo muy primario. Bueno, pues eso no ha surtido efecto y ahí están los rendimientos, las liquidaciones, las estadísticas que periódicamente nos remite el Gobierno y las consecuencias de pacto que estamos contemplando. Insisto, estos presupuestos no es que sean ligeramente expansivos; si se admite en términos de necesidad, y espero que no me lo nieguen, un billón 900 mil millones son descaradamente expansivos.

Finalmente, pero no voy a tener tiempo, quería entrar en algo que es de lamentar en esta Cámara y que nos ha tocado. Aquí se manipula el Fondo de Compensación Interterritorial en estos Presupuestos y hay comunidades autónomas que no van a participar porque no da la renta per cápita para participar en la cuota. Han repartido, lo que se llama «half and half», las comunidades que van a participar y las que no, y yo me pregunto: ¿Por qué en la Sección 32 no se ha asignado algo a esas comunidades para que no queden carentes del Fondo de Compensación y no que merman a las otras una capacidad de financiación que está exigida por la Constitución, por la Ley Orgánica de Financiación y por el propio texto de la LOFCA?

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo parlamentario Socialista.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías por sus palabras.

Agradezco especialmente al representante del Grupo parlamentario de Convergència i Unió que reconozca que ya vamos mejorando, pero no es suficiente. Es importante que se hagan esos reconocimientos porque son ciertos. Yo creo que es justo hacer oposición y reconocer que se está creciendo por encima del cinco por ciento del PIB o que está cayendo el desempleo porque son datos que están ahí. Lo agradezco sinceramente.

Yo creo, señor Pujana, que el que le guste o no el Estado no será por responsabilidad de este portavoz que le habla, será por otras razones serias. No me dé usted tanta importancia que desde luego no me la merezco, ni las palabras que yo le he dirigido antes creo que tampoco se merecen la respuesta que usted ha dado, porque yo me he limitado, señor Pujana, a decirle que es conocido por todo el mundo, desde el comienzo de la década de los años 30, que las expectativas son claves a la hora de determinar los niveles de inversión, mucho más que el coste de la inversión, y lo hemos visto aquí, en nuestro país. En determinados momentos, aún existiendo una situación económica favorable para poder invertir, no llegaban inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque las expectativas políticas, sociales, etcétera, eran muy negativas, y esto ocurre en todos los países del mundo. Eso en cuanto a la inversión en general. Si usted hace referencia a la inversión del sector público exclusivamente, si usted hace referencia a la inversión del tercer sector, convendrá usted conmigo que el País Vasco no sale mal parado en estos presupuestos, al menos, señoría, esa es la impresión que yo saco de comparar las inversiones que se producen para el año

1990 con el resto de las provincias, por población o por cualquier otro baremo que usted quiera considerar, al margen ya de las transferencias que puedan o no estar cedidas a la comunidad autónoma.

Por consiguiente eso es lo que tengo que decirle y desde luego reitero que no me doy tanta importancia como para decidir sobre sus planteamientos ideológicos.

Señor Aguirre la inflación crece. Yo no lo he negado, en absoluto. La balanza por cuenta corriente tiene déficit, el año anterior y el otro, y los tres anteriores superávit. Lo que hay que preguntarse es por qué en los años justamente de reconversión industrial la balanza por cuenta corriente tenía superávit y cuando finaliza la reconversión industrial y se necesitan mayores inversiones en bienes de equipo arroja déficits. Ese es el análisis que le quiero presentar. Sabiéndole preocupado por todos los temas relacionados con la balanza de pagos, debería tener muy en cuenta que un país que necesita inversiones en bienes de equipo, lógicamente, tiene necesidades que cubrir a través del mercado exterior, al margen de otra serie de compras, de «in punt» que adquirirlos en el mercado interior supondría una carga muy elevada sobre el índice de precios, lo cual, en definitiva, generaría mucha más inflación y problemas al mercado interior. En una etapa de transición creo que eso es así. De todas formas, convendrá conmigo su señoría en que los 44.000 millones de dólares de reserva de divisas que tiene este país son un colchón importante para cualquier política de ajustes si se necesitase en el futuro. Creo que eso lo reconocerá su señoría fácilmente.

Respecto a las inversiones, no he mezclado a ninguna organización quizá no demasiado digna de ser citada en esta Cámara. Me he limitado a analizar el tema clave de las expectativas a la hora de determinar las inversiones del sector privado y eso es algo que está en los libros de texto, señorías. Puedo admitir que a nivel de Presupuestos se traslade al sector público un problema de las inversiones públicas, que puedan ir hacia un sector o a otro, o hacia una región u otra, o una provincia u otra determinada, pero convendrá conmigo su señoría en que el tema de las inversiones, en general, por lo que respecta a las inversiones privadas e, incluso, a las inversiones del sector exterior, son las que son, y, en concreto, si son en otros sectores o en otras regiones las que son, incluso respecto a las inversiones extranjeras, es porque esas expectativas son favorables, lisa y llanamente.

Mire usted, estamos hablando de déficit de caja o, al final, señor García Royo, yo no me entero de nada. El déficit de caja es justamente lo que le he dicho, pero no tengo ningún inconveniente en que a posteriori revise usted sus datos conmigo o, si quiere, que continuemos esta conversación en Pleno. No sé si usted está incluyendo las transferencias entre sectores o qué clase de análisis es el que me está haciendo. Pero, desde luego, no entiendo las cuentas que me está presentando. Y si, como única valoración, al margen de una breve referencia a la inflación, de la oposición del Grupo Popular a estos Presupuestos es la referencia que usted me hace al FCI, muy bien, ya veo que es una razón importante para oponerse a estos Pre-

supuestos. No obstante, supongo que habrá algún tipo de razón de peso que usted espera mostrarnos en el Pleno y que, quizá, no considera conveniente expresarnos aquí.

Al representante del Grupo del Centro Democrático y Social, respecto a las continuas referencias que hace a que no se va a cumplir el objetivo del crecimiento del PIB en el cuatro por ciento y que finalmente va a terminar el año 1990 creciendo en torno al cinco por ciento y que, por lo tanto, se opone a estos Presupuestos porque las cifras, en definitiva, no se ajustan a lo previsto, tengo que decirle que si esta economía crece al cinco por ciento y sin que se distorsione la inflación... *(El señor representante del Grupo del CDS pronuncia palabras que no se perciben.)* Mejor, todavía. Pues, entonces, voy al análisis que quizá les interese más a ustedes.

Parece que dentro del equilibrio oferta igual demanda la única referencia que ustedes consideran es que no se van a cumplir los objetivos porque la oferta sube más. En todo caso, si no se cumplen los objetivos del Gobierno —que está por ver porque está claro que se está produciendo un cierto frenazo en los últimos días o, al menos, yo lo aprecio así— en cuanto, por ejemplo, a la cartera de pedidos de los empresarios —merece usted esa estadística—, convendrá conmigo —decía—, en que, si se produce un ligero frenazo de la demanda y se produce un ligero aumento de la oferta, habremos conseguido un equilibrio idéntico, sin que se produzca el necesario «gap» inflacionista. Estará de acuerdo conmigo en ese análisis. Sinceramente creo que no se va a producir lo que usted dice y si, de todas formas, se produce ese equilibrio a un nivel superior, tenga en cuenta que a nadie le importará ni nadie se va a rasgar las vestiduras, por decir que nos hemos equivocado, siempre que no se produzca ese desequilibrio posterior en los precios. Y de momento, a tenor de los datos que vamos a ver en breve, probablemente no se va a producir. Y ahí es donde de alguna forma se observa el control de la demanda.

Por consiguiente, señorías, creo que es necesario que estos Presupuestos cumplan el objetivo que tienen previsto, que no es otro que mantener un crecimiento equilibrado en torno al cuatro por ciento, sin el crecimiento actual de los precios, controlando, en definitiva, la inflación, evitando que ese aumento excesivo de la inflación repercuta negativamente en el sector exterior y buscando la senda idónea para situarnos en la Europa del 93 de la mejor manera posible. Y ahí está, finalmente, la importancia que tiene lo que ya se dijo en el Congreso por el señor Ministro de Economía: el pacto de competitividad de todas las fuerzas políticas y sociales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Hemos terminado el debate de los cinco vetos presentados. Seguidamente iniciamos la discusión de las enmiendas presentadas al Preámbulo de este proyecto de Ley. *(El señor García Royo pide la palabra.)*

Preámbulo

Por favor, ruego mantengan silencio y cesen los diálogos, al menos, los altisonantes.

Tiene la palabra el Senador García Royo.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias.

Con la debida prudencia, por supuesto, quería decir que, por si las modificaciones que se van a introducir en el texto del proyecto afectaran de alguna manera al Preámbulo, propongo que se debatiera al final.

El señor PRESIDENTE: Ya lo había acordado así la Mesa anteriormente. En todo caso, en virtud del principio de «lo que abunda, no daña», queda perfectamente enterada la Mesa. No obstante, se le agradece su buena disposición y colaboración.

Hay presentada una enmienda firmada por don Rafael García y otros del Grupo Mixto al Preámbulo, con el número 811.

Para su defensa, por tiempo de un minuto, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

No preciso siquiera de un minuto.

Se trata de una enmienda de estilo pero que tiene, a nuestro juicio, un contenido que es necesario reflejar por cuanto que nosotros pretendemos que se suprima el párrafo en el que se señala que se culmina la equiparación en cuantías entre las pensiones de los regímenes de Clases Pasivas y las de la Seguridad Social. Nosotros entendemos que eso no es exactamente cierto en los Presupuestos y que, por tanto, sin perjuicio de que se tienda, como se tiende, a esa equiparación, la realidad es que todavía no se alcanza y, por tanto, el párrafo es ocioso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Grupo Popular tiene presentadas las enmiendas números 20 y 21 al Preámbulo.

Para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular por tiempo de cinco minutos.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Pretendemos añadir en el párrafo cuarto donde pone «sociedades mercantiles», la palabra «estatales». Es la enmienda número 20.

Igualmente, pretendemos que la enmienda número 21 sea añadida al final del párrafo octavo, después de «se culmina la equiparación en cuantías entre las pensiones de los Regímenes de Clases Pasivas y los de la Seguridad Social».

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: En primer lugar, quiero indicar algo que va a ser norma en el debate del Preámbulo —quizá no de excesiva importancia— y también en

el del resto de títulos y secciones. El Grupo Socialista está revisando detenidamente las enmiendas presentadas por todos los grupos, y por sus señorías individualmente, y de cara al Pleno ya veremos cuál es la postura que tomamos. En cualquier caso, nos parece que el preámbulo está bien definido y presentado, y de momento vamos a oponernos, por supuesto, igual que a los vetos que he defendido antes, como es obvio.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Entramos ahora en la discusión de las enmiendas presentadas al Título I. Se van a debatir todas las enmiendas presentadas a los artículos de dicho Título, salvo a los artículos uno, dos y cuatro, que ya se verán, en cuanto que numéricamente obligan a unas variaciones de pura matemática, de puro lucimiento de cantidades.

El Grupo Mixto, por la firma de don Rafael García y otros, tiene presentadas las enmiendas 812, 813 y 814, que puede pasar a defender por un minuto, ya que no son, como tales, enmiendas de grupo.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Las dos primeras enmiendas están íntimamente relacionadas. En la primera, pretendemos suprimir el punto quinto del artículo ocho, en cuanto que aquí se señala que se podrán generar créditos en los estados de gastos en los centros que realizan funciones de inspección y control, y que estas generaciones se aplicarán a la mejora de los servicios que lleven a cabo las citadas funciones de inspección y control.

Nosotros creemos que éste es un mecanismo irregular, ya que supone establecer, de alguna forma, compartimentos estancos en la Administración, y no es lógico que se apliquen a esta forma a las funciones de inspección y control, sino globalmente a la Administración, y a partir de ahí, aplicar para inspección y control lo que, en su caso, sea necesario.

Alternativamente, la enmienda siguiente, para el caso de que no se estime la primera, se refiere a que como mínimo se dé cuenta de estas generaciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

La enmienda 814 pretende la supresión de un párrafo que también incide en esta técnica, a nuestro juicio no acertada, del compartimento estanco, puesto que se refiere al patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa y pretende que esto se lleve a cabo por dicho Ministerio.

Perdón por la concisión en la defensa de estas enmiendas, pero un minuto de tiempo no da para profundizar más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Barbuzano pide la palabra.)

Senador Barbuzano, ¿para qué pide su señoría la palabra?

El señor BARBUZANO GONZALEZ: Para una cuestión de orden. Este Senador modestamente entendió esta mañana que había un tiempo de un minuto para la defensa

Título I

de cada enmienda particular. No creo haber entendido que por cada conjunto de enmiendas que se defendieran hubiera sólo un minuto. Perdone, señor Presidente, pero como no lo he entendido así, quería hacerlo constar.

El señor PRESIDENTE: Pues eso fue lo acordado, señoría, y lo siento mucho. Para las enmiendas de grupo, en la cantidad que sean, a un Título, o a una sección, hay cinco minutos, y para las enmiendas individuales, una, dos, o más, hay un minuto de tiempo. Por ejemplo, voy a dar al Senador García Royo —no al Grupo Popular— la palabra, ya que ha presentado a título particular las enmiendas números 1.174 y 1.176 al Título I, sin perjuicio de tomar en consideración las explicaciones que su señoría ha dado.

Tiene la palabra por un minuto. *(Pausa.)* Está comprendido en el minuto la búsqueda de las enmiendas. *(Risas.)*

El señor GARCIA ROYO: Sí, señor Presidente.

Me voy a referir en primer lugar a la enmienda al artículo nueve, dos. Entendemos que lo que se pretende en el texto es una asignación presupuestaria arbitraria y oportunista que impide al Parlamento el control, al menos, de los rendimientos derivados de la enajenación de inmuebles y, por supuesto, los rendimientos de ventas de productos farmacéuticos. Me estoy refiriendo concretamente al texto en tanto en cuanto se dice que con vigencia exclusiva durante 1990 corresponde al Ministerio de Defensa autorizar esas generaciones de créditos. El patrimonio nacional es algo que está integrado como propiamente se dice, en el patrimonio activo del Estado y puede ser que se impute el producto de la venta a necesidades de defensa, o puede que se impute a otras necesidades como, por ejemplo, recomponer el centro de formación profesional. Nos quejamos porque el control, al ser a nivel de departamento, va a ser imposible por esta Cámara. Esa es la razón de la enmienda. Creo que todavía ha sobrado algún segundo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentadas a este Título I las enmiendas 927, 928 y 929.

Tiene cinco minutos de tiempo como máximo, para la defensa de todas ellas.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Las enmiendas a este título son al artículo ocho. Pedimos la supresión de la regla segunda. ¿Por qué? Porque, a nuestro entender, lo que aquí se dice tendría que estar, en todo caso, en la Ley General Presupuestaria, para ver si de una vez por todas cuando se hable de los presupuestos hablemos sólo de ellos, y más adelante haremos la lista de leyes que cambian los presupuestos del Estado; leyes que incluso no tienen nada que ver con esos presupuestos del Estado. Haremos la relación completa.

Eso es otro de los temas que ustedes no aceptan, y esa es su responsabilidad, pero que quede claro que luego legislan los tribunales, porque hay que estar acudiendo

constantemente a ellos. Esto es algo que ustedes admiten, y si lo admiten, como digo, es su responsabilidad, pero este tema debe estar en la Ley General Presupuestaria. Estamos hablando de un país que pertenece a la CEE, luego aplíquense el cuento, porque en otros Estados cuando hay que modificar algo de la Ley General Presupuestaria se modifica en esa Ley, no en la ley de Presupuestos, que es una ley anual, mientras que la Ley General Presupuestaria tiene vigencia indefinida, y cuando se varía, se debate en las Cámaras. Eso es así. Esos Estados llevan muchos años de democracia y saben cómo hacerlo. Por lo tanto, no aprovechen la ley de Presupuestos para cambiar todo lo que le conviene a un determinado Ministerio. Eso, en cuanto a nuestra enmienda a la regla segunda.

Respecto a la regla quinta, algo se ha dicho ya por anteriores portavoces. A nosotros nos parece que hay que establecer un coto; es decir, si la norma quinta dice que podrán generar créditos en los estados de gastos, en los centros que realizan funciones de inspección y control, los ingresos derivados de sanciones y recargos acordados en los correspondientes procedimientos administrativos con ocasión de su efectivo ingreso en el Tesoro, y además que esto puede mejorar a los servicios sin especificar, acláremoslo, porque, si no, es dar un cheque en blanco al Ministerio de Economía y Hacienda cada vez que un inspector, por ejemplo, levante un acta. Es decir, si las primas que van a cobrar estos señores, y habrá muchos procedimientos para incentivar al personal, van a ir por ahí.

Nosotros presentamos dos alternativas. Una, que se elimine literalmente, o, en su caso, que se añada: Teniendo en cuenta, en todo caso, la prohibición contenida en el artículo 30 de la presente ley, porque el artículo 30 de esta ley dice que los funcionarios no podrán cobrar, etcétera. Dejémoslo claro. Como ustedes dicen que lo que abunda no perjudica, dejémoslo claro para que esta regla quinta quede perfectamente determinada.

Este es el sentido de nuestras enmiendas. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Insistimos, ante las preocupaciones de algunos grupos, y perdón por este paréntesis, en lo que dije antes. Esta Presidencia, como acordó en su momento la Mesa, pidió en tiempo y forma la presencia de taquígrafos a efectos de lucimiento de este debate en los «Diarios de Sesiones». No comprendo por qué no están aquí. He rogado al señor Vicepresidente primero de esta Mesa que haga alguna investigación a este respecto y, en todo caso, la Mesa de la Comisión tomará —si tiene que tomar— algunas medidas o hará las alegaciones que tenga que hacer.

El Grupo Parlamentario de CDS tiene presentada la enmienda 529.

Tiene cinco minutos para la defensa de esta enmienda, lo que es una generosidad puramente formal, y no depende de la voluntad del Presidente.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente. No será necesaria esa generosidad.

Nosotros teníamos una enmienda a la totalidad del Tí-

tulo, que ha sido incorporada en el trámite en el Congreso de los Diputados, limitadora de las cuantías relativas a los créditos extraordinarios y suplementos de créditos al dos y medio por ciento de los créditos ordinarios que se autorizan.

Teniendo en cuenta este hecho y sin perjuicio de que nuestro grupo vaya a apoyar, como de hecho apoyará, algunas de las enmiendas que mejoran el control y el conocimiento de la gestión, sobre todo de las modificaciones de créditos por parte del Gobierno, vamos a retirarla, acogiendo la buena voluntad demostrada, que ha anunciado el portavoz socialista, sobre el cariñoso estudio que va a hacer del resto de enmiendas.

Queda, por tanto, retirada nuestra enmienda de totalidad al Título I.

El señor PRESIDENTE: El Grupo parlamentario de Convergència i Unió tiene presentadas a este Título las enmiendas 637, 638, 639, 640, 641 y 642.

Para su defensa, tiene cinco minutos.

El señor CARDONA I VILA: Esas son las enmiendas que hemos presentado a este Título sobre aprobación y modificación de los Presupuestos.

Tres hacen referencia al Capítulo 2, sobre normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios, concretamente la 637, a la regla quinta del artículo octavo, sobre principios generales, en las que proponemos que «con la única excepción del Capítulo 1, Gastos del Personal». Creo que está justificado el objetivo de la enmienda en su propia redacción.

En la 638 proponemos un nuevo apartado al artículo diez de limitación al reconocimiento de obligaciones, con el objetivo de compensar el mayor gasto que suponen las ampliaciones de crédito, y ello sin modificar el volumen global presupuestado.

Por otra parte, cuatro son las enmiendas al Capítulo 3, que hace referencia a la Seguridad Social, tres concretamente al artículo once. La 639, con la adición de un nuevo párrafo al apartado 4, para evitar los desfases de tesorería existentes en las comunidades autónomas de gestión transferidas originados por el retraso e instrumentar las liquidaciones anuales. La 640 también propone la adición de un nuevo apartado 5, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria del Real Decreto 1.088, de 8 de septiembre de 1989. La 641 propone la adición de un nuevo apartado, que podríamos llamar 6, en el que propone que el Centro de Paraplégicos de Toledo y el Centro Nacional de Silicosis de Asturias no tengan la consideración de especializados o, por lo menos, exclusivos, ya que no se considera adecuado el mantener centros sanitarios reservados únicamente al tratamiento de un grupo de patologías, sean paraplégicos, como en el caso de Toledo, o sean de silicosis, como en el de Asturias, ya que en estos momentos existen centros sanitarios que están tratando estas patologías.

Finalmente, la 642 propone un nuevo artículo once bis, que se refiere fundamentalmente a que el Ministerio de Sanidad y Consumo establezca conjuntamente con las co-

munidades autónomas los criterios de compensación financiera. Eso está de acuerdo con nuestra forma de pensar sobre lo que tendría que ser el Estado de las autonomías y, además, por la aplicación de lo dispuesto en la Ley General de Sanidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Antes de seguir, el señor Vicepresidente primero ha hecho la gestión que esta Mesa le había encomendado. Se nos informa por el señor Letrado Mayor que estaban advertidas y ordenada la presencia de las señoritas taquígrafas y estenotipistas, que le sorprende que no estén, que espera estén enseguida y que ya se nos dirán las causas. En cualquier caso, lo debatido desde que empezamos hasta ahora se recogerá si no en el «Diario», sí en documentos anejos y suficientemente solventes y fehacientes. Esperamos que la presencia de estos funcionarios no se demore mucho. Repito, es la información que nos trae el señor Vicepresidente Primero.

El Grupo Popular tiene las enmiendas 22 a 31, ambas inclusive, y tiene cinco minutos para su defensa.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecerle ese celo para que la Comisión no se desarrolle con esa carencia de testimonio, que se pretende subsanar.

La enmienda número 22, ya se ha dicho aquí, pretende desplazar la Ley General Presupuestaria, que precisamente y con acierto el Gobierno socialista refundió hace escasamente un año o año y medio, y ahora de nuevo vuelve al artículo 70.1, que daba alguna garantía, al menos en lo que a conceptos se refiere, para que se establezca, no, por conceptos, sino por artículos, la competencia de disponibilidad de créditos.

La regla quinta tiene un particular interés y hay dos enmiendas, la 23 y la 24, con la misma tendencia de supresión. También se ha dicho que si no va a ser pernicioso que los centros que realizan funciones de inspección y control generen crédito en los estados de gastos. Todos recordamos —no digo en nuestras carnes, pero sí en nuestra profesión de asesoría— aquellos intereses que había por parte de los inspectores, que eran gratos y estimulantes, sobre si había un mayor o menor interés en llevar a cabo un acta modelo 14. Nosotros lo comprendemos, siempre y cuando se añada al final la expresión de que estas incorporaciones (estoy en la enmienda número 25) en ningún caso se aplicarán al Capítulo 1 del personal. No habría por ahí ningún inconveniente.

En cuanto a la enmienda 24, de principios generales, es la que trata de la inspección. La doy por reproducida y reservaré su defensa para el Pleno.

La enmienda número 26 es coherente con la anterior. La limitación de reconocimiento de obligaciones que se establece en el artículo diez es altamente sorpresiva, señor Presidente. La Ley General Presupuestaria la establece en el artículo 60, sin citar para nada que sean susceptibles estos créditos de modificación por créditos extraor-

dinarios, si no hay antecedentes económicos o suplementos de crédito, si los hubiera. Aquí, en el artículo diez, de una manera o de otra, queda totalmente transformado, repito, el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y lo que pretende mi grupo es que se respete, puesto que lo que pretende el Gobierno Socialista es hacernos ver que se van a contraer los créditos a las cantidades presupuestas en el gasto. Pero, fíjese señor Presidente, el año pasado fueron 283.000 millones de créditos extraordinarios los que se originaron y han quedado 884.000 millones de pesetas pendientes de ejecución. Creo que el artículo 10 sobra. El artículo veintiocho pretende independizar los gastos corrientes de los gastos de capital a efectos del límite establecido en los Capítulos 1 y 4. Insistimos en esta enmienda.

Tenemos particular interés en la enmienda número 30. Nosotros decimos que el artículo diez, párrafo segundo, diga que el Gobierno comunicará trimestralmente, yo llamo la atención al celo del portavoz socialista, a las Comisiones de Presupuestos de ambas Cámaras, Congreso y Senado, las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado realizadas en dicho período, a los efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, así como de acuerdo con la modificación presupuestaria a que se refiere el artículo 8.2 de esta Ley. Con lo cual ve que se obvia y somos en este momento constructivos. Al menos, podrían dar cuenta posteriormente a esta Cámara para su conocimiento; no decimos antes, porque resulta materialmente imposible.

Por supuesto, doy por defendidas las enmiendas que no haya invocado.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente, y señorías.

Ya veo que las mayores referencias han sido al artículo diez. Quiero decirle, señor García Royo, que si usted revisa los «Diarios de Sesiones» del Congreso y del Senado, y aunque yo soy nuevo en esta casa alguno ya me he leído, no verá ni un solo incremento de gastos por la vía de modificaciones de crédito que se haya presentado a las Cámaras y no haya sido autorizado por su grupo. Es una cuestión curiosa, pero le aconsejo que se vea ese dato, porque es interesante, es importante. Es simplemente una contestación a un debate que quizás fuera del debate anterior de los vetos, pero que usted ha traído a este, no yo.

En cualquier caso, sí que quiero agradecer a los representantes del Centro Democrático y Social, también está ahí el portavoz general del grupo, que hayan retirado el veto a la totalidad del Título I. De todas formas quiero decirles también que, de alguna manera, estaban ustedes obligados a retirar ese veto a ese artículo, puesto que ya había habido una enmienda transaccional en el Congreso que había recogido el sentimiento propuesto por ustedes al artículo diez. Por consiguiente, yo no le veía mucho sen-

tido a ese veto tampoco. De todas formas, muchas gracias.

Pero contestando muy brevemente a algunas de las enmiendas —pretendía hacerlo a todas, tengo tiempo para que, al menos sobre cada una de ellas, quede la valoración del Grupo Socialista— quiero decir, empezando por la del artículo diez del Título I, que este artículo no tiene más, en sí mismo, que la propia limitación global en cuanto que los créditos no pueden superar unos determinados porcentajes. En definitiva, ese artículo viene a suponer que si se cumpliera el Presupuesto de ingresos —bastante ajustado por cierto— podríamos concluir que ya sabemos ahora, más o menos, cuál es el déficit de final de ejercicio. No es conveniente, señor García Royo, acudir a un mayor grado de desagregación, y las enmiendas que van en ese sentido creo que no son procedentes. Por otra parte, ustedes saben perfectamente de los importantes avances conseguidos en cuanto al ámbito de los presupuestos —esto creo que es justo reconocerlo— y en cuanto al sometimiento a la disciplina presupuestaria de parcelas que, hasta ahora, quedaban excluidas. Esto ha sido reconocido por el propio Grupo del Centro Democrático y Social en el Congreso, y creo que es un reconocimiento que le honra.

Otra de las enmiendas presentadas a este artículo diez, como las del Grupo Popular números 27, 28 y 29, distorsionan claramente, en mi opinión, el propio contenido del artículo, ya que la limitación que en el mismo se establece, debe afectar al Presupuesto no financiero en su conjunto sin descender, como decía antes, a un mayor grado de desagregación. No es bueno introducir elementos de rigideces como se derivan de sus enmiendas. No es bueno impedir que se aprovechen los saldos de los programas y capítulos que reflejen un menor reconocimiento de obligaciones, en aquellos otros en los que, por las circunstancias que se hayan producido a lo largo del ejercicio, se produzca el efecto contrario. No veo por qué tiene que limitarse esto.

Por otra parte, con algunas de las limitaciones que proponen las enmiendas presentadas al artículo diez, quedarían sin ninguna utilidad práctica algunas modificaciones presupuestarias que supusiesen un aumento de los créditos o ampliaciones de crédito. Por ejemplo, se llegaría, incluso, a la paradoja de que, autorizándose esas modificaciones de crédito, no pudieran utilizarse por la limitación que pretenden introducir algunas de estas enmiendas.

Por otra parte, la enmienda número 30 del Grupo Popular, que pretende introducir la obligación del Gobierno de comunicar trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos Congreso y Senado las modificaciones presupuestarias efectuadas, implica, en mi opinión, la reforma tácita del texto refundido de la Ley General Presupuestaria que sólo contempla la obligatoriedad, por parte del Gobierno, de dar cuenta a las Cortes Generales, de los créditos extraordinarios aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La enmienda de los Senadores del Grupo Nacionalista Vasco hace referencia a la supresión de la regla segunda del artículo ocho por no ser una regla de vigencia indefinida y porque se confunde el concepto de modificación

presupuestaria con el de transferencia, he de decir que, si en estos Presupuestos se incluye una norma que completa el régimen de vinculación jurídico y con vigencia exclusiva para 1990 —repito, con vigencia exclusiva para 1990—, esta es, precisamente, la razón que, obviamente, justifica su no inclusión en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. No cabe deducir de ello, en absoluto, una situación de inseguridad normativa, ya que el precepto es claro y, lejos de suponer un obstáculo al seguimiento y control presupuestario al que alude la enmienda, implica un requisito adicional a las modificaciones del Presupuesto, vía transferencia de crédito, en aras de un mayor control sobre el mismo.

Lo indicado para el Grupo Nacionalista Vasco lo hago extensible, igualmente, para el Grupo Popular que, en su enmienda número 22, aprecia dificultad en el seguimiento y control presupuestario. Al margen de otros aspectos, creo que la respuesta es válida en ambos casos.

Pasamos a la ampliamente debatida regla quinta del artículo ocho. La regla quinta establece, como sus señorías saben, que podrán generarse créditos en los estados de gastos de los centros que realicen funciones de inspección y control, los ingresos derivados de sanciones y recargos. Estas generaciones se aplicarán a la mejora de los servicios. En mi opinión se trata, únicamente, de que, estando calculados en los Presupuestos los gastos de esas secciones y, por consiguiente, la financiación de sus gastos, no se ve ningún inconveniente en que esta generación adicional de gastos pueda destinarse a la mejora de la realización de un servicio importantísimo —no lo olviden sus señorías— como es la lucha contra el fraude fiscal, para el Gobierno y para el Grupo parlamentario Socialista.

Respecto de la enmiendas del Grupo Mixto y del señor García Royo sobre el artículo nueve, apartado dos, en las que consideran injustificada la competencia que se atribuye al Ministerio de Defensa para autorizar generaciones de créditos procedentes de la venta de bienes inmuebles, he de decirles que esto no tiene otro objeto que flexibilizar la gestión del patrimonio inmobiliario de la Defensa con el fin de permitir una actuación más flexible de la Defensa en materia urbanística e inmobiliaria para, de esta manera, hacer frente a las exigencias que se derivan de la reestructuración territorial que, como sus señorías saben, se está produciendo en los últimos años en los tres Ejércitos, junto a la cada vez más urgente necesidad de trasladar las instalaciones militares fuera de los núcleos urbanos.

Por último, quiero referirme a las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió al artículo dos. Perdón, señor Presidente, el artículo dos no se incluye ¿no? ¿Se deja para el final?

El señor PRESIDENTE: Sí, el artículo dos es para el final. Se excluyen uno, dos y cuatro que no valen en cuanto a la votación, pero en el debate sí podrá contestar su señoría.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor

Presidente. Entonces continuaré mi intervención sobre este Título, al final.

He terminado. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.

Insisto en que lo que se aplaza es la votación de los artículos uno, dos y cuatro.

Corresponde ahora un turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente. Quería señalar, en relación con estas tres enmiendas, y en especial con la relativa al artículo ocho, a la famosa regla quinta, que, precisamente, los argumentos del portavoz socialista, a mi juicio, abonan nuestra tesis. Porque, ciertamente, nosotros coincidimos con él en la necesidad de la lucha contra el fraude, pero para la lucha contra el fraude hay que establecer y presupuestar previamente los mecanismos adecuados, y no esperar al albur de los mejores o peores resultados derivados de las sanciones y recargos. De ahí que nos parezca que ese interés que nosotros compartimos en la lucha contra el fraude, deba comportar el que se dote de mejores medios, no esperar a que se produzca, a posteriori, esta vía indirecta de ingresos por sanciones y recargos.

En todo caso, deben servir para atender a aquellos aspectos de la Administración que se estime conveniente; pero entendemos nosotros, que esta forma de financiación es irregular. Nada tiene que ver esto, insisto, con una mejor lucha contra el fraude que debe de venir por la dotación adecuada de presupuestos. Lo mismo ocurre con relación al patrimonio inmobiliario de Defensa y a su realización que puede, en parte, dedicarse a eso, pero no necesariamente. Dependerá de las necesidades del Ministerio de Defensa y de otros Ministerios. Es una inspección que nosotros consideramos inaceptable y de ahí que sostengamos nuestra enmienda número 814.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por tres minutos.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Respecto de nuestra enmienda referida al artículo 8.2 diré que todos los Presupuestos Generales del Estado tienen vigencia para el año corriente; es decir éste será para el año 1990; el del año que viene será para el año 1991, etcétera. Con esto quiero decir que no hemos resuelto el problema; el problema es de fondo y se repite en tantos artículos que la Ley General Tributaria no sólo se cambia en estos Presupuestos en el artículo 8, sino en otra serie de artículos.

Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga un debate de la Ley General Presupuestaria. Cambiemos todo lo que haya que cambiar, porque es una ley plurianual o debería serlo así. Lo que se modifica en los Presupuestos de cada año es la ley de cada año. Si ustedes modifican

cada año la Ley General Presupuestaria, en la medida en que quiera el Ministerio, habrá que volver a hacer cada año una nueva Ley General Presupuestaria. Los temas son completamente distintos. Respecto del famoso artículo ocho, enmienda quinta, le diré a usted que no me hable de fraude. En esta Cámara no hay nadie a quien le favorezca el fraude. Y a mí por razones obvias, ya que tengo responsabilidades de recaudación, menos que a nadie. Lo que sí le digo es que tal como está redactado el artículo usted ha de reconocer que prácticamente eso va a ser (nadie ha dicho que no se mejore el servicio) para premiar actuaciones personales. Nosotros decimos que no hay ni una sola enmienda en la que no se diga que no se luche contra el fraude; ninguna dice que no se mejoren los servicios. Lo único que pedimos es que en esa enmienda se recoja cómo se van a ampliar los ingresos por recargos, por multas, etcétera, relativos al tema fiscal y al tema de la Seguridad Social. Es decir, queremos que no se haga a la libre discreción del Ministerio de Economía y Hacienda. Fíjese usted en la importancia que tiene esto para el Ministerio de Economía y Hacienda. Recuerdo que hace una semana, un Ministro que no era el de Economía, hablaba de la gran fuerza que tiene el Ministerio de Economía y Hacienda en este Estado. Le puede ocurrir al que dependa de la Seguridad Social que todas las multas y recargos las va a poder aplicar el Ministerio de Economía y Hacienda exclusivamente con esta Ley. Esto es algo que ustedes están aceptando; no solamente es para la inspección tributaria, sino que es para otra serie de inspecciones, llámese Trabajo, llámese Seguridad Social, etcétera.

Al final, con este artículo se dice que el Ministerio de Economía y Hacienda es el que va a poder influir sobre todos los demás Ministerios. Nadie dice que no se luche contra el fraude; nadie dice absolutamente nada; nadie se opone a que lo que se ingrese sea para mejorar los servicios de la Seguridad Social, de Tráfico o de lo que sea preciso; lo que sí se dice es que se concrete en qué forma esa cuestión no va a ser sólo decisión del Ministerio de Economía y Hacienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El portavoz del CDS quiere hacer uso de la palabra? *(Pausa.)*

¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? *(Pausa.)*
Tiene la palabra el señor Cardona i Vila.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, no hay enmiendas nuestras al artículo dos, debe de haber sido un error. En cualquier caso, repetimos que nuestras enmiendas al Capítulo 2, son la 637 y 638; y al Capítulo 3 la 39, 40, 41 y 42. En cuanto a la regla quinta del artículo ocho, nosotros insistimos en la explicación. Proponemos, con la única excepción del Capítulo 1, es decir, el correspondiente a los gastos de personal porque dice: («manteniendo la finalidad de mejorar los servicios»; y en eso estamos de acuerdo) la supresión del último párrafo hasta donde dice «inspección y control». Repito que la justificación viene nada porque

dice «manteniendo la finalidad de mejorar los servicios»; estamos de acuerdo. También entendemos que no se tendrían que producir por estas causas situaciones retributivas que pudieran ser discriminatorias respecto de las de carácter general, que resultan de lo dispuesto en el capítulo 1 del Título III de la presente Ley. Por eso, proponemos la supresión, o modificación en vez de supresión, de la excepción que hacemos del Capítulo 1; es decir, lo correspondiente a los gastos de personal.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra por tres minutos, el señor García Royo.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a insistir en el contenido de nuestras enmiendas. Con referencia al punto segundo le voy a recordar al portavoz socialista que si hay un Ministerio que ejecuta mal el Presupuesto, ése es el Ministerio de Defensa. Estoy en condiciones de enseñarle estadísticas de la Intervención general para que usted vea lo mal que paga y lo mal que contrae obligaciones el Ministerio de Defensa. Es mosqueante la concesión que aquí se le hace. Digo «mosqueante» aunque no sea muy respetuoso porque veo que esta tarde vamos a tener que tragar «sapos» y es bueno que se vaya acostumbrando...

El señor PRESIDENTE: A la Presidencia no le gusta esa palabra ni en su sintaxis ni en su etimología. Pienso que utilizar la palabra «mosqueante» quizá no sea lo más adecuado.

El señor GARCIA ROYO: Retiro el término «zoológico».

Decía que con el Ministerio de Defensa hay que tener cuidado. En cuanto al artículo 10 yo creo que el portavoz socialista ha sido muy parco. El exceso de economicismo o de teorización ha sido manifiesto.

El artículo diez está hablando de las operaciones no financieras. Entérese usted. Las operaciones financieras se excluyen de los artículos nueve y diez. Y ahí en el ejercicio anterior, página seis de la memoria, se ve que ustedes han generado 2.300 millones de ampliaciones de crédito.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Perdona por la observación lingüística a que me he referido antes.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.

El señor GARCIA SANCHEZ: Brevemente, señor Presidente.

Como bien apunta el portavoz del Convergència i Unió, había dejado de contestar alguna de sus enmiendas al artículo once y quisiera en este turno, si me lo permite, contestarle aunque fuera brevemente.

No obstante, también abusando de la benevolencia del portavoz de Convergència, voy a dejar este tema para el final.

Sí que quisiera decirle al Senador Fuentes y al Senador Aguirre que respecto de sus enmiendas de la regla quinta del artículo ocho, los medios, señor Fuentes y señor Aguirre, ya están dotados; los presupuestos de ingresos y gastos ya están previstos. Por consiguiente, nosotros no vemos ningún inconveniente en que ese incremento de gastos que se produzca pueda destinarse a la mejora del servicio; no a cualquier fin, sólo al que se autorice, tal y como se explica y se dice en el artículo: «para ese mejor fin». No es, señorías, porque no estén dotados ya de los medios convenientes y necesarios, que lo están.

Lo mismo se puede decir respecto de la enmienda relativa al Ministerio de Defensa. Se trata, señorías, de flexibilizar estas actuaciones; se trata creo yo, de mejorar con esa flexibilidad, de no entorpecer; pero no veo, señor García Royo, que haya especiales problemas y no veo que tenga que ver nada la filosofía de las moscas con el tema que nos ocupa.

Quiero referirme a las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo de Convergencia i Unió al artículo once, y debo decirle lo siguiente. La participación de las comunidades autónomas en las desviaciones presupuestarias del INSALUD están previstas en sus respectivos reales decretos de traspaso de competencias en materia de servicios del INSALUD. De acuerdo con estas normas dicha participación se refiere al ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se produce la desviación. La aceptación por ejemplo, de la enmienda presentada por ustedes número 639, supondría incrementar el gasto presupuestario del INSALUD. En segundo lugar, debo decirles que la financiación por el Estado de los gastos derivados de la universalización de la asistencia sanitaria de las personas sin recursos ya está contemplada en el presupuesto inicial también del INSALUD. De este presupuesto participan las comunidades autónomas, con régimen transferido en función de los índices respectivos de población protegida.

Por consiguiente, a nuestro Grupo no le parece necesaria la enmienda número 640, señoría.

Por lo que se refiere a la propuesta de exclusión del Centro Nacional de Silicosis de Asturias o el de Paraplégicos de Toledo argumentando que no son centros nacionales, debo decirle señoría que, como usted conoce perfectamente, el carácter de nacionales de estos centros les viene dado porque pueden ir allí beneficiarios de Cataluña, como de Andalucía, Asturias o Toledo por poner un ejemplo. Es precisamente por eso por lo que tienen el carácter de nacional, por tanto, no veo por qué se tiene que producir esa exclusión.

Por último en cuanto a la compensación entre comunidades autónomas por prestación de servicios, debo decirle que ya está contemplado en la Ley General de Sanidad, correspondiéndole al Gobierno, en todo caso, instrumentar su desarrollo conforme a los criterios establecidos en la ley. Por consiguiente, tampoco veo que tenga mucho sentido, señoría —y se lo digo con todo respeto— la enmienda número 642.

Eso es todo. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Hemos terminado la discusión del Título I. Pasamos, por tanto, al Título II.

Don Rafael García y otros del Grupo Mixto tiene presentadas a este Título, que abarca los artículos 12 a 18, las enmiendas número 815, 816, 817, 818 y 819. Tiene un minuto para su defensa.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente, voy a dar por defendidas las enmiendas a partir de la 816 y me voy a centrar en la 815 porque es la única forma que veo de poder hacerlo en un minuto.

La enmienda número 815 pide la supresión del último inciso del artículo 14 (estamos hablando de la modificación del artículo 32, segundo párrafo) referido a la contratación en el ámbito de la Administración del Estado. Aquí concretamente se señala que, cuando la autoridad que haya de otorgar la aprobación presuma fundamentalmente que la proposición no pueda ser normalmente cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, se solicitará informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen. Nosotros pedimos la supresión de este último apartado «cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen», porque estimamos que en estos supuestos se debe exigir una mayor garantía y, por tanto, el informe de la Junta Consultiva de Contratación debería producirse en todo caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Senador don José María García Royo tiene un minuto para defender su enmienda número 1.177.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta enmienda es una modificación a la Ley General Presupuestaria, y este Senador entiende que debería de ir en una adicional, pero ya que está situada en el debate, la voy a defender con gusto y brevemente.

En los Presupuestos Generales del Estado que estamos debatiendo se nos dice que el Gobierno Socialista acometerá el control o los grados de realización del objetivo costo presupuestario-desviación física y financiera que se haya producido en relación con las previsiones realizadas, así como las causas de tales desviaciones, todo ello de acuerdo con las auditorías de siete programas. Ahí no me duelen prendas en felicitar al Gobierno Socialista porque vaya poco a poco al control presupuestario vía programas; ya era hora, porque hasta el momento sólo teníamos los objetivos —como conocerá su señoría— y eso no decía casi nada. Por ello, nos alegra que se introduzca esta modificación, pero lo que nosotros queremos también es que se modifique la Ley General Presupuestaria, porque si lo dice en una ley anual, es demasiado el uso que se está haciendo de esta modificación en beneficio del Grupo que apoya al Gobierno en el poder no permitiendo, en

cambio, que se modifique en lo que a nosotros nos favorece para el control.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentadas las enmiendas número 930 y 931. Su portavoz tiene cinco minutos para defenderlas.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda al artículo 12, como hace otra vez referencia a la Ley General Presupuestaria tiene ya poco más que decir. Volvemos a hablar de que ustedes hacen otra vez referencia a algo que ya está en la Ley General Presupuestaria; pues, adelante, así hasta que cambien de criterio.

La siguiente enmienda está referida al artículo 13 para adaptar lo que aquí se dice a la terminología de la Ley de Contratos del Estado. Es una enmienda puramente técnica.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo del CDS tiene cinco minutos para defender las enmiendas número 530, 531 y 532, ambas inclusive. Tiene la palabra su portavoz.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros tenemos planteada una enmienda de totalidad al Título II, así como dos enmiendas parciales, y debemos poner de manifiesto, en primer lugar, que nuestra oposición a la totalidad está perfectamente reflejada en la primera de las enmiendas parciales que pasaremos a explicar y con ello justificaremos la de totalidad. Lógicamente si se aceptara ésta o una transaccional fundamentada en ésta misma, retiraríamos la de totalidad.

Esta enmienda (la 531 parcial) pretende regular las subvenciones que, a nuestro juicio, lo están insuficientemente, especialmente si se compara con lo que significa el control tanto previo como posterior de los créditos que se gestionan a través de la Ley de Reglamento de Contratos del Estado, que cuenta con unos controles internos y externos de la Administración lo suficientemente rigurosos; en cambio las subvenciones escapan de manera injustificada a ese control muy especialmente en cuando al cumplimiento y eficacia de las finalidades con que fueron otorgadas. Nos parece lógico que hay un mayor grado de discrecionalidad en el otorgamiento de las subvenciones, pero, discrecionalidad no quiere decir, ni mucho menos, libertad absoluta, y muchísimo menos todavía, falta de control.

Con esta enmienda pretendemos, en primer lugar, que las actuaciones de la Intervención General del Estado incluyan la comprobación de los usos y correctos destinos de los fondos procedentes de subvenciones, tanto en su aspecto legal del cumplimiento de la normativa aplicable, como en su aspecto de finalidad económica para los que

son otorgados. En segundo lugar, que se establezcan unas obligaciones al beneficiario —ya sea una familia, una institución sin ánimo de lucro o una empresa— de las subvenciones; obligaciones tan elementales como que se use para lo que fueron destinadas, mantenimiento de la actividad o comunicación de otras subvenciones que puedan ser concurrentes; en suma, establecer una serie de obligaciones inherente a la percepción de una subvención con carácter general. También creemos que debe fijarse el papel de las entidades colaboradoras en el caso de que sean éstas las canalizadoras de la inversión mediante la exigencia de una normativa previa para el otorgamiento de cualquier clase de subvención y sujeción de ésta a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, así como regular los supuestos en que procedería la devolución por incumplimiento de alguna de las obligaciones más fundamentales por parte del receptor de una subvención y establecer un régimen sancionador, cosa que echamos muy en falta en el ordenamiento jurídico de esta materia. En definitiva, se trataría de desarrollar aquello que está preceptuado en el artículo 17 de la Ley General Presupuestaria.

La enmienda número 532 cambia completamente de tono. Se trata fundamentalmente de modificar la regulación de los umbrales mínimos de renta para acceder a becas tanto de enseñanza media como de enseñanza universitaria. Para nosotros existe una diferencia fundamental en cuanto a estos umbrales mínimos de renta que vienen siendo fijados cada año por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, que es la existencia o no en el municipio correspondiente del centro en el cual se van a efectuar los estudios correspondientes, ya sean de grado medio o de grado universitario. Pretendemos con esta enmienda que haya una discriminación en favor de aquellas familias que no residen en un municipio que tengan un centro para el cual se concede la beca.

En sus propios términos queda perfectamente defendida esta enmienda. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo de Convergència i Unió tiene presentada la enmienda 643. Para su defensa tiene la palabra el Senador Cardona por cinco minutos.

El señor CARDONA I VILA: Y sobraré, señor Presidente, porque es sólo una enmienda a ese Título II de la gestión presupuestaria y concretamente a su capítulo segundo, que se refiere a la gestión de los presupuestos docentes, y más concretamente aún al artículo dieciséis, en el apartado uno, sobre módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de Centros Concertados. Estamos de acuerdo en el primer párrafo, pero en el segundo introducimos esta modificación después de: «no será satisfecho». Entendemos que tendría que continuar diciendo «el complemento del módulo destinado a otros gastos surtirá también efecto a partir del día 1 de enero de 1990». Aquí propone «al comienzo del curso 1990-1991». Nuestra propuesta viene justificada porque el complemento destinado precisamente a otros gastos

debe también entrar en vigor el 1 de enero, ya que de él depende la cobertura de gastos generales de los centros docentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Grupo Popular tiene presentadas las enmiendas 32 a 45, es decir, 14.

Su portavoz tiene la palabra por cinco minutos para su defensa.

El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Popular tiene presentadas las enmiendas 32 a 45, ambas inclusive, referidas al Título II.

Analizándolas de forma individual o colectiva, podemos agruparlas de la siguiente forma: los artículos trece y catorce están fundamentalmente dedicados a la contratación de obras del Estado. Nosotros, en el artículo trece proponemos una enmienda de adición en la cual se dice que a los efectos de este artículo no podrán fraccionarse los proyectos de obra de modo que se altere la unidad económica de la totalidad del proyecto.

Sabemos, señor Presidente, que en esta división de la contratación de las obras por parte de la Administración central, y también por parte de las administraciones periféricas, habitualmente se acostumbra a dividir ese contrato de obra para facilitar de esa forma la contratación directa, hurtando esa posibilidad de seguimiento por la oposición, para lograr, como decíamos, su objetivo principal, que es la vigilancia de la contratación que pueda tener la Administración para todo tipo de obras.

También en el artículo catorce proponemos una enmienda de supresión, porque según el articulado de la ley de presupuestos se pretenden suprimir una serie de modificaciones referentes a los artículos veintiocho, quinto párrafo; treinta y dos, segundo párrafo, y treinta y cinco de la Ley de Contratos del Estado que, en definitiva también vienen abundando en lo que decíamos inicialmente, es decir, que es abrir una puerta a la discrecionalidad de la Administración en materia de contratación para de esa manera dar cabida o dar una posibilidad a una adjudicación libre de toda traba.

El artículo catorce también eleva a 2.000 millones de pesetas la posibilidad de contratación de los ministros sin tener previa autorización del Consejo de Ministros. El Grupo Popular no entiende, o no comprende, cómo es posible que, desde 1988, que era cuando la posibilidad de contratación de los ministros era de 1.000 millones de pesetas, ésta pase a 2.000 millones de pesetas en tan sólo dos años. Este incremento nos parece totalmente desmesurado, y de ahí que nosotros intentemos suprimir esta ampliación en la Ley de Presupuestos. Además, proponemos una supresión completa del artículo catorce, porque consideramos que la Ley de Presupuestos no debe regular temas que son totalmente ajenos a ellos. Además, proponemos en las enmiendas 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, que se refieren al módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concerta-

dos, una serie de modificaciones y supresiones que creemos que benefician y mejoran considerablemente el articulado de la Ley de Presupuestos.

Por último, con referencia al artículo dieciocho de la gestión presupuestaria de la Seguridad Social, proponemos, igualmente, la supresión del apartado 18.3 y una de adición al mismo artículo y, por último, pedimos que se suprima todo el articulado 18.3.º porque en él se pretende incluso, como decían algunos intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, modificar la Ley General Presupuestaria con la propia ley de Presupuestos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Existía la enmienda 1.226 del Grupo Socialista que ha sido incorporada. Para turno en contra, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Aunque sea de un modo somero y en aquellos casos en los que debido al tiempo no hayan tenido sus señorías la posibilidad de defender sus enmiendas, voy a intentar contestar brevemente a todas las enmiendas presentadas por orden de artículos. Si me lo permite el representante del CDS, dejaré el análisis de su veto para la parte final de mi intervención.

Quiero empezar diciéndole al señor Aguirre que la enmienda de su Grupo número 930 como se les indicó en el Congreso, el párrafo que se pretende sustituir en dicha enmienda es un párrafo obligado, puesto que en el artículo 12 de la vigente ley de Contratos del Estado se prohíbe el pago aplazado de los contratos, entre ellos el de compra-venta, al menos que una ley lo autorice expresamente.

En cuanto a las enmiendas al artículo 13 de modificación de un párrafo, como dice también el Grupo Nacionalista Vasco, todos aquellos proyectos de obra, o todas aquellas obras, que el Título del artículo excluye, si ustedes se fijan siempre nos estamos refiriendo a contratación directa. No le veo, pues, mucho sentido a esta enmienda.

Por otra parte, en la enmienda de adición del Grupo parlamentario Popular —me refiero en concreto a la enmienda número 32—, deben tener en cuenta los representantes de este Grupo que ésta es una norma general prevista en la Ley de Contratos del Estado. Tampoco le veo mayor sentido para poder admitirla.

Razones fundamentalmente de eficacia llevan al Grupo Socialista a rechazar las enmiendas interpuestas al artículo 14. Cumpliendo escrupulosamente la legalidad, no parece aceptable que se produzcan retrasos injustificados en la tramitación de expedientes, lo que ocurriría, por ejemplo, de aceptarse la enmienda 815, del Grupo Mixto, o la número 34, del Grupo Popular.

Quiero decir al Grupo Popular, respecto a su enmienda número 35, que la materia de contratación ha sido regulada normalmente por las leyes de presupuestos generales del Estado.

La enmienda 816, del Grupo Mixto, pretende limitar las revisiones de precios, sin darse cuenta, en mi opinión, de

que también están claramente establecidas en la Ley de Contratos del Estado.

En cuanto a las enmiendas 643, de *Convergència i Unió*, y 36, del Grupo Popular, con el fin de que la efectividad económica del incremento en la partida «otros gastos» sea a partir del 1 de enero y no al comienzo del curso 1990-91 convendrán conmigo, señorías, en que no puede resultar oportuno variar la secuencia temporal de dicho componente del módulo, cuya aplicación se inició en septiembre u octubre de 1986. La efectividad del incremento en «otros gastos» en 1989 fue a partir del comienzo del curso 1989-90, en coherencia con la sistemática de años anteriores.

No estamos de acuerdo en absoluto con la enmienda número 37, del Grupo Popular, que justifica diciendo que el Estado no debe sustituir al patrono en el cumplimiento de las obligaciones de pago de salarios del personal docente, incluidas cargas sociales. Como sus señorías saben, los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y esto se establece en el artículo 49.5 de la LODE. En mi opinión, no es válida la argumentación del Grupo Popular, ya que por Ley, repito, se establece el pago delegado.

El Grupo Popular también pretende, a través de la enmienda número 39, suprimir del texto legal el párrafo que autoriza al Gobierno para fijar las cantidades a percibir de los alumnos de estos centros por actividades complementarias y de servicios. Me refiero en concreto a los servicios de comedor, transporte escolar, gabinetes médicos, etcétera, que regula el artículo 51, números 3 y 4 de la LODE. Y justifica su propuesta en que debería regularse en la presente ley. Se estiman necesarios estos cambios puesto que la percepción de cantidades por estas actividades y la determinación de la cuantía que corresponde percibir se regulan en el artículo citado de la LODE y en el artículo 15.2 del Real Decreto 2336/1985, que aprueba el Reglamento de Normas Básicas de los Conciertos Educativos.

Respecto a la enmienda número 532, del CDS, sobre becas, ya he tenido ocasión de discutirlo con su señoría. Vamos a seguir hablando de ello en el futuro, pero creo que lo debe explicar más ampliamente, incluyendo si es que supone —como creo— ampliación de gasto no contemplada.

Por último, quiero señalar, respecto a las enmiendas 53 y 819, del CDS y del Grupo Mixto respectivamente, sobre las normas de gestión presupuestaria, que los textos presentados pueden ser compartidos, en cuanto a su filosofía de fondo, por nuestro Grupo, al margen de que en algunos aspectos podamos mantener posiciones discrepantes, que no afectarían, sin duda, a los objetivos finales que se persiguen. Es obvio que la preocupación del Grupo Socialista y del Gobierno es realizar en el más breve plazo de tiempo posible una regulación adecuada en este sentido. A quien les habla no le parece el momento más adecuado en los presupuestos de 1990, cuando ya está a punto de iniciarse el debate y la discusión de los presupuestos de 1991, después del período de vacaciones. Entiendo que más bien habría que estudiar esto en los presupuestos de

1991; ello nos permitiría, además, gozar de las ventajas que nos dan estos meses. Por ejemplo, las implicaciones que el régimen de subvenciones públicas tiene tanto en el ámbito del sector público estatal como en el de otras administraciones públicas e, incluso, en la Comunidad Económica Europea, hacen aconsejable demorar su establecimiento hasta la realización de estudios previos necesarios para evitar las posibles disfunciones que se pudieran producir en estos ámbitos. Reitero que, sin duda, nuestro Grupo está totalmente de acuerdo, en la filosofía de fondo, con la inquietud que se desprende de las enmiendas de sus señorías. Creemos simplemente que es preferible disponer del tiempo necesario y de la normativa suficiente para adoptar los cambios oportunos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Se abre un turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Fuentes por un tiempo de tres minutos.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con nuestra primera enmienda a este Título, la 815, quería señalar que el retraso que ha alegado el portavoz socialista está contemplado ya en la propia norma, por cuanto se trata de un supuesto excepcional: que el contrato no pueda ser normalmente cumplido como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. Ya es un supuesto excepcional para el cual se prevé el informe de la junta consultiva de contratación administrativa. Están previstos los posibles retrasos. Lo único que ocurre es que al final hay una coetilla discrecional que es cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen. Nosotros entendemos que no debía haber lugar a esto, por cuanto se trata de unos supuestos que tienen entidad en sí mismos y que hay de alguna forma una contradicción entre la primera parte del apartado y la parte final. Se considera que es una situación importante para pedir el informe a la junta consultiva y, sin embargo, después, esto se remite a circunstancias especiales concurrentes, que no sabemos cuáles son. Por tanto, mantenemos la enmienda en sus propios términos.

Respecto a la enmienda 816, que se refiere a la revisión de precios, quiero decir que nosotros no pretendemos oponernos a las revisiones de precios. Únicamente, señalamos que en los contratos cuya ejecución está prevista en menos de un año entendemos que no habría lugar a revisiones de precios, sobre todo teniendo en cuenta los índices de incremento de precios en los que nos movemos en los últimos años.

También quería referirme a la enmienda 819, que, evidentemente, lamento que no acepte; estaríamos dispuestos incluso a modificar aspectos en los que pudiéramos estar en desacuerdo con el Grupo Socialista, porque creemos que es —y coincidimos con él— importante que se aborde —nosotros creemos que con la mayor urgencia posible; por tanto, ya en estos presupuestos— la mejora de la gestión presupuestaria en relación básicamente con las

subvenciones, no sólo de cara a su otorgamiento sino al control de su utilización y a las posibles sanciones que de esa utilización puedan derivarse. Nos parece que lo que planteamos es un mecanismo de mejor seguridad jurídica para el Estado y para el administrado y que, por tanto, deberíamos abordarlo ya en estos presupuestos. De ahí que mantengamos nuestra enmienda y que estemos dispuestos a su modificación —si hubiera algún aspecto de la enmienda que fuera modificable, sin desvirtuarla, naturalmente— para llegar a una enmienda transaccional con el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Desea hacer uso de la palabra el Senador García Royo por tiempo de un minuto?

El señor GARCIA ROYO: No. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? *(Pausa.)*

¿Por el Grupo del Centro Democrático y Social? *(Pausa.)* Tiene la palabra el Senador Quetglas.

El señor QUETGLAS ROSANES: Gracias, señor Presidente.

Nosotros coincidimos en la redacción de esta enmienda con una de idéntico contenido presentada por los grupos Mixto e Izquierda Unida, y no es casualidad. La coincidencia en su redacción se debe a que este era un texto que figuraba en algunas de las versiones del anteproyecto de la ley de presupuestos, que al ser transformado en proyecto, desapareció. Y no entendemos por qué, pues nos parecía una gran aportación a una cuestión que es radicalmente necesaria, como es regular la gestión, la eficacia y el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones.

Téngase presente, señor Presidente, señorías, que los capítulos cuarto y séptimo del presupuesto, capítulos de transferencias por cuenta de renta y capital que se gestionan a través de subvenciones, representan cantidades recientemente importantes para agilizar los sistemas de gestión de los servicios públicos. Por lo tanto, nos encontramos, no ya ante una acción del Estado de carácter mínimo o residual dentro del presupuesto, sino con cantidades importantes que afectan a una parte transcendental de la gestión de los servicios públicos.

Por ello, manifestando también nuestra conformidad con el representante del Grupo Mixto en cuanto a que estaríamos dispuestos a cualquier tipo de transacción, no podemos entender que el portavoz socialista nos diga que esta enmienda no es oportuna, que no es urgente y, sí lo sea, por ejemplo, duplicar la cantidad autorizada para que un Ministro pueda contratar por sí solo. No sé cuál es la percepción que tiene su señoría de lo que es oportuno y urgente, pero que, en este momento, las Cámaras hagan un ejercicio de transparencia en la gestión de un dinero —que probablemente, sea el que se gestiona de manera menos controlada de todo el presupuesto y cuyo control, en cuanto a la eficacia y el uso debido de estos fon-

dos, está menos regulado e introduzcan elementos de transparencia, de saneamiento, de conocimiento y de control nos parece, señorías, señor Presidente, tremendamente oportuno y absolutamente urgente, señor portavoz.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergencia i Unió tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.

Estamos de acuerdo con la entrada en vigor de lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo cuarenta y nueve de la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, como ha dicho el portavoz socialista. Ahora bien, nosotros hablamos de la diferencia del incremento. ¿Por qué existe esta diferencia entre el personal docente, cuya entrada en vigor se establece para el uno de enero de 1990, mientras que para los demás gastos se establece el comienzo del curso 1990-91? Ahí está la raíz de nuestra enmienda.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señoría.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Mantilla.

El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Quiero discrepar de lo dicho por el portavoz del Grupo Socialista en algunos puntos.

Justificaba el rechazo de nuestra enmienda número 34 en una flexibilidad administrativa. En los Presupuestos de 1988, la posibilidad de contratación, sin tener autorización del Consejo de Ministros, era de 1.000 millones y nosotros discrepamos de que ahora pase a ser de 2.000 millones, cifra que consideramos excesiva y no avalada por esa flexibilidad de la que el portavoz socialista pretende hacer gala.

Por otra parte, dice —y con razón— que ha sido norma que la contratación se regule en la ley de presupuestos; ya estamos habituados a que las regulaciones de todo tipo de tributos o de gestiones se hagan precisamente en la ley que no le corresponde. La Ley de Contratos del Estado viene en la ley de presupuestos; la Ley de Tasas regula transmisiones patrimoniales; la Ley de Haciendas Locales regula el patrimonio, y así sucesivamente. Le tenemos que dar la razón, pero lo que pretendemos es que cada ley regule lo suyo. De ahí que agradezco que acepten la enmienda número 32 en sus planteamientos.

En cuanto a que no está de acuerdo en que el empleador sea el que haga frente a los salarios devengados por el personal docente, amparándose en el artículo 49.5 de la LODE, sin duda nosotros conocemos el artículo, ya que en la enmienda número 40, damos como base de nuestra modificación precisamente ese artículo. Pero consideramos que, por flexibilidad y por agilidad, debería ser el empleador, y no la Administración, quien hiciera frente a los salarios del personal docente.

Y ya refiriéndome al artículo dieciséis, apartado 2, del

que usted no acepta su total supresión, creo que debería tener en cuenta, al menos su modificación. Esta, como puede ver, estriba en que ustedes dicen: salarios y antigüedad y nosotros decimos: salarios y complementos salariales. Entre salarios y antigüedad, como usted bien sabe, hay otros complementos que ustedes no recogen en el artículo dieciséis, apartado 2, y que consideramos que deberían ser recogidos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Agradezco la valoración que sus señorías han hecho de mi exposición y quiero añadir algunas palabras sobre las enmiendas números 53 y 819, del Grupo del CDS y del Grupo Mixto.

A los señores Quetglas y Fuentes quiero reiterarles lo que ya les he dicho antes: en cuanto a la filosofía de fondo estamos de acuerdo. Sin embargo, en ninguna de sus intervenciones se me ha explicado, por ejemplo, de qué forma se van a adaptar a sus enmiendas las implicaciones que el régimen de subvenciones públicas tiene, tanto en el ámbito del sector público estatal, como en el de otras administraciones públicas e incluso en la Comunidad Económica Europea. Por eso, he dicho que se hace aconsejable demorar el establecimiento del mismo a la realización de los estudios previos necesarios para evitar las posibles disfunciones que se pudieran producir en estos ámbitos.

No creo que haya tanta diferencia en mi planteamiento como no sea en el tiempo y no creo que sus señorías pretendan que por incluir las enmiendas de manera inmediata vayamos a hacerlo de la manera más incompleta o de la peor manera posible. Pero admitimos, repito, la filosofía de fondo.

Quisiera decir a los representantes de los grupos Popular y Convergència i Unió que de sus intervenciones deduzco que podrían retirar algunas de las enmiendas, dado que parece que están en sintonía con las explicaciones que yo les había dado; a no ser que haya entendido mal.

Y he dejado para la parte final de este turno de portavoces la discusión del veto a la totalidad que ha interpuesto el Centro Democrático y Social. Les repito lo que les decía antes: no seré yo quien discuta la conveniencia o no de la interposición de un veto, pero permitanme que discuta, con el mismo énfasis que usted ha puesto para discutir el veto, la conveniencia de mantener este Título. Entiendo que las disposiciones de este Título permiten dotar a los órganos administrativos de los instrumentos precisos para llevar a buen fin la ejecución del presupuesto. Al Grupo Socialista le agradan las innovaciones en materia de contratación del Estado al objeto de evitar las contradicciones existentes con la normativa comunitaria, y para procurar, en definitiva, una mayor adaptación a las exigencias actuales de la contratación pública y creo sinceramente que todo eso se consigue en ese Título II.

También es importante para el Grupo Socialista que, mediante la modificación del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se ajuste a la gestión presupuestaria de la Seguridad Social a los cambios introducidos en su régimen de financiación.

Ante la gravedad evidente de lo que supondría la aceptación de un veto a la totalidad, señoría, usted comprenderá que estas razones y otras aconsejan que nuestro grupo se oponga.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Ha quedado discutido el Título II, que votaremos a partir de las 8.

Entramos, por lo tanto, en el Título III, artículos 19 al 36. Título III

El Senador García Contreras y otros Senadores han presentado las enmiendas números 820 a 858, es decir, 39 enmiendas y, aunque yo esté seguro de que no le va a gustar demasiado al Senador Barbuzano, no le puedo dar más que un minuto para defenderlas, toda vez que si, en lugar de haberlas pedido a título individual, lo hubiera hecho a nivel de grupo, yo hubiera sido generosísimo y le habría concedido 5 minutos. En todo caso, el Senador que haya de defender estas enmiendas cuenta con la benevolencia y la comprensión de la Presidencia.

Para defender las enmiendas de don Rafael García Contreras y otros, tiene la palabra el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Todas estas enmiendas parten de una misma filosofía y tienen una relación entre ellas. Parten de la constatación de que el personal al servicio del sector público, sea funcionario o con carácter laboral, ha venido sufriendo, si se me permite la expresión, unos incrementos salariales en general inferiores al conjunto de los trabajadores y en estos presupuestos se vuelve a incidir en el mismo agravio comparativo. De ahí que todas estas enmiendas tiendan a modificar el 6 por ciento, que se prevé en los presupuestos generales del Estado, por el 7 por ciento, más un 2 por ciento adicional distribuido, en cualquier caso, para los colectivos más desfavorecidos.

Otras enmiendas van en el sentido de establecer las cláusulas de revisión en el caso de que el índice al consumo supere determinados tipos, tal y como ya han pactado y acordado el Gobierno y las centrales sindicales, pero que aquí no se refleja.

Como es obvio, no puedo extenderme en todas y cada una de las enmiendas, pero lo que sí debo señalar es que todas ellas van en esa dirección; a la vez, a nuestro juicio con claridad, se pormenorizan los conceptos que constituyen la masa salarial. También se establece toda una serie de modificaciones en cuenta a complementos, sueldo y trienios, pero, insisto, todas ellas con el mismo objetivo, que es el de paliar el agravio comparativo que ha sufrido, a nuestro juicio, el personal al servicio de la Admi-

nistración pública en relación con los restantes trabajadores.

El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, señoría.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentada la enmienda 932. Tiene la palabra el Senador Aguirre.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Esta enmienda, que es al artículo 21.4, habla de los Directores Generales. Señores del Partido Socialista, lo que se va a aprobar, según su proyecto, dice: «Todos los Directores Generales tendrán idéntica categoría y rango, sin perjuicio de que el complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular del Departamento dentro de los créditos asignados para tal fin pueda ser diferente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 e) de la presente ley».

Hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo, pero sigue —y es lo que nosotros ya no entendemos— diciendo que, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, es decir, a través del señor Ministro de Economía y Hacienda, puede establecerse complementos específicos —para todos los directores generales de todos los Departamentos— con el fin de asegurar que su retribución guarde relación con la estructura orgánica y el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad de los altos cargos.

A un Director General se da por hecho que tiene dificultad técnica, o dedicación o responsabilidad. El argumento que dan es para que el Ministro de Economía y Hacienda, una vez más, pueda hacer lo que quiera con los directores generales de todos los demás Departamentos. No sé cómo explicarles lo que están dando ustedes al Ministro de Economía y Hacienda con estos presupuestos, y Ministros de este Gobierno han reconocido que esto no puede funcionar así.

Nosotros hemos presentado una enmienda diciendo hasta dónde estamos de acuerdo y hasta dónde no. El Ministro de Economía no puede ser el sumo hacedor de este Estado, no puede hacer y deshacer sobre todos los directores generales de todos los demás Departamentos. No sé si me he explicado con claridad o no, pero es que esto nadie lo entiende y, por eso presentamos esta enmienda, sin esperanzas de que pueda ser aceptada, porque lo que viene del Ministerio de Economía y Hacienda es como un milagro, todo es bueno y todo es perfecto.

A ver si alguien es capaz de explicarnos por qué el Ministerio de Economía y Hacienda puede tener esa facultad sobre todos los directores generales y por qué se dice que los directores generales pueden tener dificultad técnica. Si no tuviesen dificultad técnica, no habría Directores Generales. Si un Director General no tiene responsabilidad, apaga y vámonos. Lo mismo ocurre si no tiene dedicación, etcétera. Todos los argumentos que dan son papel mojado para que el Ministro de Economía y Hacen-

da, una vez más en otro artículo, haga lo que quiera. Esa será su responsabilidad, no la de la oposición.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aguirre.

El Centro Democrático y Social tiene presentadas 18 enmiendas, de la 533 a la 550, ambas inclusive. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Quetglás.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas 535 a la 539 y la 541 a la 548 tienen una misma idea: la elevación de los incrementos salariales del 6 al 7 por ciento y las concordancias en retribuciones complementarias y otro tipo de capítulos retributivos.

Los argumentos que podemos esgrimir en defensa de estas enmiendas han sido ya apuntados en la defensa del veto de totalidad. Entendemos que la productividad del sector público, que ha sido medida con suficiente amplitud y rigor como para así determinarlo, autoriza, sin presionar excesivamente sobre las tensiones inflacionistas, este aumento. Además, a nuestro juicio es absolutamente conveniente, es de justicia, pues los colectivos a los que se aplica estrictamente estas subidas retributivas están perdiendo poder adquisitivo.

El argumento por parte del Gobierno es que la masa salarial no está subiendo el 6 por ciento, sino en niveles superiores al 10. El reconocimiento de esa realidad absolutamente indiscutible produce un error en cuanto a lo que significan las relaciones del personal y muy especialmente de los funcionarios con la Administración, porque los conceptos retributivos que suben el 6 o el 7 por ciento que nosotros pretendemos son aquellos que vienen fijados taxativamente por ley y a los que tiene derecho el funcionario por el simple hecho de serlo y estar desempeñando un puesto en las plantillas orgánicas. La diferencia se dedica a aumentar los capítulos de retribuciones complementarias, de productividad, que entran dentro del margen de la discrecionalidad, dentro de las retribuciones a puestos de trabajo de libre designación, etcétera, poniendo en serio peligro, por lo menos, el esquema de relación de trabajo de un funcionario con la Administración, aumentando la dependencia del poder político, mermando los derechos objetivos y subjetivos a la carrera profesional, estableciendo una relación no correcta, no suficientemente objetivada entre el poder político y el funcionario.

Además, hay otro argumento. A nuestro juicio, incluso olvidando los términos de justicia o de exigencia de profesionalidad de la función pública, podemos hacer referencia a lo que sería la eficacia en términos de política económica. El Gobierno ha reconocido recientemente por portavoz suficientemente autorizado que, realmente, los salarios no son una componente que tenga una especial responsabilidad en la creación de la tasa de inflación. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento —que es aplicable, por supuesto, a los salarios públicos en cuanto que, como ya se ha dicho, el sector público es también responsable de un considerable incremento de productividad—,

se pretende parar el tirón de la demanda frenando los salarios del sector público. ¿Qué van a conseguir? Yo dudo que logren incidir de manera importante en el tirón de demanda por causa salarial, pero sí van a conseguir peores rendimientos por falta de incentivos.

La enmienda número 540, ligeramente distinta, pide que las Cortes Generales establezcan los criterios con los que se va a retribuir ese vago concepto de complemento de productividad. Los argumentos son bastante obvios. Se trata, en primer lugar, de intentar evitar la discrecionalidad, que el hecho de la autoevaluación pueda producir efectos que no son exactamente los queridos por el complemento de productividad porque éste pretende, fundamentalmente, premiar, incentivar el rendimiento. Nosotros reclamamos que esa productividad se mida bien, no solamente en términos de presupuesto manejado o gestionado por las distintas unidades administrativas, sino en el reflejo presupuestario en unidades físicas: kilómetros de carreteras, camas de hospital, actos médicos o de cualquier otra índole, realizados, y no en unidades estrictamente monetarias y de gestión presupuestaria. Porque eso distorsiona, primero, el análisis y, segundo, las pretensiones de cada unidad administrativa a la hora de una exigencia, no siempre justificada ni razonable, de mayor presupuesto.

Las enmiendas número 549 y 550 inciden en un punto que se está produciendo aquí, como yo creo que ocurre en todas las Cámaras en las que se debate el presupuesto según el sistema español: la adecuación, la oportunidad o no de la ley de presupuestos para introducir determinadas reformas en la legislación.

Yo quisiera expresar, muy brevemente, la posición de mi grupo en este debate, que es eterno y nunca bien aclarado y está, lógicamente, mediatizado por la óptica de quien está en el Gobierno y de quien está en la oposición. Yo creo que, objetivando un poco el debate, es evidente que una ley de presupuestos de un año es una ley que contiene unas medidas de política económica que quieren incidir sobre la vida económica y social, por supuesto, del país, lo cual significa que, en determinados momentos, haya que tomar medidas, a través de la ley de presupuestos, que supongan alteración de otras legislaciones. Y esto nos parece que es lícito, conveniente y que, además, está en la misma filosofía de la ley de presupuestos, por no hablar de aquellos cambios que conviene hacer para actualizar cantidades que, de otro modo, en las leyes correspondientes, quedarían petrificadas. Pero lo que no nos parece adecuado, señorías, es que, aprovechando este Pisuerga que pasa por este Valladolid, se introduzcan, vía ley de presupuestos para un año, reformas estructurales, reformas de fondo que nada tienen que ver, ni con la coyuntura, ni con la actualización, sino con el cambio de panorama legislativo que, en nombre de unos criterios mínimos de ordenación jurídica y de racionalidad en el trabajo de las Cámaras también, deberían dejarse en manos de las leyes específicas.

Ese es el contenido de nuestras enmiendas 549 y 550. Porque aquí se está introduciendo, por una vía, no diría subrepticia, pero sí, por lo menos, por una puerta falsa,

una auténtica reforma del estatuto del personal sanitario. Entendemos que no es éste el sitio donde debe hacerse y no quiero decir con eso que nosotros nos opongamos sistemáticamente a todo aquello que la ley de presupuestos introduzca como reformas en otras leyes, porque eso, con toda seguridad, es inevitable. Pero no es este el caso de los artículos correspondientes que vienen enmendados por nuestras enmiendas 549 y 550.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo de Convergència i Unió tiene presentadas las enmiendas 645 a 652. El Senador Cardona tiene la palabra.

El señor CARDONA I VILA: Entiendo que la 644 también está presentada. En cualquier caso, la voy a defender.

El señor PRESIDENTE: Puede ser un error mecanográfico. En todo caso, defiéndala también, y vamos a comprobarlo.

El señor CARDONA I VILA: De acuerdo, señor Presidente.

Dicha enmienda propone modificar la letra d) del artículo 19.1, en el sentido de que el actual complemento familiar no se adecua a lo establecido al respecto en los países de nuestro entorno comunitario. Y la doy por defendida sin más.

El señor PRESIDENTE: Sí, estaba, señor Cardona.

El señor CARDONA I VILA: En cuanto a la 645, propone adicionar un párrafo en la letra e) del artículo 22.1, que establece las normas para la fijación de la cuantía individual del complemento de productividad para evitar agravios comparativos en la designación de ese complemento entre los distintos departamentos.

La 646 propone añadir un nuevo apartado cinco al artículo treinta y dos, para incluir, dentro de esos conceptos retributivos, el nivel del complemento de destino consolidado.

La 647 propone rectificar lo que, a nuestro entender, se hizo precipitadamente en el momento de elaborar la Ley de la Función Pública, y propone crear el Cuerpo Técnico Superior de la Administración del Estado.

Las enmiendas 648, 649 y 650 son de supresión. La 648, del apartado 3, del punto cuarto del artículo treinta y cuatro, pues el principio que se establece ya se encuentra recogido en la normativa vigente y su inclusión podría inducir a confusiones. La 649 tiene una motivación parecida, mientras que la 650 es a los efectos de suprimir el apartado 6, del punto cuarto de este mismo artículo treinta y cuatro y que, aunque se refiere al INSALUD, el efecto transmisor que implica podría afectar a las comunidades autónomas que tienen organización propia de estos servicios, por lo que es más adecuado regular el proceso de integraciones mediante normas concretas y singulares, particularizándolas.

La enmienda 651 insta al Gobierno para que desarrolle por Real Decreto las normas contenidas en el artículo, que tendrá carácter supletorio en aquellas comunidades autónomas que tengan transferidos los servicios del INSA-LUD.

Finalmente, la enmienda número 662 excuso defenderla porque pretende modificar el incremento del 6 por ciento en las retribuciones del personal incluido en el ámbito de aplicación de todo este Título III, sustituyéndolo por un incremento del 7,5 por ciento. Otros portavoces han explicitado su postura del 7 por ciento. Entendemos que no es el caso discutir unas cifras determinadas, sino que, para adaptarlo a la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido este personal, el 6 por ciento es insuficiente a todas luces.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría ¿al decir que no la defiende, ha querido decir que la retira? No la defiende, pero sigue viva a todos los efectos ¿no? Me refiero a la número 662.

El señor CARDONA I VILA: No he dicho retirar, sino reiterar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Queda aclarada la confusión.

El Grupo Popular tiene presentadas las enmiendas 46 a 65. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Mantilla.

El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las señorías que me han precedido en el uso de la palabra han venido incidiendo en una serie de asuntos que también el Grupo Popular va a poner encima de la mesa y que tienden a evitar la discriminación que sufre el funcionario con respecto al trabajador de la empresa privada, así como a las discriminaciones que pueda haber dentro de los distintos grupos de funcionarios.

Las enmiendas números 46 y 49 están relacionadas con los acuerdos a que ha llegado el Gobierno con las centrales sindicales para conseguir una revisión salarial, siempre y cuando el IPC supere el seis por ciento. Considera el Grupo Popular que también debe estar recogida esta adición para todo tipo de funcionarios, sean funcionarios de carrera o personal laboral. Por tanto, las enmiendas números 46 y 49 van en este sentido de introducir una adición en que se diga que la revisión se aplicará con efectos de primero de enero, siempre y cuando el IPC durante 1990 supere el seis por ciento.

También se ha señalado en el debate del Título III el aspecto del complemento familiar. La propuesta del Grupo Popular es que se fije en 3.500 pesetas, ya que ésta es la media que tienen todos los países componentes de la CEE.

La enmienda número 47 se refiere a esa paga extraordinaria que —no vamos a decir hábilmente— se aprueba en esta Ley de Presupuestos de 34.980 pesetas, para que sea tenida en cuenta a efecto de su aplicación en el futuro, evitando así que el funcionario pierda poder adquisi-

tivo en el tiempo. Quiero hacer llegar también el sentir de las administraciones locales en relación con esta paga extraordinaria, ya que el hecho de haberles sometido a la asunción de la misma, sin duda les va a causar graves perjuicios financieros.

En cuanto a las demás enmiendas, prácticamente la totalidad de ellas se refieren a evitar discriminaciones y a homologar a los funcionarios de las distintas instituciones que componen la Administración del Estado.

Se ha comentado también el tema de los Directores Generales. El Grupo Popular entiende que al ser altos cargos no procede que perciban complemento de productividad, y de ahí que la enmienda número 52 tenga una redacción en la cual no se contempla ese complemento. Sí se contemplan los complementos específicos correspondientes, y además se pone limitación a los emolumentos que pueden percibir en el sentido de que deberán establecerse en 7.476.660 pesetas, que es lo que fija la Ley de Presupuestos para el Subsecretario asimilado.

Algunas enmiendas se refieren a que los complementos que puedan percibir los altos cargos deberán ser comunicados a la Comisión de Presupuestos del Congreso y del Senado, debido a la obligación de informar a las Cortes sobre este particular.

La enmienda número 54 se refiere a lo que creo es un olvido del Grupo Socialista o del equipo de Gobierno en la Ley de Presupuestos, ya que en la retribución de altos cargos se olvidan, de alguna manera —supongo que involuntariamente—, de las pensiones a que puedan tener derecho los ex-ministros y asimilados. En la Ley de Presupuestos de 1987 se fijaba 1.880.000 pesetas como base para el cálculo de estas pensiones. En este presupuesto lo echamos en falta, y de ahí que propongamos esta enmienda de adición.

Enmienda número 58. Consideramos que no está incluida la figura del subteniente en el cuadro B y, por tanto, pedimos su integración.

Hay una serie de enmiendas en las que, en definitiva, lo que estamos proponiendo es que haya una equiparación entre los funcionarios, independientemente a los cuerpos en los cuales estén destinados, y quisiera hacer hincapié en el artículo treinta y tres, apartado dos, en el cual se facilita el acceso al funcionariado sin haber superado previamente la prueba de admisión. Nosotros proponemos una enmienda de modificación, en la cual se dice: «comprendidas en una oposición. Superada ésta...», y no como ustedes tienen recogido: «Dicha integración se producirá, siempre que se posea la titulación necesaria y demás requisitos exigidos, etcétera», lo que da vía libre, lógicamente, a ese nepotismo o favoritismo que pueda haber en las distintas administraciones. Para evitar esto es necesario que haya que superar la oposición pertinente en igualdad de condiciones con el resto de los funcionarios.

Quisiera hacer llegar al Grupo Socialista el sentir de los grupos intervinientes que me han precedido. Consideramos que todas nuestras enmiendas van encaminadas a lo mismo: evitar una discriminación, homologar a los distintos funcionarios y, en definitiva, mejorar notoriamente

te el contenido del Título III. De ahí que sugiera al Grupo Socialista que acepte la gran mayoría de las enmiendas que se proponen por parte del Grupo Popular y demás miembros de la Comisión y que pudieran tener cabida con su benevolencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mantilla.

El Grupo Socialista tenía las enmiendas 1.217 y 1.218, que han sido incorporadas.

Para un turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador De la Torre.

El señor DE LA TORRE COLMENERO: En mi respuesta a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, creo que entenderán que en alguna medida, tenga que contestar conjuntamente a parte de ellas, puesto que en la inmensa mayoría se pide un incremento en las retribuciones de los funcionarios públicos, a través de las enmiendas.

Sería ocioso decir desde aquí que también el Grupo Socialista podría considerar conveniente que el incremento de los funcionarios públicos fuese superior al seis por ciento, que es el que aparece y que, en definitiva, supondría dotar de mayor salario a todos los funcionarios o a cualquier trabajador; por tanto, no podríamos estar en contra de esa medida, dicho a efectos puramente dialécticos. La realidad —y lo apuntaba el portavoz del CDS— es que desde una visión nominalista del Presupuesto, es verdad que hay un incremento de un seis por ciento, sin embargo, si se comprueba, también se ve que en el capítulo de gastos de personal, el incremento que se produce es ligeramente superior al 11 por ciento (11,1 exactamente); por tanto, desde el seis por ciento hasta el 11,1 a algún lado tendrá que ir ese dinero, esos 5,1 puntos.

Por otra parte, sus señorías manifiestan que habría que subir al 7 ó 7,5 por ciento y proponen algunas otras medidas en sus enmiendas, como es la variación de las pagas extraordinarias, entendiendo que en lo sucesivo forme parte de su importe el complemento de destino. Son enmiendas plausibles, pero en ningún momento indican sus señorías de qué otras partidas habría que detraer ese importe, o en todo caso, si eso no fuera así, cual tendría que ser el incremento de la presión fiscal y a qué sectores tendría que afectar. Parece claro que cuando se propone en un momento determinado un mayor gasto, también se debe indicar de dónde se saca.

Dicho esto, en cuanto al aspecto al que ustedes se refieren del incremento de la ayuda familiar en una cuantía de 3.500 pesetas, creo que sus señorías también conocen perfectamente que en estos momentos está en el Congreso la reforma del complemento familiar, referente especialmente al sector privado, por lo que no parece que se pueda producir ahora ningún tipo de discriminación al respecto. Por tanto, es un problema que consideramos que hay que estudiar de una manera seria. Algunos de ustedes han hablado de ello, por ejemplo, el representante del Grupo de Convergencia i Unió cuando se refería a que tendríamos que adecuarnos al sistema que rige en la Comu-

nidad Económica Europea. Estamos totalmente de acuerdo; esperamos que la discusión que se pueda producir sobre este aspecto en las Cortes sea el momento oportuno de analizarlo. En todo caso, nos parece un asunto digno de estudio.

Igualmente se ha hablado de cuáles son los diferentes conceptos de la masa salarial, fundamentalmente en una enmienda presentada por el Grupo Mixto, que ha defendido el Senador Fuentes. Honradamente, no estamos de acuerdo, en principio, con que los conceptos de la masa salarial que se quieren anular no formen parte de la misma; nos parece que esos conceptos en el sector privado forman parte de la masa salarial, en ningún momento nos estamos refiriendo al incremento de la masa salarial como consecuencia del aumento de los funcionarios sino como mejora en diferentes aspectos de sus retribuciones. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con ese tema.

También se ha hablado de la cuestión de los directores generales. Ha habido pronunciamiento diferentes, tanto por parte del Senador Aguirre, como por parte del representante del Grupo Popular. Lo digo simplemente a efectos de que se constate. Mientras el Senador Aguirre sí admitía el complemento de productividad, parecía que ocurría todo lo contrario en el caso del portavoz del Grupo Popular. El Senador Aguirre decía que no entendía por qué tenía que haber complemento específico, pero a mí me parece algo muy fácil de explicar. Puede ser que sea ilusoria mi pretensión de explicárselo a su señoría, pero a mí me parece sencillo. Entre otras cosas, usted sabe perfectamente que el complemento específico es un complemento que tienen los funcionarios y que precisamente tiende a atender especiales circunstancias, especial responsabilidad, dedicación etcétera. Por tanto, no hay ninguna razón para que eso no pueda ser aplicado a los directores generales. Es más, su argumento se le podría volver en contra cuando no hablábamos en concreto de directores generales, pero si nos referíamos a funcionarios de cualquier nivel a los que desde la Administración se les reconoce el complemento específico en función de su especial dedicación, responsabilidad, penosidad, etcétera, porque para eso precisamente está definido en la ley el complemento específico. Además, nos parece que si queremos tener una Administración que funcione bien, de una manera ágil, los altos cargos de la Administración tienen que estar bien pagados, porque si no, ustedes saben que se puede producir una fuga —y se está produciendo de hecho— hacia el sector privado, precisamente por falta de incentivos por parte de la Administración. Estamos seguros de que su señoría no quiere que eso pueda ocurrir en ningún caso. Por tanto, nos parece que el complemento específico, tal y como está ahora para los directores generales, tienen que seguir funcionando así.

No estamos de acuerdo con la opinión de que los funcionarios estén perdiendo poder adquisitivo. Se lo decía a su señoría en un primer momento de mi intervención, cuando hablaba del incremento de la masa salarial del 11,1 por ciento. Creemos que a lo largo de los últimos años estamos diciendo todo lo contrario: el incremento del poder adquisitivo de los funcionarios ha ido por encima del

IPC. Claro está que cada uno maneja las estadísticas como le parece oportuno. Ustedes saben, por ejemplo, cómo las maneja la aviación, en función del número de kilómetros que se recorren —así cuentan los accidentes—, mientras que en los ferrocarriles lo contabilizan en función del número de viajeros, con lo que cada uno da resultados diferentes. En las estadísticas que nosotros manejamos sí aparece que en ningún caso está por debajo del IPC.

De la misma manera, siendo cierto lo que decía el Senador Quetglas cuando se refería a la menor importancia que pueda estar teniendo el salario base sobre el conjunto de las retribuciones, y refiriéndose fundamentalmente a las pagas extraordinarias —siendo eso cierto en algún sentido—, no es menos cierto —y creo que así me lo podrá reconocer— que, a lo largo de los últimos ejercicios, ha habido en algunos casos un mayor incremento porcentual del salario base, aunque es verdad que en estos momentos no hemos llegado. A nosotros nos parece que la reivindicación de parte de los funcionarios, en el sentido de que ese complemento de destino pueda formar parte de ese salario base, es una reivindicación que podrá ser aceptada en su momento, pero, desde luego, el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos que puede perseguir este presupuesto no permite ir más allá.

En definitiva, aceptar esos incrementos que sus señorías proponen, ya no sería simplemente quedarnos en el 11,1 por ciento, sino, en algunos casos, subir al 13 por ciento, y en los casos que proponía el Senador Fuentes llegar al 18 ó al 20 por ciento del capítulo de incrementos. Senador Fuentes, no solamente ha defendido usted en muy poquito tiempo sus enmiendas, sino que la mayoría de ellas, cada una en su concepto, no hacen más que crear fondos adicionales, porque, sumada una tras otra, la masa salarial en el Capítulo primero podría incrementarse en esa cantidad.

En cuanto a los complementos de productividad, creemos que es necesaria una cierta discrecionalidad para que ese complemento pueda funcionar. Comprendo que ustedes quieran reglamentarlo, es lógico que lo deseen, pero permitan también al Gobierno un cierto margen de discrecionalidad con lo que el propio complemento de productividad representa. En todo caso, esperemos que la oficina presupuestaria —de la que ya se ha hablado en el Congreso— pueda servir un poco para estudiar todas estas cuestiones. Además, parecería ocioso someter a las Cortes a la definición puntual de los complementos de productividad, ya que sería prácticamente imposible realizarla por lo prolijo de la cuestión.

Se ha hablado también de las diferencias de los trabajadores de la Administración pública respecto a los de la empresa privada. Creo que esa es una verdad a medias que se puede dar sobre determinados sectores de la Administración, quizá en los sectores medio-alto y alto, pero no en el resto de los trabajadores de la Administración. Por tanto, también eso exigiría una cierta matización.

En cuanto a las pensiones, no quiero saltármelo, tal y como usted decía anteriormente. Quizá en este momento no pueda darle una contestación exacta al respecto, pero

le prometo que el Grupo Socialista tendrá en cuenta la apreciación que usted hacía en su enmienda.

Respecto al tema de los subtenientes, me parece que usted se refería a los subtenientes de la Guardia Civil. Tengo que señalar que el sistema retributivo de la Guardia Civil es diferente al del resto de las Fuerzas Armadas. Por tanto, hacer una excepción en cuanto a los subtenientes no creemos que tenga especial sentido. No comprendemos exactamente el contenido de esa enmienda ni por qué se refiere específicamente a los subtenientes, cuando en todos los casos la Guardia Civil tiene diferentes retribuciones si se compara con las Fuerzas Armadas.

En cuanto al acceso de funcionarios sin pruebas de admisión, honradamente, tampoco estamos de acuerdo con esa apreciación, porque la puntuación que en un momento determinado se da a los funcionarios empieza a tenerse en cuenta desde que previamente se ha aprobado el proceso de selección a través del concurso o a través del concurso-oposición.

Para terminar, quiero hacer especial hincapié en algunas de las cuestiones que sus señorías han mencionado, no solamente en este título, sino en la discusión de los anteriores. Me refiero al hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado se introduzcan una serie de normas que, a juicio de sus señorías, no tienen por qué estar. Desde luego, en lo referente a este Título III, me parece que, aparte los aspectos que, como bien señalaba el Senador Quetglás, aparecen en relación con la sanidad, todas las normas son perfectamente admisibles. Y en el caso de la sanidad, ocurre exactamente igual con el proceso de reforma en que en estos momentos nos encontramos. Creo que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, tanto al artículo 33 como al artículo 34, dan también respuesta a algunas de las enmiendas que sus señorías han defendido aquí esta tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor de la Torre.

Turno de portavoces. Grupo Mixto. Tiene la palabra el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente. Sólo me voy a referir a algunos de los aspectos a los que se ha referido el Senador portavoz del Grupo Socialista, porque evidentemente el tiempo no me permitiría entrar en todos ellos.

El señor PRESIDENTE: Tiene tres minutos; ha ganado dos respecto de antes.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

En cualquier caso, sí quiero destacar algunas cuestiones. La primera es que, con independencia de que queramos plantear las cuestiones adicionales en relación con las percepciones de los funcionarios y el personal laboral, es lo cierto que las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias tienen el incremento del 6 por ciento, y éste es el fundamento de estas percepciones. Ya sa-

bemos que después existen, por otros mecanismos, otras posibilidades de incremento de una forma no generalizada, de una forma que depende mucho más de la discrecionalidad política que de estos conceptos.

Por tanto, cuando nosotros planteamos el 7 por ciento, lo estamos haciendo partiendo de una consideración: que en el momento en que los Presupuestos Generales del Estado empiezan su discusión en el Congreso de los Diputados se está hablando de una previsión de inflación para este año del 5,7 por ciento, y hoy se está hablando ya de una previsión del 6,3. De ahí que este 7 por ciento que nosotros planteamos, más un 2 adicional para complementar, nos parezca esencial para atender a la generalidad, al conjunto de los funcionarios y de los empleados con relación laboral en sus percepciones básicas, sean el salario o sean los complementos.

Pregunta el señor De la Torre de dónde van a salir estas partidas que nosotros planteamos. No me gustaría tener que entrar en este tema. A mí se me ocurren como mínimo tres vías. Se me ocurre una vía que en su momento discutiremos, que es ver lo que está presupuestado en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Se me ocurre otra vía, en la que sin duda estará de acuerdo conmigo que es la persecución del fraude fiscal, que ha producido incrementos importantes en la recaudación y que debe seguir produciéndolos. Y se me ocurre incluso otra vía, que no podremos discutir pero que también sería discutible, que es la tendencia del Gobierno a alcanzar el déficit cero, lo cual es un camino perfectamente legítimo, pero podría cuestionarse si en un momento determinado, y en aras a una política distributiva, a una mejor dotación de servicios en nuestro país, hay que optar inmediatamente por esa vía o se puede escalonar de otra forma esta tendencia al déficit cero. Insisto en que lamentablemente no podemos entrar en esa discusión, pero, en cualquier caso, no es un problema de medios; es un problema de voluntad política, es un problema de querer optar por un camino o por otro, y nosotros creemos que el agravio comparativo de los funcionarios y los trabajadores en relación laboral con la Administración imponen el camino de ir limando estas diferencias. He afirmado, y otros portavoces también, que la mayoría de los funcionarios y personal laboral han perdido muchos años poder adquisitivo comparativamente, y yo creo que eso es cierto, con independencia de que se pueda producir un aumento global de la masa del 11 por ciento, porque si analizamos cómo se distribuye y consideramos el conjunto—estos datos están estudiados y los tiene el Gobierno mejor que yo, aunque yo también los tengo— vemos que la mayoría de los funcionarios y personal laboral han perdido poder adquisitivo, y de ahí la necesidad de complementar estas percepciones.

Hay otra cuestión que tiene un carácter técnico-político, pero en la que yo querría insistir, que es que cuando nosotros planteamos qué conceptos forman o no forman parte de la masa salarial, se ha dicho por el señor De la Torre que en la empresa privada los conceptos que aquí excluimos forman parte de esa masa salarial. No pueden formar parte de la masa salarial la mayor parte de estos

conceptos por una razón muy simple: porque están perfectamente tipificados los conceptos que forman parte del salario y los que no en la legislación laboral, y es indudable que no tienen nunca la consideración de salario las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, las cotizaciones al sistema de Seguridad Social, las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos, o los gastos o indemnizaciones que hubiera de realizar el trabajador, aunque en los convenios privados, a la hora de establecer la masa salarial, unas veces se incluyen y otras no. Le aceptaría que pudieran ser más discutibles las cantidades derivadas de antigüedad o reclasificación profesional, pero lo que quería señalarle es que los elementos que nosotros planteamos que deben formar parte o que deben excluirse de la masa salarial son perfectamente coherentes con nuestra normativa laboral, con la definición del salario en nuestro país.

En definitiva, lo que nosotros planteamos aquí—insisto— es una mínima adecuación a las previsiones de inflación, una mínima adecuación al camino que están siguiendo en su negociación los restantes trabajadores; planteamos una cláusula de revisión en función del incremento que se pueda producir, de la desviación que se pueda producir en el índice de precios al consumo.

Las demás enmiendas van a complementar situaciones de evidente desigualdad entre distintos colectivos de la Administración y que en ningún caso suponen ni pueden suponer las cuantías tan elevadas que señalaba el portavoz socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fuentes.

Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra el Senador Aguirre.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente. Senador De la Torre, por supuesto que el Gobierno puede establecer los complementos que quiera. Eso no se ha discutido. Pero digan toda la verdad, porque las fugas las están teniendo al sector público. Si quiere le traigo unas declaraciones del señor Borrell que indican que se está yendo más gente al sector público que al sector privado, por ejemplo.

También tengo aquí unas declaraciones del señor Borrell y del señor García Vargas, que dicen que la Administración española funcionará el día que funcione como una empresa particular. Y no se debe extrañar—aunque quizá en una joven democracia nos extrañamos de muchas cosas— de que grupos de la oposición no coincidamos en muchos temas. Esto es muy normal en otros parlamentos; si no, sólo habría un grupo y otro grupo.

Nosotros estamos de acuerdo en que haya complemento de productividad, lo mantenemos siempre; es más, yo digo que esto sería bueno aplicarlo hasta a los ministros para ver en qué se equivocan y en qué no se equivocan. Porque si un director general tiene que tener dedicación y responsabilidad, yo me pregunto cuál es la responsabilidad más arriba, cuando se equivocan en el 30 o el 40 por ciento sobre unos cuadros macroeconómicos. Yo estoy to-

talmente de acuerdo en que si cumplen tengan su complemento de productividad. Yo no sé si han leído bien, pero dicen que no es el Gobierno, sino el Ministro de Economía y Hacienda el que propone los demás complementos, y el Gobierno acepta o no. A ver si nos centramos en el problema: no es ni el Gobierno el que propone en este caso, sino que es el Ministro de Economía y Hacienda el que propone estos complementos que se dan por temas tan vagos como dificultad técnica. Si para ser director general no hace falta dificultad técnica, estamos buenos. Y de ahí para arriba, subsecretario y secretario de Estado, supongo que tendrán muchas más dificultades. Supongo que un ministro tendrá dedicación exclusiva. Además, yo no tendría inconveniente en admitir que un ministro tuviera también unos complementos por cumplir con lo que dice, por responsabilidad, etcétera.

En lo que vuelvo a insistir es en que el señor Almunia el otro día hacía unas declaraciones clarísimas sobre esto: es el Ministro de Economía y Hacienda el que decide al final todos los Presupuestos, y decía que ellos no tocan bola; más claro el agua. Lo dice un ministro de ustedes. Y antes hemos hablado del artículo ocho, regla quinta, y se ha reconocido por el portavoz socialista que esos complementos también pueden ser para los inspectores o para lo que sea.

Yo lo que estoy diciendo es que tal y como está esto redactado, tiene unos poderes tan omnímodos, tan grandes el Ministro de Economía y Hacienda, que pueden ustedes hacer lo que quieran en los presupuestos; pueden darle a un director general de un departamento lo que él quiera, y así sucesivamente, porque son conceptos muy vagos y muy amplios. Es decir, se supone que todos tenemos responsabilidad, dedicación, una cierta competencia, porque si no estamos todos de más, y esto es lo que estamos planteando; es decir, que si quieren hacerlo, háganlo a través del Gobierno, que proponga el Gobierno y que diga cómo, pero no por estos conceptos. O sea, no tenemos nada contra la productividad, al revés, creemos que precisamente a ustedes se les está yendo gente —le podría decir nombres y apellidos de gente especialista en tributos— no solamente al sector privado, como se ha dicho, sino al sector público que ustedes dominan, porque evidentemente ganan más, porque el Ministro de turno si no es de Economía poco puede hacer para retenerlos. Este es el problema que hemos planteado, no que estemos o no de acuerdo con la productividad. Nosotros siempre apoyaremos, incluso a los niveles más altos, la productividad, porque creemos que es la salida para la Administración Pública. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo del CDS, tiene la palabra el Senador Quetglás, y le recuerdo que tiene tres minutos.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador De la Torre, yo creo que el único argumento consistente de toda su batería de argumentaciones contra nuestras enmiendas sería —y lo digo en condicional—

de dónde hay que detraer los recursos para financiar esto que ustedes están proponiendo, pero es que la respuesta la ha dado usted mismo; es decir, si la masa salarial se está incrementando en un 11,1 punto y estamos hablando de un incremento de retribuciones del 6 por ciento, hay una diferencia de 4,1 puntos. Hay una parte que evidentemente se va a la ampliación de plantillas, puede ser un punto o un punto coma uno, nos quedan tres, y estamos hablando de 125.000 millones de pesetas, señorías, estamos hablando del 4 por ciento de 3,1 billones de pesetas. Porque nosotros lo que pretendemos es que el tramo de retribución legal sea mayor que el tramo de retribución discrecional; eso es lo que estamos exigiendo, además de manera absolutamente clara y transparente, porque creemos que eso aumenta la eficacia del sector público, la transparencia y la objetividad de las retribuciones y la motivación del personal. Estoy absolutamente convencido —y creo que usted también— que desmotiva a los funcionarios mucho más que las retribuciones modestas la existencia de injusticias y agravios comparativos, pero muchísimo más, y ésa es una fuente mucho más importante de fugas del sector público y en concreto de la Administración, porque no todo el sector público tiene el mismo tratamiento; y creo que la actitud de los funcionarios a lo largo de muchos años lo ha demostrado de manera reiterada.

Tiene usted razón en que en anteriores ejercicios los incrementos salariales previstos en la Ley de Presupuestos recaían de manera fundamental sobre el tramo de retribuciones básicas, pero eso fue al principio del Gobierno socialista y también en los anteriores gobiernos; es decir, fue una época en que ustedes liquidaron, petrificaron la relación a partir de un determinado momento, y a partir de entonces los incrementos salariales no solamente han petrificado la relación entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias, sino que ha aparecido otra figura que va incrementando peligrosamente su participación en el conjunto de las retribuciones de los funcionarios, que son los complementos específicos y las retribuciones de productividad. Y, ¿por qué digo peligrosamente? Porque son discrecionales, señoría, porque permiten la discriminación en cuanto a grupos de funcionarios, en cuanto a funcionarios en concreto, en cuanto a determinados servicios, y eso sí que es una fuente muy importante de desmotivación y de disfunción en el seno de la Administración pública.

No pretendemos con nuestra enmienda que las Cortes reglamenten la productividad, yo creo que basta leerla. A sus señorías se les puede permitir ciertas hipérboles literarias propias de la vida parlamentaria, pero no hasta el punto de tergiversar el contenido de nuestra enmienda. Nosotros estamos hablando de que pretendemos que las Cortes Generales regulen los criterios de las retribuciones de productividad, y le explicitamos todavía más: pretendemos que uno de los criterios sean unidades físicas de producción de los servicios que tienen encomendados los funcionarios y no solamente una tendencia que se está viendo en la conformación de los complementos de productividad, que es la cantidad de presupuesto gestiona-

do, porque eso lo que hace es engendrar esa enfermedad tan burocrática de dime cuánto presupuesto gestionas y te diré lo importante que eres, y una tensión al alza de la participación en los presupuestos por parte de los determinados servicios, que creemos que no es bueno. Retribuya la cantidad de kilómetros de carretera hechos o gestionados en explotación, o el número de camas de hospital, o el número de actos médicos efectuados, o el número de expedientes o de inspecciones, o de lo que sea, pero no necesariamente la cantidad de presupuesto gestionado. Eso es un criterio que nosotros quisiéramos ver introducido en cuanto a la valoración de la productividad, y como criterio creemos que es mucho más objetivo, lógico y razonable que lo introduzcan las Cortes Generales, que no la propia Administración, los propios servicios a través de criterios de autoevaluación.

Por último, usted se ha referido a unas palabras mías para respaldar la conveniencia de la introducción de reformas en el Estatuto del Personal Sanitario en los Presupuestos Generales del Estado, y mis palabras iban en un sentido radicalmente contrario, e insisto una vez más en el argumento: Señoría, nosotros no nos oponemos a que la Ley de Presupuestos modifique determinados aspectos de otras leyes, porque coyunturalmente es necesario, por razones de política económica y por razones de actualización de cifras, pero lo que sí manifestamos es nuestra disconformidad con que sistemáticamente las leyes de presupuestos sirvan para reformas estructurales que deben estar contempladas en el marco de una ley concreta; por ejemplo, la reforma del Estatuto de los Funcionarios, y en concreto el Estatuto del personal sanitario. Nos parece que no es lo adecuado y ni siquiera lo oportuno. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, el Senador Cardona tiene la palabra.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente. Sólo quiero hacer dos puntualizaciones.

En cuanto al complemento familiar, nuestra propuesta es precisamente suprimir el apartado b) a la espera de la modificación normativa específica en su momento, y como alternativa para el año 1990 proponemos esas 3.500 pesetas.

En cuanto a las retribuciones del personal del sector público, estamos de acuerdo casi con la mayoría de las aportaciones que han hecho los otros portavoces, y en cualquier caso no es de recibo excusarse con preguntarse de dónde lo sacamos, si es que realmente se reconoce que es injusta esta relación entre las percepciones de una y otra clase de personal, sea de la Administración pública o no; en cualquier caso, se trata de voluntad política.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Popular, el Senador Mantilla tiene la palabra.

El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador De la Torre, voy a comenzar con una frase que más o menos ha dicho usted casi literalmente: que cada uno maneja los números o las estadísticas como quiere. Es cierto, y usted también lo hace, obviamente. *(El señor Vicepresidente, Arenas Ferriz, ocupa la Presidencia.)*

Usted ha dicho que la masa salarial para 1990 se incrementa en el 11,1 por ciento; la masa salarial —usted ha utilizado ese término— obviamente es la suma de los integrantes que va a costarle a la Administración todo su personal, pero falta ahí un concepto, falta el denominador; o sea, el numerador es la masa salarial, que es todo ese montante, que efectivamente puede incrementarse el 11,1 con respecto al año pasado, pero falta el denominador, que es el número de personas que van a percibir esa masa salarial. Si usted nos facilita ese número, sabremos cuál es el incremento real que van a percibir los trabajadores de la Administración durante 1990. Porque si no es así, está clarísimo que el dinero para incrementar todo lo que le pedimos desde la oposición podría estar ahí metido, porque si en principio ustedes han incrementado los emolumentos retributivos en el 6 por ciento y esa diferencia le da más, puede haber ahí una bolsa que puede permitir hacer frente a una serie de aspiraciones que tiene la oposición.

Se están discutiendo términos cuya distorsión no viene bien a nadie. Nosotros nos oponemos a que los directores generales tengan complemento de productividad. Ya sabe que el complemento de productividad viene de la iniciativa privada, en función del trabajo que hacía un operario al cabo del día, al cabo del mes.

Nosotros no comprendemos que un director general pueda tener un plus de productividad. Se supone que los directores generales son los mejores en su ramo y está claro que dedican toda su intensidad a hacer de la mejor forma el trabajo. Sería una incongruencia que a un director general de una Administración central hubiese que incentivarle con un plus de productividad. Cosa totalmente distinta, como usted bien decía, es que tenga otros complementos específicos, como son la especial dedicación, el tiempo, la penosidad, la distancia, etcétera, que, sin duda, sí deben ser admitidos, pero no el complemento de productividad. De ahí que nosotros vengamos diciendo que deben tener un límite, igualándolo a lo sumo al de un subsecretario. Por eso fijábamos la cuantía máxima.

En otro orden de ideas, estábamos refiriéndonos a los accesos del personal laboral fijo. El personal laboral fijo como el funcionario tiene notorias diferencias. Lo que ustedes hacen es, para acceder a la oposición, primar o premiar con los méritos que pudiera tener. Simplemente, es un problema de tiempo como el de la gallina y el huevo, qué es antes y qué es después. Nosotros decimos que primero supere la oposición y después que se le prime en función de los méritos que haya conseguido en el trabajo en la administración correspondiente. No es lo mismo, es completamente distinto, señoría. Nosotros decimos que, después de superada la oposición, se tengan en cuenta esos méritos correspondientes para que pueda acceder a los puestos.

Por último, usted me preguntaba a qué nos referíamos

cuando hablamos de subtenientes. Los subtenientes son, electivamente, de la Guardia Civil y lo que nosotros queremos es compararlos a los del artículo 26, es decir a los Cuerpos nacionales de policía, equiparados al personal ejecutivo técnico, que son los que perciben 1.251.000. Si no, va a quedar descolgado este gremio. De ahí que nosotros pidamos que se incluya en el apartado 24 esta categoría vamos a llamar profesional.

Vuelvo a decir una vez más que consideramos que las enmiendas que estamos introduciendo intentan evitar todo tipo de discriminación, una homologación lógica, para paliar lo que usted ha denunciado en su discurso respecto a si están o no perdiendo el poder adquisitivo con respecto a la iniciativa privada, que lo están ganando en último término. Es cierto. A lo mejor, en los últimos seis o siete años, el personal funcionario recuperó un gran espacio, el gran «gap» que tenía con respecto a la iniciativa privada, pero ahora, últimamente, en estos dos o tres últimos años, está perdiendo capacidad adquisitiva con respecto al personal de la iniciativa privada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Ferriz): Para responder a las argumentaciones de los portavoces tiene la palabra el portavoz Socialista.

El señor DE LA TORRE COLMENERO: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la intervención de todos los portavoces y manifestar la voluntad política del Grupo Socialista de que haya una mejora paulatina en las retribuciones de los funcionarios. Es más, vuelvo a afirmar otra vez que esa voluntad política ha sido demostrada en los últimos tiempos por las medidas presupuestarias que se han tomado. Porque, si bien es cierto que ustedes hablaban de la diferencia de puntos entre el 6 y el 11,1 al que yo me refería, y que esos puntos pueden irse como consecuencia del incremento de plantilla, yo creo que no es menos cierto —y todos ustedes lo conocen perfectamente— que ha habido importantes colectivos de funcionarios de la Administración que en los últimos ejercicios han tenido unas subidas que yo no quisiera llamar espectaculares pero sí verdaderamente importantes y que en este mismo ejercicio nos encontramos con colectivos importantísimos de trabajadores que pueden tener subidas del orden del 10, 15 o incluso 20 por ciento. Y sus señorías me van a perdonar que no ponga ningún ejemplo en aras a la brevedad; creo que está en la mente de todos. ¿Dónde va la masa? Me parece que queda perfectamente explicitado.

Por supuesto que podríamos estar de acuerdo en gran parte de algunas de las medidas que sus señorías proponían de cara a poder tener los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de los trabajadores: Pero también tengo que recordales que no sólo hemos de tener en cuenta, a la hora de ver las retribuciones de los funcionarios, lo que es el salario directo, sino también el salario indirecto a través de otras partidas, no precisamente las que están en el capítulo uno, que inciden de una manera es-

pecial en el salario final que todos los trabajadores perciben.

Decía antes al portavoz del Grupo del Centro Democrático y Social que, quizá fuese necesaria una mejor definición de lo que puede ser el complemento de productividad, e incluso del propio complemento específico. En todo caso, lo que quiero decir es que tendrán que reconocer que siempre debe existir una cierta discrecionalidad —entre comillas— a la hora del reparto de esos fondos y quizá podría ser ésta una de las misiones de esa oficina presupuestaria a la que me refería con anterioridad, la cual, como usted sabe, fue explicitada en el Congreso, en el debate de investidura, por el Presidente del Gobierno.

En cuanto a las manifestaciones que se han hecho en la réplica por parte del Grupo Popular, quiero decir que al menos a este portavoz le parece —y puede que esté equivocado, estaría dispuesto a discutirlo con usted a título particular, y a lo mejor podría convencerme— que estamos hablando de la incorporación del personal laboral, que, en todo caso, exige aprobar un concurso o un concurso-oposición, sin perjuicio de que previamente se valore con un baremo una serie de méritos. A mi juicio, es indiferente que se haga antes o después porque siempre tendrá que superar esa prueba para que los méritos se valoren.

En cuanto a los subtenientes vuelvo a repetir lo mismo que decía en mi primera intervención. Otra cosa nos parece que no tiene sentido y que distorsionaría un poco la escala específica de subteniente, dando al traste con el conjunto de los complementos que tiene la Guardia Civil.

Antes se me ha olvidado, y alguno de ustedes me lo ha recordado en su réplica, contestar a su petición de que en la ley de presupuestos generales del Estado se incorporara el acuerdo con las centrales sindicales suscrito por la Administración, en el sentido de que las desviaciones sobre el IPC aparecieran ya en los presupuestos. Yo puedo garantizarles que si esas desviaciones se producen se incorporarán a los presupuestos y estoy seguro de que sus señorías tendrán el mismo deseo del Grupo Socialista, que, si se producen, sean a la baja. En todo caso, parece que incorporar previsiones de crédito por desviaciones del IPC registrado frente al previsto no es lo más coherente en una ley de presupuestos. Pero tengan sus señorías la seguridad de que si así se produce, se cumplirán los acuerdos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Ferriz): Muchas gracias, senador De la Torre. (*El senador García Sánchez pide la palabra.*) Para una cuestión de orden, el senador García tiene la palabra.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Dado que he sido aludido por el senador Aguirre, le quiero decir que yo nunca he hablado de que fuera a aplicarse para lo que él dice que se va a aplicar. Lo único que he dicho es que, para que se destine a una u otra cosa, tendrán que contar siempre con la autorización correspondiente, tal como se establece en el lugar oportuno.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Férriz): Gracias, senador García.

Terminamos el Título III, que pasará a votación a las 20 horas. (*El señor Aguirre Barañano pide la palabra.*) Señor Aguirre ¿por alusiones? (*Pausa.*) Tiene la palabra.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Simplemente quería decir que en las actas se verá lo que aquí se ha dicho.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Férriz): Gracias. Pasamos al Título IV.

En primer lugar, tiene la palabra el Senador Fuentes, en nombre del Grupo Mixto, por tiempo de un minuto.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias.

Todas estas enmiendas, como es evidente, relativas al apartado de las pensiones públicas tratan, a nuestro juicio, de mejorar la redacción, sobre todo la relativa a las pensiones especiales de guerra y las asistenciales, incluyendo ya algunos de los acuerdos para mejorar determinadas condiciones en el acceso a estas pensiones; por ejemplo, el requisito de la edad que se establece en la enmienda 862. También en la enmienda 684 se establece un crecimiento medio del 8 y del 9,6 por ciento, respectivamente, para las pensiones abonadas por Clases Pasivas del Estado y por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración local, con el fin de ir adecuando este incremento, ya que, en un momento determinado estas pensiones quedaron bloqueadas.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Férriz): Muchas gracias.

Para defender las enmiendas 993 y 934, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aguirre.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Nosotros vamos a dar por retirada nuestra enmienda 993, puesto que pedíamos un incremento de las pensiones mínimas asistenciales y hay ya una enmienda del Partido Socialista —así está recogido en el informe de la Ponencia— que supone 108 pesetas más de la cantidad que nosotros pedíamos. Parece que íbamos bastante de acuerdo y les felicitamos porque incluso nos han superado en 108 pesetas, como digo. Así pues, damos por retirada esta enmienda porque la socialista mejora lo que nosotros proponíamos.

Vamos a hablar, pues, exclusivamente, de la enmienda 934, al artículo 46.2. Estamos hablando de pensiones inferiores a la mínima y ustedes en el punto uno dicen que tendrán derecho a este complemento quienes no perciban rentas de capital o trabajo personal o que, percibiéndolas, no excedan de 613.267 pesetas. Hasta ahí, estamos totalmente de acuerdo. Pero, en el punto dos ustedes dicen que se presumirá que concurren estas circunstancias cuando durante el ejercicio de 1988 hubiesen percibido

por los conceptos indicados cantidades superiores a 520.000. No entendemos que se ponga este obstáculo a unas personas que están en la situación de pensiones inferiores a las mínimas. Si hemos quedado en que los que perciben menos de 613.267 pesetas y no cobren más por otros conceptos tienen derecho a un complemento, no lo compliquemos más. Lo que han hecho ha sido copiar la Ley del año anterior y añadir el cuatro por ciento, pero ¿es que fue el cuatro por ciento la subida de la inflación, por ejemplo? ¿Es que admiten que fue así? ¡Si no lo admite ya ni el Ministro! El año pasado figuraba literalmente lo mismo y ustedes siguen copiando lo que decía el Ministro de Economía y Hacienda. Por ello, nosotros pedimos que se suprima el punto dos, para que toda persona —estamos hablando de pensiones inferiores a la mínima, y quiero hacer hincapié en esto— que no cobre más de 613.267 pesetas tenga este derecho; si no, en el punto dos se lo están complicando.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Férriz): Muchas gracias.

Por el Grupo del CDS, tiene la palabra el Senador Quetglas para la defensa de sus enmiendas 552 y 551.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defenderlas muy brevemente. La enmienda número 551 es una enmienda de veto al Título IV. El debate ya ha sido iniciado por otros portavoces. Es evidente que la asignación presupuestaria ha mejorado pero no de manera satisfactoria, ni muchísimo menos; se sigue marginando a las clases pasivas, muy especialmente a las acogidas a los regímenes de pensiones públicas en relación a otros pensionistas del régimen general de la Seguridad Social, se siguen manteniendo diferencias inaceptables entre colectivos similares. De eso ya se ha hablado al referirnos a una enmienda al propio preámbulo del proyecto, donde se dice algo que no es realidad en el articulado de la ley, que es la culminación de esta pretendida homologación. Esos son los criterios fundamentales que llevaron a nuestro Grupo a presentar un veto.

La enmienda 552 se refiere a una de esas discriminaciones, a la situación de quienes optaron a los llamados destinos civiles, que presentan una grave discriminación en perjuicio de los jubilados en sus destinos administrativos civiles con posterioridad a la Ley de Presupuestos de 1985, cuya disposición transitoria cuarta establecía un sistema de derechos pasivos radicalmente injusto.

Así quedan defendidas ambas enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Férriz): Muchas gracias, Senador Quetglas.

Para defender las enmiendas números 652 a 669, por el Grupo de Convergencia i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona durante cinco minutos.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo ha presentado a este Título 17 enmiendas, distribuidas como sigue: cinco al Capítulo Segundo, tres al Capítulo Cuarto, dos al Capítulo Quinto y siete al Capítulo Sexto.

Las enmiendas al artículo 39 sobre determinación inicial de pensiones de guerra son cuatro, dos de ellas, la 625 y la 53, tienen como objetivo que las pensiones de orfandad se actualicen, ya que están congeladas desde 1982. Con la 654 pretendemos defender el derecho de las viudas a percibir una pensión por lo menos no inferior a las establecidas en el ejercicio de 1990 para los mutilados de guerra con invalidez absoluta o permanente y en la 655 pedimos que se abonen las 14 pagas para estos mismos colectivos.

En la 656, al artículo cuarenta, sobre determinación inicial de pensiones asistenciales, reclamamos que sea de 30.000 pesetas íntegras mensuales, de acuerdo con la cuantía mínima de 420.000 pesetas anuales que deberían tener las prestaciones no contributivas de pensiones asistenciales. Entendemos que habría que hacer un esfuerzo económico, por lo menos hasta 26.000 pesetas. Sé que hay una enmienda, que se ha incorporado en el informe de la Ponencia, de 22.000 pesetas, del Grupo Socialista. Entendemos que se ha pactado con los sindicatos, pero no con efectos para el ejercicio presupuestario de 1990, que es lo que nosotros proponemos.

Dentro del Capítulo Cuarto hay dos enmiendas al artículo 42. La 657 pretende que se incrementen globalmente para equipar su cuantía mínima a la establecida para el salario mínimo interprofesional correspondiente al ejercicio actual, de acuerdo con los compromisos políticos de los diferentes grupos y fuerzas políticas en las propagandas electorales, mientras que la 658, mediante la adición de un nuevo apartado 3 bis, propone que las pensiones de viudedad de funcionarios civiles y militares del Estado causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 50/1984 se incrementen al 45 por ciento de la base o sueldo regulador del causante.

La enmienda 659, al artículo 43.2 del mismo Capítulo, pretende mediante la supresión de los apartados correspondientes a las letras b) y c), evitar el mantenimiento de la congelación de este tipo de pensiones de orfandad.

De las dos enmiendas al Capítulo V, la 660, al artículo 45.1, sobre limitaciones para el reconocimiento de complementos para mínimos en pensiones de Clases Pasivas y de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, es decir, la MUPAL, pretende sustituir la cantidad de 613.267 pesetas anuales por la de 662.329. Con este aumento actualizamos la cuantía de rentas, ya que la primera cantidad es la misma que la del año 1989, con lo que no se tiene en cuenta el nivel de crecimiento del IPC.

La enmienda 661 pide adicionar un nuevo artículo 46 bis por motivos de equidad, con el fin de subsanar las injusticias creadas a causa de la publicación de la nueva legislación de clases pasivas, Ley 50/1984 y el Real-Decreto legislativo 670/1987.

Las siete enmiendas restantes las podemos agrupar en dos conjuntos, las que hacen referencia al artículo 47, me-

dante la adición de tres nuevos apartados, y las cuatro restantes, que pretenden la adición de cuatro nuevos artículos.

La enmienda número 663 pretende extender la nueva escala establecida en el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado a aquel personal que lo solicite, cuyas pensiones fueron causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985, y al que, por tanto, se está aplicando la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.

La enmienda número 664, sobre imprescriptibilidad en el plazo de solicitud de los expedientes del Título II de la Ley 37/1984, viene justificada por una falta de coherencia, ya que después de haberse eliminado la prescripción de plazo que existía en la solicitud de los beneficios del Título II de dicha Ley, en virtud del artículo 27.1 de la Ley 46/1985, es decir, los Presupuestos Generales de 1986, se implantó de nuevo esta prescripción en los Presupuestos del Estado para 1989.

La enmienda 665 modifica el apartado 2 del artículo 42 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, ya que en los casos de orfandad absoluta, es decir, de fallecimiento de padre y madre, el huérfano no puede quedar a expensas de una sola pensión de orfandad sin que se le complete con otra que sustente a la persona que cuida de él o que haga las funciones de padre o madre.

En cuanto a las enmiendas que se pretende adicionar a los artículos, tenemos la enmienda número 666, que pretende que los beneficiarios del mutualista sigan con derecho a la asistencia sanitaria y demás prestaciones reguladas una vez acaecido el fallecimiento del mismo por razones de carácter social.

La enmienda número 667 pide que, a partir del 1 de enero de 1990, queden exentos en el pago de los medicamentos y otros gastos farmacéuticos los pensionistas de clases pasivas afiliados a la MUFACE, MUGEJU e ISFAS, por razones de justicia e igualdad con el colectivo de pensionistas del régimen de la Seguridad Social.

La enmienda número 668 pretende garantizar que ninguna petición de prestaciones por minusvalía que no sea solicitada por el propio pensionista y funcionario sea denegada por el organismo competente. Finalmente, la enmienda número 669 propone que el plazo para la solicitud de la ayuda para gastos de sepelio sea de un año en lugar de los dos meses contemplados actualmente.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Ferriz): Gracias, Senador Cardona. Se ha ajustado a los cinco minutos.

Para la defensa de las enmiendas números 66 y 67, tiene la palabra el Senador García Royo, por el Grupo Popular.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Estas enmiendas van encaminadas no a suprimir el artículo, sino el límite que se señala para el conjunto de pensiones percibidas, 207.152 pesetas, que viene desde los tiempos de la UCD. Recuerdo haber aprobado en esta Cá-

mara un límite de 180.000 pesetas. Quien ha cotizado para recibir una pensión, en este caso concreto debiera tener un cifra exactamente de 291.540 pesetas. Creo que el Gobierno socialista podría hacer un esfuerzo, que no resultaría sino una lucha contra la confiscación, y ver las pensiones por las que se ha cotizado años, para que no ocurra que, cuando llega el momento de la percepción, se obtiene cifras completamente devaluadas con arreglo, repito, a las cotizaciones.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Férriz): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Cercós.

El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a contestar brevemente a los asuntos más destacados, porque, como sus señorías habrán podido observar, en esta ley de presupuestos se hace un esfuerzo muy importante para dar racionalidad a nuestro sistema de pensiones —evidentemente, hay que avanzar mucho camino— y aproximar los dos regímenes básicos, que son el de la Seguridad Social y el de las clases pasivas.

Estos esfuerzos están latentes y responden —en este Título, así como en alguna otra sección, como la 7.ª— básicamente a los acuerdos que ha habido con las organizaciones sindicales; por tanto, podemos tener la satisfacción de que en un documento político se recojan, no quizá por primera vez, pero sí de una manera muy sustantiva, unos acuerdos recientes con las organizaciones sindicales, y así lo expresaron sus propios líderes en su comparecencia en el Congreso.

Se ha hecho, como digo, un esfuerzo por aproximar los dos regímenes, y tenemos que destacar este hecho: en este momento, no hay apenas discriminaciones e incluso se ha podido cambiar el signo de las mismas, en tanto que antes los funcionarios eran los discriminados frente al régimen general de la Seguridad Social. Se nos dice, como ha hecho algún Senador —y no voy a referirme a ninguno en particular porque quiero hacer un planteamiento global—, que hay discriminaciones por puestos o por actividades distintas y técnicas; las hay y las seguirá habiendo en el sistema de pensiones español, como las hay en cualquier sistema, ya que son distintas las características técnicas que pueden tener la minería o las actividades industriales de las que puede tener cualquier otra actividad profesional. Pero si se refieren a la discriminación en cuanto a la propia situación del pensionista —intrínseca—, lo tenemos que rechazar, puesto que en esta ley lo que se ha hecho es, por una parte, una aproximación importante, incluso en las bases reguladoras, y también en los años exigidos para recibir los haberes máximos. En las pensiones máximas se reducen a 35 años.

Podríamos hacer posteriormente cualquier otro análisis, pero estamos convencidos de que, dada la naturaleza de las normas que se aplican en la Seguridad Social y las que se aplican en las clases pasivas, casi se podría afirmar que hay una inversión de ese signo de discrimina-

ción; por lo menos, la equiparación, si la hay, ya no es claramente favorable a la Seguridad Social frente al régimen del funcionario de clases pasivas.

El segundo punto importante a señalar es el establecimiento de límites máximos. Nosotros seguimos defendiéndolos y con alguna de las enmiendas presentadas por los grupos ya se ha avanzado algo, ha cambiado el listón y se dan unas cuantías para las pensiones máximas. Pero creemos que, mientras que existan tantas situaciones de pensionistas por debajo del salario mínimo interprofesional neto, es imposible plantearse, por razones de solidaridad, elevar el límite de las 207.000 pesetas. Así de claro, mientras que haya situaciones como las que hay, nosotros no podemos, como Grupo Socialista, más que atender a un principio de equiparación, que es lo que se está haciendo, y a un principio de respeto a la proporcionalidad. Nunca será un sistema de proporcionalidad pura, pero sí un sistema contributivo proporcional, aunque manteniendo limitaciones que consideramos imprescindibles por razones de equidad y solidaridad precisamente con el resto de los pensionistas. Se establece un límite de 291.000 pesetas, que es el máximo que existe en la Seguridad Social. Pero también hay que saber que en la Seguridad Social no hay uniformidad de techos, puesto que oscilan entre las 87.000, aproximadamente, y las 291.000 pesetas. En el caso de los derechos pasivos de los funcionarios, con esta cifra que se incluye en los presupuestos estamos cerca. Entre otros puntos que se han abordado, por no entrar en el detalle de todas las enmiendas —ya que en el Pleno podremos referirnos a las que se mantienen—, está el tema de las cuantías de las pensiones llamadas asistenciales. Más de un portavoz ha defendido la cantidad de 26.000 pesetas, y otras enmiendas hablan de 30.000. Nosotros entendemos que la cuantía que se ha establecido en esta enmienda, y que se corresponde con la inquietud del representante del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, 22.000 pesetas, recoge los acuerdos que ha habido en la concertación con las organizaciones sindicales. Además, existe una razón para mantener la cifra, una razón objetiva: está en tramitación la ley de pensiones no contributivas que establece unas cuantías que no pueden ser rebasadas en este proyecto de ley, porque lo que se pretende es que las pensiones asistenciales en la sociedad española sean para aquellos casos en que no se puedan acoger a la situación de pensiones no contributivas.

Pensamos que la mayoría de la sociedad quedará cubierta por el régimen general de pensiones contributivas o por las pensiones no contributivas cuando aprobemos el proyecto de ley, y puede haber ciertas personas que no puedan justificar su situación para poderse acoger a las no contributivas, que quedarán para las pensiones asistenciales. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*) El régimen de esas personas, no puede ser mejor que el que se contempla en el proyecto de ley y lo mismo ocurre con las cuantías. Por esa razón, nosotros defendemos la cuantía establecida en la enmienda que hemos aprobado y que responde a lo acordado con las organizaciones sindicales.

También se ha hablado, por ejemplo, del retiro militar

y de los que han prolongado los servicios civiles. Podemos decir que no hay problema en que se computen, y así está previsto en la ley, los tiempos de prestación de servicio en el orden militar dentro de la situación de retiro, es decir, que se compute en el retiro militar, lo que han trabajado en el servicio civil. Esto está contemplado en la norma. En alguna enmienda se ha aludido a las diferencias, por ejemplo, en el tratamiento de la congelación de pensiones para huérfanos. Nosotros queremos que sus señorías se fijen en que la situación de congelación de las ayudas para huérfanos a consecuencia de la guerra tiene que tener un techo y una realidad, porque esas pensiones de orfandad son vitalicias, mientras que hay otras reconocidas, por ejemplo, a los funcionarios, que llegan hasta los 21 años y a los trabajadores en actividades industriales hasta los 18; es decir, hay situaciones que no pueden amparar, que no son homologables y, por eso, se congelan las ayudas por orfandad.

Creemos que estos son los puntos críticos. Hay una nube de enmiendas puntuales, pero es evidente que, con el esfuerzo que se ha hecho para mejorar el sistema de pensiones, se están atendiendo las aspiraciones máximas de todos los grupos. Respetamos el deseo que puede haber por parte de algún grupo político de cubrir pequeños huecos, zonas que afectan a colectivos más o menos importantes, pero que no se corresponden con las variables marco que tiene el proyecto de ley que estamos contemplando. En ese sentido, nosotros rechazamos las enmiendas en general y contestaremos a aquéllas que tengan un carácter más puntual en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Abrimos un turno de portavoces. Se acercan las 8 y vamos a votar en seguida. Digo esto porque yo agradecería a las señorías que han de intervenir que se ciñan a los tres minutos reales y a ser posible algo menos, para poder llevar el ritmo que nos hemos propuesto.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Gracias, señor Presidente.

Con anterioridad he expresado mi desacuerdo —y de ahí la cantidad de enmiendas— con las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas. Debo expresar, y así se refleja en las enmiendas, mi acuerdo general con el Título IV, porque creo que comporta una mejora importante en el camino de la superación de los déficit en las pensiones públicas. Eso no es obstáculo para que mantengamos nuestras enmiendas, porque creemos que, siguiendo esa filosofía que apuntaba el señor Cercós, hay que mantener los límites máximos de las pensiones. Creo que sería bueno que alguna de nuestras enmiendas que tienden a mejorar algunas de las prestaciones, por ejemplo la de prestaciones asistenciales, se recogiese, ya que trata mejor lo que se está discutiendo con respecto a las pensiones no contributivas. Estando de acuerdo con la mayor parte de este Título, creemos que nuestras enmiendas, que van en la misma dirección que

ha apuntado el señor Cercós, deberían ser recogidas en el texto y, por eso, las mantenemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

¿CDS? (Pausa.)

¿Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: La importancia de este Título es uno de los motivos de nuestra enmienda de veto a la totalidad y por ello nos remitiremos, como ha hecho el portavoz socialista, al debate en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Popular? (Pausa.)

¿Grupo Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cercós.

El señor CERCOS PEREZ: Quiero, en primer lugar, agradecer a los distintos grupos que remitan las enmiendas al Pleno.

En relación con la sugerencia del Senador Fuentes, tengo que decirle que se causaría una distorsión importante en la tramitación de la Ley de pensiones no contributivas si aprobáramos cuantías para lo que tiene que ser una situación residual en el panorama asistencial español. Esta es la única razón y posponemos los demás argumentos para el momento en que lo debatamos en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

La verdad es que no esperaba tanta colaboración. Así, cuando son las ocho menos un minuto, vamos a votar los vetos. Se pueden votar juntos o separados, si algún grupo parlamentario tiene interés en que el suyo se vote independientemente. Lo mismo haremos con los títulos.

Quiero hacer una segunda advertencia: no podrán votar más que los Senadores miembros de la Comisión, bien porque lo sean de suyo o porque estén sustituyendo a otros Senadores de su grupo.

Para terminar, ruego a los señores Secretarios que sean ellos, y no el Letrado ni el Presidente, los que cuenten los votos y el signo de cada uno de ellos, para una mayor pureza y para que quede claro que no interviene ni el poder del Presidente ni la habilidad de los Letrados.

¿Algún grupo quiere que su veto general al proyecto de ley se vote independiente? (Pausa.) Votamos todos los vetos juntos, los del Grupo Mixto, Senadores Nacionalistas Vascos, CDS, Convergència i Unió y Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.

Quedan rechazados.

Vamos a votar el texto del informe de la ponencia. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Texto del informe de la Ponencia.

A continuación, votaremos del Título I las enmiendas a todos sus artículos, excepto el uno, el dos y el cuatro, que quedan para el final del debate. (*Un señor SENADOR: Considero que en este caso no procede la votación, tendrían que ser por bloques de enmiendas.*)

El señor PRESIDENTE: Esto está a disposición de las empresas. Como quieran sus señorías. Pónganse de acuerdo. (*Rumores.*) Silencio, por favor.

Vamos a votar todas las enmiendas de todos los grupos al Título I, salvo los artículos uno, dos y cuatro, ya dichos, que quedan pendientes para el final del debate.

El señor GARCIA ROYO: ¿Salvo las enmiendas socialistas?

El señor PRESIDENTE: No, porque están incorporadas. La Presidencia agradece mucho su intención, pero como está un poco afónica, prefiere que haya menos votaciones. (*Risas.*) Las enmiendas socialistas están incorporadas y entrarán, por lo tanto, cuando votemos el texto.

Vamos a votar las enmiendas presentadas al Título I, salvo los artículos anteriormente citados. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el texto de la ponencia referido a este Título I. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Título I.

Vamos a votar las enmiendas, todas conjuntas, al Título II. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el informe de la ponencia correspondiente al Título II. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Insisto en que los señores Secretarios cuenten bien, porque puede haber errores. (*Risas.*)

Queda aprobado el Título II, según el informe de la ponencia. Pasamos a votar las enmiendas presentadas al Título III. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; Votos a favor, 12; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas al Título III.

Vamos a votar el texto del informe de la ponencia correspondiente al Título III. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Título III. Pasamos a votar las enmiendas al Título IV. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas al Título IV.

Vamos a votar el texto del Título IV. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del Título IV.

Señorías, creo que debemos continuar, tratando de avanzar un título o dos, con el ritmo que queramos imprimirles.

Iniciamos el debate del Título V, artículos 48 a 60. Título V

En primer lugar, está la enmienda 865, interpuesta por don Rafael García Contreras y otros, perteneciente al Grupo Mixto.

Tiene un minuto para su defensa el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda trata de doblar la asignación que se dedica a la ayuda al desarrollo. Somos conscientes de que ya se ha doblado en relación con el año anterior pero, en cualquier caso, nos sigue pareciendo insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta la situación de nuestro país, las obligaciones que tenemos en cuanto a la solidaridad internacional con otros países y los parámetros que han señalado en muchos casos ya organismos internacionales. Por todo ello, insistimos en esta enmienda y pedimos su votación favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado las enmiendas 935 y 936.

Senador Aguirre, tiene cinco minutos para su defensa.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda 935, que va dirigida al artículo cuarenta y ocho, número tres, hace referencia, una vez más, a la modificación de la Ley General Presupuestaria. Querría reiterarme una vez más en todo lo que he dicho. Este es un artículo más en el que otra vez se cambia la Ley General Presupuestaria. ¿Cuántas veces? ¡Pues cuan-

tas veces como se quiera! Nosotros presentamos un texto por el cual pretendemos que la Ley General Presupuestaria sea algo básico e inamovible, mientras que la Ley General de Presupuestos, corresponda a los presupuestos de cada año.

Respecto de nuestra enmienda 936, que hace referencia al artículo cincuenta y siete, tres, es sobre el Fondo de Ayuda al Desarrollo. Quisiera llamar la atención del grupo mayoritario sobre lo que dice este artículo en el punto tres: «El Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe de la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo, podrá proponer al Consejo de Ministros, la asunción por parte del Fondo de Ayuda al Desarrollo de quitas o condonaciones parciales de los créditos ya concedidos...» Es decir, de los que ya se han concedido antes, hace un año o hace dos. «... y que se encuentren incluidos en acuerdos de refinanciación tanto bilaterales como multilaterales firmados por el Ministerio de Economía y Hacienda en nombre del Estado español».

Lo que pedimos es que el Gobierno presente a las Cortes Generales los correspondientes proyectos de ley, a ver si estas Cámaras pueden controlar lo que se gasta en estos aspectos. Es decir, si el Gobierno, por las razones que sea, decide condonar unas deudas o decide condonar unos créditos, que estas Cámaras tengan posibilidad de debatir lo que se está haciendo. Porque entendemos que una de las funciones de las Cortes Generales —y sobre todo en el Senado, en el que si no nos dedicamos a estos temas, poco nos queda por hacer— es el control de estos asuntos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo del CDS, se presentan las enmiendas 553, 554 y 555.

El Senador Quetglás tiene cinco minutos para su defensa.

El señor QUETGLAS ROSANES: Gracias, señor Presidente.

Vamos a retirar la enmienda 554, ya que se aceptó una transacción en el trámite de Pleno del Congreso que, analizada posteriormente, resulta suficientemente satisfactoria y, consecuentemente, vamos a retirar también el veto al Título V, o sea, la enmienda 553.

Mantenemos, sin embargo, la enmienda número 555, ya que entendemos que, a pesar de las mejoras introducidas —algunas de ellas gracias a la aceptación de nuestras enmiendas—, no existe plena satisfacción en relación con los métodos de contabilización de la deuda pública. Si no cambian los métodos de contabilización de la deuda pública, fundamentalmente en el sentido de cambiar el criterio de caja por el criterio del devengo, es necesario —para que las Cortes Generales puedan juzgar, debatir y autorizar las emisiones de deuda pública— que se incluya un estado justificativo de la tabla por intereses y amortizaciones de la deuda pública del Estado y sus organismos, en que se especifiquen los criterios de cálculo, los saldos vivos, las amortizaciones de cada ejercicio, tipos y carga de intereses.

Creo que es una enmienda que se defiende en sus propios términos, porque es una información absolutamente esencial para que las Cortes Generales puedan autorizar o establecer su criterio definitivo en materia de deuda pública, en materia de operaciones financieras del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergencia i Unió, enmiendas número 671 y 672.

El señor CARDONA I VILA: Y número 682.

El señor PRESIDENTE: Comience, señoría, porque puede haber un error en mis notas.

El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.

La enmienda número 682 es a los efectos de suprimir la modificación que efectúa el artículo cincuenta y ocho, apartado uno, del referido texto al artículo 77 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, porque entendemos que genera confusión en relación con los mercados organizados no oficiales de valores.

Las enmiendas números 670 y 671 son también al artículo cincuenta y ocho. En la 670 pedimos la supresión del apartado dos, porque entendemos que no se aprecia la necesidad de que se negocien en ningún mercado organizado secundario que sea distinto de las bolsas oficiales de valores, que en la redacción actual de la ley deben ser negociados en el mercado bursátil. La 671 es a los efectos de suprimir la modificación que realiza el artículo cincuenta y ocho de este proyecto al artículo 100, letra i), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Entendemos que la modificación que proponía el proyecto de ley sobre este artículo consiste en añadir como infracción la denegación injustificada a ejecutar una orden en la compra o venta de valores. Ello abre una vía conflictiva que, más que resultar clarificadora, es perturbadora en este sentido.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Queda entendido que se han defendido las enmiendas números 670, 671 y 682.

El Grupo Popular presenta las enmiendas números 68 a 77. Tiene la palabra para su defensa el Senador Alierta. Cinco minutos, señoría.

El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

Hemos presentado una enmienda de veto a este Título, porque entendemos que la filosofía presupuestaria que lo inspira no se corresponde ni siquiera con la que se ha venido pregonando para estos Presupuestos, porque habiéndose presentado como moderadamente restrictivos ante la opinión pública, sin embargo, al autorizar la emisión de nueva deuda pública, recoge una autorización por importe de casi un billón de pesetas, que es una cifra relativamente alta. Resulta difícil relacionar la idea de una

actitud restrictiva en lo económico y en cambio, que la deuda pública en el ejercicio 1990 aumente en un millón de millones de pesetas sobre el importe total de deuda pública existente a primero de enero del presente ejercicio. Pero es que, además, se han introducido modificaciones en las cuales esta cantidad puede ir a la alta según corresponda a variaciones en una serie de conceptos que detalla la propia Ley de Presupuestos. Como consecuencia, se han introducido también modificaciones en la Ley General Presupuestaria que, como ya se ha dicho, son más propias de mantenerlas en ella, y que las leyes de presupuestos se atengan a lo que está especificado en dicha ley, que fue recientemente aprobada en un texto refundido.

Todo cuanto hemos dicho sobre emisión de deuda pública se puede hacer extensible a la financiación mediante el recurso al Banco de España. Se establecen unos límites, pero no son unos límites que cuantitativamente tengan la importancia que se les ha pretendido dar. Y, por otra parte, en ambos casos se establece que los límites se aplicarán únicamente al fin del ejercicio, con lo cual, durante el año estos límites pueden variar discrecionalmente, con los peligros o posibilidades que esto puede significar. En consecuencia, este Título no se corresponde con la filosofía que nosotros esperaríamos de unos presupuestos que se han presentado como restrictivos.

Otras enmiendas hacen referencia a la necesidad de cuantificar los importes que el Estado asume en cuanto a sus obligaciones por la asunción de deudas de organismos como el INI, el crédito oficial o las autopistas, ya que no se establece cuál es la cantidad que el Estado va a asumir. Hay una indeterminación de este importe que no se corresponde con la especificidad que la legislación e, incluso, la Constitución exigen para la emisión de deuda pública y para la asunción de estos importes. Ni siquiera se cumple lo dispuesto en la Ley Presupuestaria para 1989, que establecía el envío de información trimestral a las Comisiones de Presupuestos —tanto del Congreso como del Senado— de los términos y las operaciones de deuda pública que llevaría a cabo el Estado así como de los avales, ya que esta información —al menos a este Senador— no ha llegado. En consecuencia, estas son las razones por las cuales fundamentalmente hemos erigido las enmiendas a este título.

Por último, quiero señalar que existen una serie de artículos referentes a la modificación de la Ley del Mercado de Valores —ley, por otra parte, de muy reciente aprobación— que se someten a debate en esta Ley de Presupuestos. No entendemos que la Ley de Presupuestos deba recoger variaciones de todo tipo de leyes. Y, además, creemos que esta materia necesitaría —si se modificase— una ley propia, por múltiples razones: La propia tramitación de la Ley de Presupuestos, que se hace con ciertas prisas por la necesidad de que los Presupuestos estén aprobados, impide que se le dedique la atención que estos aspectos sustantivos necesitarían. En consecuencia, aunque sólo fuera por cortesía parlamentaria, sería de desear que en la Ley de Presupuestos se trataran exclusivamente temas presupuestarios y no se incluyeran otro tipo de ma-

terias que difícilmente se puede suponer que tengan una repercusión estrictamente presupuestaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

La enmienda número 1.222, del Grupo Socialista, ha sido incorporada. Para turno en contra, tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías, por sus palabras.

Voy a empezar refiriéndome a los vetos, o mejor dicho al veto, porque el Grupo del CDS ha retirado el suyo, al igual que las enmiendas números 553 y 554, si no he tomado mal nota.

Quiero empezar agradeciéndole sus palabras y voy muy brevemente a decirle al responsable del Grupo Popular que el carácter restrictivo de estos Presupuestos le viene dado porque el crecimiento del gasto previsto está por debajo del crecimiento nominal del PIB, y dígame lo que se quiera y mientras no se demuestre lo contrario, el déficit previsto está una décima, como mínimo —y algo es algo— por debajo del déficit del año 1989. Por consiguiente, esas cifras son lo suficientemente elocuentes como para considerar que este presupuesto pretende conseguir los objetivos generales de la política económica del Gobierno de cara a que España adquiera los niveles que debe de adquirir en la Europa comunitaria de 1993, pero con los necesarios ajustes para que algunas variables no vayan por donde no es deseable.

Respondiendo a algunos aspectos puntuales que sus señorías acaban de plantear y también al resto de las enmiendas, aunque sea brevemente, quiero decir que, en cuanto a las enmiendas del Grupo Popular y a la número 554 del CDS, ya retirada, todas ellas presentadas al artículo cuarenta y ocho, pero refiriéndome en concreto a esta enmienda del Grupo Popular, limitar el saldo que a lo largo del ejercicio pueda ofrecer la deuda del Estado supondría tanto como limitar los importes de las modificaciones de crédito que a lo largo de un ejercicio puedan autorizarse, lo que supondría incluso, en mi opinión, limitar la potestad legislativa de las Cortes Generales para aprobar proyectos de ley. Esa es mi humilde opinión, señorías. Por tanto, me voy a oponer a esta enmienda por esta serie de razones.

Por otro lado, a pesar de que lo he intentado, señoría, no me ha sido posible determinar con qué operaciones el CDS ha determinado la cifra que propone como máximo importe del incremento del saldo vivo de la deuda del Estado a 31 de diciembre de 1990 que se refiere a 1,4 billones. Que me lo expliquen, porque yo no he podido determinar esa cifra en absoluto.

El Grupo Popular pretende suprimir el artículo cuarenta y nueve, porque dice que con esta norma es imposible saber la situación del Instituto Nacional de Industria. Deben tener en cuenta que el detalle de la asunción de deuda se recoge en el Anexo IV del proyecto de ley y el destino de la misma en los estados financieros del INI, figurando como aportación de capital del Estado y aparecien-

do, por tanto, en el presupuesto de capital del citado Instituto. Es decir, señorías, que tampoco veo especiales problemas a que continúe el texto como está.

Entiendo que la enmienda número 555 del CDS, respecto a facilitar un mayor control por las Cortes de la conducta financiera del Estado a fin de evitar el desequilibrio financiero, es una actitud loable, sin duda alguna, pero su señoría convendrá conmigo en que el control de las Cortes está suficientemente asegurado sin necesidad de nuevos añadidos, al menos es lo que yo creo.

En cuanto a la supresión del artículo cincuenta y tres, relativo a la cancelación de deudas recíprocas entre el Estado y el ICO, que solicita el Grupo Popular, tengo que decirles que la cuantía de la compensación de las deudas recíprocas entre el Estado y el ICO a que se refiere el artículo cincuenta y tres del proyecto de ley figura en la aplicación presupuestaria 31.08.632-A.822 por un importe de 112.000 millones de pesetas, suponiendo tal operación simples apuntes contables, sin movimientos de fondos, que distorsionarían el volumen de las operaciones presupuestarias no financieras, caso de no procederse de la manera propuesta en el proyecto de ley.

El Grupo Popular justifica la supresión del artículo cincuenta y cuatro, Fondo de financiación de Autopistas, en la necesidad de que se exprese la estimación de ingresos y gastos que se hayan realizado por este concepto, además de cuantificar los ejercicios sucesivos que cita el artículo. Desde la creación del Fondo en la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, éste se ha financiado exclusivamente con los recursos captados en el mercado exterior de capitales. Es a partir de 1987 cuando no se han realizado nuevas operaciones, sustituyéndose la autorización presupuestaria de los años anteriores por la redacción actual del artículo cincuenta y cuatro, que se ha venido repitiendo en las leyes de presupuestos para los años 1988 y 1989 respectivamente, por lo que, señorías, desde 1986 no se han firmado nuevos préstamos con cargo al Fondo con las sociedades concesionarias de autopistas acogidas al mismo.

En mi opinión, tampoco procede aceptar la enmienda número 74 del Grupo Popular, pues no es posible aún cuantificar las deudas objeto de compensación entre el Estado y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ya que todavía no han sido aprobadas las cuentas correspondientes al pasado ejercicio de esa entidad, por lo que la citada cuantificación supondría —reitero— la aprobación de los beneficios de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso.

Señorías, respecto a las enmiendas de los Grupos Popular, Mixto y PNV al artículo cincuenta y siete, tengo que decirles lo siguiente: primero, de los créditos FAD aprobados por el Consejo de Ministros en un cuarto año, y particularmente las del segundo semestre, sólo una pequeña proporción originarán desembolsos en este año. Segundo, no existe obligación expresa de comunicación periódica por parte del Gobierno a las Cortes con relación a estas concesiones de crédito con cargo a dicho Fondo, pero en cualquier momento, se puede solicitar, por su-

puesto, la convocatoria de la Comisión de Presupuestos del Congreso y del Senado sin ningún problema.

Por último, quiero señalarles que, en opinión de quien les habla, no veo justificación de ningún tipo a las enmiendas presentadas por ustedes al artículo cincuenta y ocho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Gracias.

Unicamente quiero reiterar mi enmienda, porque entiendo que no se me ha dado ningún argumento que justifique por qué no se puede incrementar esta dotación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el CDS, tiene la palabra el señor Quetglás.

El señor QUETGLAS ROSANES: Gracias, señor Presidente.

Yo quería dar una explicación al portavoz socialista. Creo que no me ha entendido porque, quizá, no he explicado bien mi argumentación.

En la enmienda número 554, la cifra mágica que usted se preguntaba de dónde salía, 1.431.648.517 millones de pesetas, se la voy a explicar muy fácilmente. En esta ocasión y, claro está, en otras también, el presupuesto dice cuál es la cuantía máxima del saldo de la deuda, que es la diferencia entre ingresos y gastos ordinarios, los 980.000 millones de pesetas. Pero, además, el artículo diez establece que los incrementos por créditos extraordinarios y suplementos de crédito no podrán exceder del 2,5 por ciento del total de los créditos autorizados. Pues bien, los 980.000 millones más ese 2,5 por ciento del total dan el billón cuatrocientos mil millones de pesetas. Así de simple; es una pura operación matemática. Pero, como el texto tal como viene dice exactamente eso: 980.000 millones de pesetas, incrementado lo que resulte de la aplicación de lo establecido en el párrafo segundo del artículo diez, nosotros pretendíamos que eso se expresara en una cifra concreta y que no diera lugar a interpretaciones. En cualquier caso, esa enmienda está retirada. La cifra no es mágica sino absolutamente coherente con el texto de la propia ley, no salía de ninguna elucubración abstracta.

La enmienda número 555, señoría, no es que pretenda un mayor control por parte de las Cortes Generales a las emisiones de deuda pública. Simplemente pretende conocer el Estado de la deuda, pretende conocer los criterios de contabilidad que nosotros discutimos. En cualquier caso, lo que ocurre es que el Gobierno no los explicita. Por tanto, se nos hace muy difícil, por no decir imposible, hacer una valoración crítica, política, e incluso establecer determinados criterios sobre la autorización o no de las operaciones financieras del Estado y de los organismos. Insisto, a no ser que se nos dé una explicación diciendo que la pretensión es de conocimiento y no de con-

trol, se hace muy difícil conocer cuáles son el volumen, la cuantía, la estructura y las cargas financieras de la deuda. Eso es lo único que pretendemos con el mantenimiento de esta enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Se me ha contestado puntualmente sólo a las enmiendas al artículo cincuenta y ocho. En cualquier caso, nosotros tampoco hacemos uso de este turno de portavoces. Nos remitimos a lo que explicaremos en el Pleno. La enmienda número 682 es suficiente motivo para esto.

El señor PRESIDENTE: Sí, ahora figura ya en el texto.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.

El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

La palabra «restrictivo» puede tener las connotaciones que cada uno quiera darle, eso es evidente. Pero, «restrictivo» para «un buen padre de familia», como dice nuestro Código Civil, sería una Administración prudente. Pero, una Administración prudente que lleva a suponer que se va a emitir o se va a autorizar una emisión de deuda durante el ejercicio de 1990 de casi un millón de millones de pesetas, no dejaría de sorprender a las mentalidades de la mayor parte de los ciudadanos españoles sobre que eso fuera restrictivo. Es decir, si dice una familia: Este año nos vamos a apretar el cinturón, pero nos endeudaremos por un importe equivalente de esa naturaleza en nuestra economía familiar, sería difícil calificarlo como restrictivo.

Esto me lleva a decir que si esto es restrictivo se explica que cuando la actividad presupuestaria ha sido expansiva haya tenido un déficit relativamente mayor comparado con los que se califican de restrictivos o derivados de políticas presupuestarias restrictivas, y, en consecuencia, no es difícil entender por qué el Estado español tiene en este momento esos billones, millones de millones de deuda pública.

Sí, como consecuencia de una política presupuestaria restrictiva, vamos a tener un billón, un millón de millones más de deuda que durante los años de política expansiva, que ha llegado hasta la cifra de 16 millones de millones de pesetas, esto es fácil de entender.

Por otra parte, ha hecho manifestaciones el señor portavoz del Grupo Socialista con respecto a lo que significaría la fijación de los límites de estas operaciones al final del ejercicio o que estos límites se estableciesen durante todo el ejercicio, con unas consecuencias que, desde luego, no compartimos. En absoluto creemos que si esos límites se fijasen durante el ejercicio quedarían en menoscabo las facultades de las Cortes Generales. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Y que no fueran posible las modificaciones de crédito. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Yo

quiero señalar que en la liquidación de los presupuestos del año pasado a este respecto, las modificaciones de crédito, excluidas las referentes al capítulo de deuda pública, alcanzaron la cifra de casi 900.000 millones de pesetas; es decir, que si hay un límite de emisión de deuda pública de un millón de millones y añadimos las posibles modificaciones porque la ley lo autoriza, estamos autorizando emisión de deuda pública por 900.000 millones de pesetas; o sea, que se puede prácticamente duplicar la autorización, si entendemos en sentido amplio la palabra modificación tal como viene en la ley y como se recoge en las liquidaciones de los presupuestos. Lo mismo para el Banco de España.

En cuanto a las apreciaciones referentes a la necesidad de mayor precisión, yo creo que la contestación del propio portavoz del Grupo Socialista lo ha añadido. Se autoriza, por ejemplo, en el caso de la Fábrica de Moneda y Timbre a asumir sus deudas, pero no sabemos cuáles son. Nosotros creemos que en una Ley de Presupuestos, cuando el Estado se compromete a asumir unas deudas, hay que tener cierta certidumbre de cuál va a ser esa cantidad. Lo mismo con el caso que se ha señalado de las autopistas. Ustedes dicen que no ha habido ningún crédito hace muchos años. Entonces, ¿para qué figura ese artículo allí si no ha habido necesidad?, y si la va a haber, que se cuantifique. Y las precisiones que haya habido en otros casos podrían figurar en la propia ley, con lo cual habría mayor precisión y claridad en cuanto a la asunción de las obligaciones y a lo que significa el documento presupuestario que vamos a aprobar.

Por último, querría decir que en el caso del mercado de valores, como ya se ha señalado, no ha habido ninguna contestación y, por tanto, lo dejamos para otra ocasión si es menester.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para decir que cuando se habla de endeudamiento, de deuda pública, etcétera, sería bueno, para que todos nos entiéramos, que se pusiera el denominador, es decir, que se pusiera una referencia a algo, porque si no, todos nos perdemos. Si empezamos a citar cifras absolutas sin referirnos a qué o con qué las estamos comparando o con respecto a qué estamos hablando, es muy fácil decir muchas cosas e incluso, como ya ocurrió en el debate presupuestario del pasado año, podríamos trasladar las pesetas a segundos y acabar en no sé cuantos siglos. Me parece que eso no debe hacerse así, sino con el necesario rigor para saber con respecto a qué partidas estamos hablando.

Yo quiero contestar tanto al responsable del Grupo Popular como al del CDS con unas palabras que se han dicho en el debate de Presupuestos del Congreso, y precisamente las ha dicho el señor Lasuén, del CDS, y son las si-

guintes: «Muchos de los criterios del CDS han sido asumidos este año a fin de garantizar el mejor control financiero de todo el sistema presupuestario. En este sentido, afirmo que el Presupuesto de este año es mejor que el del anterior, en primer lugar, por admitir la limitación de los gastos ordinarios; en segundo lugar, por admitir la propuesta del CDS de limitar los gastos extraordinarios; en tercer lugar, por incidir en que el déficit se debe financiar con deuda. No cabe, pues, duda de que estamos mejorando.»

Creo, señorías, que he dado la respuesta adecuada a las enmiendas, salvo a la del Grupo de Convergencia, al que pido disculpas, porque no está incorporada a este título y no la he podido ver. La podremos comentar luego si así lo desea e incluso llevarla al título en que esté enclavada.

Me parece, señorías, que la postura del Grupo Socialista es clara y concreta y, desde luego, las afirmaciones que ustedes han hecho no nos llevan a anular nuestra postura y, por consiguiente, nos vamos a oponer.

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el Título V. Vamos a considerar también, si les parece a sus señorías, el Título VI, acabado el cual ya habremos cubierto las horas que el Reglamento señala y podremos levantar la sesión. (*Varios señores SENADORES: No, no.*) Bueno, lo consideraremos después. En este tema, la Presidencia tiene el mismo dilema que tenía Julián en el romance de la Verbena de la Paloma, que éste dice que sí y ésta dice que no. Lo veremos después.

Título VI Vamos, sin más preámbulos, a discutir el Título VI, que comprende los artículos 61 y 63. El Senador Barbuzzano tiene una enmienda, la número 1, que puede defender por tiempo de un minuto.

El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a referirme al artículo 62, sin entrar en el fondo de lo que mantiene, que es una potestad sancionadora para garantizar la deuda con la Hacienda pública. A nosotros nos parece que sería mejor modificar, por la metodología parlamentaria que se desee, la Ley General Tributaria con relación al hecho de que cualquier ciudadano se olvide de colocar en una transacción el número de identificación fiscal, o sea, el de esa tarjeta azul que nos han dado. Independientemente de que la sanción por olvidarse pueda ser de 100.000 pesetas y que si se la ponen a un auxiliar administrativo que gana 70.000 le organizan un desastre, pensamos que debería hacerse más bien una modificación en la Ley General Tributaria y no estar contenida en este proyecto de ley. (*El señor Vicepresidente, Arenas Ferriz, ocupa la Presidencia.*)

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Arenas Ferriz): Gracias, Senador Barbuzzano.

Para defender las enmiendas 556, 557, 558 y 559, del CDS, tiene la palabra el señor Quetglás.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero, en primer lugar, agradecer al portavoz del Grupo Socialista que argumente que las mejoras del Presupuesto de 1990 se basan fundamentalmente en enmiendas del CDS. Es un reconocimiento que tengo la obligación de agradecerle, encareciéndole al mismo tiempo que continúe por ese camino y acepte otras enmiendas, y mejorará aún más el Presupuesto.

Vamos a retirar el veto de la enmienda 556, porque vamos a abrir próximamente, según se anunció en las comparecencias, un debate en base a la reforma fiscal que va a abarcar, según palabras del propio Secretario General de Hacienda, señor Borrel, más allá del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y va a entrar en el ámbito de otras figuras de la imposición directa y, por supuesto, de la indirecta; por tanto, aceptamos el aplazamiento del debate sobre el sistema fiscal y sus disfunciones, reiteradamente denunciadas por parte de nuestro Grupo, para más adelante. Por tanto, vamos a retirar este veto.

Vamos, sin embargo, a defender tres enmiendas, dos de las cuales tienen la vocación de introducir elementos de progresividad social de carácter muy específico y puntual en dos impuestos directos. La 556 se refiere a incrementar el mínimo exento de tributación por el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para aquellos casos en que el heredero sea un disminuido físico o psíquico. Para nosotros, ésta es una enmienda importante. La hemos presentado en este proyecto porque en la comparecencia del señor Borrel vimos una especial receptividad positiva a su contenido. La argumentación, señor Presidente, es muy simple: cuando una familia tiene en su seno un hijo disminuido físico o psíquico, su actuación, en cuanto al patrimonio, para dejar una herencia a esa persona, está sesgada en favor de una acumulación, ya que no le pueden dejar otra herencia en forma de estudios o de otro tipo de oportunidades a las que tienen acceso las personas que no están disminuidas. Por tanto, es absolutamente injusto gravar esa acumulación patrimonial en los mismos términos que cualquier otra y entendemos que un criterio estricto de justicia y un mínimo de sensibilidad social lo aconseja. Porque, por ejemplo, en los regímenes generales, en una herencia de carácter general, el peso específico que tiene la valoración de la vivienda familiar, del piso, que en estos momentos, debido a las fuertes tensiones al alza de los precios de las viviendas, tiene una valoración altísima, llegar a los cien millones no parece una actitud disparatada, ni muchísimo menos, sino de estricta justicia. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

La enmienda número 559 pretende otorgar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los menores en régimen de acogimiento familiar las mismas deducciones o deducciones fiscales que a los hijos sean éstos naturales o adoptivos.

La reciente reforma del Código Civil y la generalización del sistema de acogimiento, para intentar evitar la figura del asilo, de la reclusión de los menores, que si bien no tienen la condición de abandono permita una rápida adopción, ha facilitado esa nueva redacción del Código Civil. Generalizado el régimen de acogimiento, el artícu-

lo 713 del Código Civil está en este momento determinando cuál es la relación entre la familia y el acogido menor, y es exactamente igual en términos de obligaciones, de mantenimiento, de escolarización, de alimentación, de vestido, etcétera, que para un hijo. Por lo tanto, en coherencia con lo que significa la reforma del Código Civil en materia de acogimiento, parece obligado introducir en el régimen de deducciones y desgravaciones a los menores acogidos, en las mismas cuantías que a los hijos naturales o adoptivos, repito.

La enmienda número 558 es una enmienda radicalmente distinta. No se trata de una enmienda en la que deba yo apelar a la *sensibilidad social de sus señorías*, sino a una cuestión de coherencia con lo que es la línea de actuación en materia de política turística por parte del Ministro y otras autoridades en esta misma Cámara que apunta hacia la necesaria reconversión en materia de calidad.

Pretendemos con esta enmienda la corrección de lo que a nuestro juicio fue un error, que fue el pasar la hostelería de cuatro estrellas del régimen fiscal en materia de IVA del tipo reducido al tipo normal. ¿Cuáles son sus efectos? La política turística, tanto del Estado como de algunas comunidades autónomas que ya han tomado iniciativas en este sentido, está acentuando la necesidad de incrementar la calidad de la oferta turística y muy en concreto de la oferta turística de los establecimientos, hoteleros y extrahoteleros. Si nosotros establecemos un salto entre los hoteles de tres estrellas y cuatro, en materia de IVA, estamos encareciendo el proceso de reconversión turística un seis por ciento y estamos estimulando de manera indirecta la oferta de hoteles de baja calidad, lo cual es radicalmente contrario a los objetivos explicitados por el Ministerio de Transportes y por las comunidades autónomas avanzadas en este sentido en materia de política turística. Pretendemos esta reconversión para, por un lado, conseguir una armonización entre los instrumentos y los objetivos que se pretende conseguir y, por otro lado, facilitar al Gobierno argumentos de cara a la negociación, en materia de armonización fiscal, en materia de IVA, en la Comunidad Económica Europea, para mantener la hostelería y las actividades de oferta turística en la banda baja del tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Yo creo que esto es una obligación que el Gobierno debe asumir como propia en favor de la economía nacional y el equilibrio del conjunto del sistema, para paliar el gran trauma que está suponiendo para el sector turístico la aparición de ofertas alternativas que ponen en peligro un sector básico para nuestra balanza de pagos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Cardona, para la defensa de la enmienda 672.

El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente. Esta enmienda pretende, como la número 1 del Grupo Mixto, que ha defendido el Senador Barbuzano, la supresión del artículo 62 sobre el Número de Identificación Fis-

cal. Nos remitimos a la explicación que ha dado el Senador Barbuzano porque coincidimos plenamente con él.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Popular tiene las enmiendas 78 a 84, ambas inclusive; para su defensa, tiene la palabra el Senador Ortiz.

El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

A estas alturas del debate, la brevedad, aparte de por el ruego hecho por el Presidente y por ser un regla de juego establecida, se impone por otro tipo de consideraciones. Yo quisiera felicitar al Presidente por la precisión con que está cumpliendo los tiempos, lamentando, desde luego, que en la ley más importante de las que se someten a la Cámara legislativa cada año en poco más de cuatro horas hayamos debatido cinco títulos. Es una consideración al margen de la defensa de las enmiendas; pido perdón al señor Presidente, pero no tengo más remedio que hacerla. Esto, señorías, no es un debate presupuestario; esto es el cumplimiento de un trámite administrativo. Quiero que quede constancia al menos en el «Diario de Sesiones».

Dicho esto, hay otra razón más de brevedad y es que, en esa materia de normas tributarias que componen el Título VI, hay sólo tres artículos. En el Decreto-ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y fiscal es donde el Gobierno, y no hay nada que discutir al respecto, ha puesto el centro de gravedad de las modificaciones tributarias como consecuencia de la prórroga debido a la disolución de las Cámaras. Los tres artículos se refieren a aspectos plenamente marginales, colaterales de lo que es la fiscalidad en sentido estricto. A ellos hemos presentado unas enmiendas, para cuya argumentación nos remitimos a la justificación escrita, en un debate devaluado como al que estamos asistiendo.

Sí quiero hacer una referencia obligada al Número de Identificación Fiscal. Yo les ruego, señorías, que hagan lo que estoy haciendo yo, que es sacar de la cartera la tarjeta de identificación fiscal y leer lo que dice por detrás; comprobarán que es cierta la justificación de nuestra enmienda cuando dice que el Número de Identificación Fiscal puede suponer una invasión en la intimidad de las personas. En primer término, dice que será preciso presentar el famoso documento para todas las comunicaciones y escritos que se dirijan a la Administración tributaria, cosa absolutamente correcta y coherente. Pero después, a renglón seguido —y es bueno que hagan ustedes este ejercicio de lectura—, dice que será necesario para la apertura de cuentas o realización de otras operaciones en bancos, cajas de ahorro u otras entidades de crédito; para la adquisición o transmisión de inmuebles o valores y para efectuar otras operaciones con pertenencia tributaria, debiéndose comunicar a otras personas o entidades —no a Hacienda— que tengan que suministrar una información a Hacienda pública acerca de sus recíprocas relaciones económicas y profesionales.

Si estar seguros del secreto de la Hacienda pública ya

es problemático, estarlo del secreto que ampare las operaciones que se comunican a terceros es más que dudoso.

Por estas razones, proponemos la supresión no sólo del Título, porque, en definitiva, supone una invasión más de la Ley General Tributaria —se modifica la Ley General Presupuestaria y la Ley General Tributaria—, sino la supresión de este artículo 62 que se refiere al Número de Identificación Fiscal.

Me reservo para el Pleno muchas referencias que hay que hacer al artículo 18.4 de la Constitución. También hay que hacerlas a una sentencia del Tribunal alemán, que valdría la pena que el Gobierno español hubiera conocido, de 15 de diciembre de 1983, a un convenio suscrito por el Gobierno español, el Convenio 108 del Consejo de Europa, y a una resolución posterior del Consejo de Ministros del Consejo de Europa al respecto. Se darían cuenta de que no se puede proceder en esta materia, que tiene que ver en las relaciones de la informática fiscal con la intimidad, de una manera tan alegre y mucho menos estableciendo las disparatadas sanciones —y repito disparatadas, no ha sido un «lapsus»— las disparatadas sanciones que establecen ustedes en el artículo 62.

Señor Presidente, lamentando no poder ser más amplio en mis argumentaciones, que dejo para el Pleno, donde tampoco será posible, pero qué le vamos a hacer —quede así para el «Diario de Sesiones»—, aquí termino.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO MONROVE: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la misma brevedad que el resto de los portavoces, como consecuencia no de la apreciación del senador Ortiz, que podría haber utilizado su tiempo para conseguir la altura que considerara conveniente, sino por la hora en que estamos y sobre todo por la brevedad de este Título, que tiene exclusivamente tres artículos porque todo el contenido tributario aparece en la ley de medidas urgentes, que será el escenario donde se debatirá la inmensa mayoría de los temas que probablemente preocupen a sus señorías referentes a la fiscalidad y a aspectos tributarios.

También aquí en el Senado, como pasó en el Congreso, el Número de Identificación Fiscal se convierte en la estrella del debate de este Título, repitiéndose las argumentaciones que se han producido allí. Básicamente, la argumentación del Grupo Socialista va a tener el mismo contenido que la que se hizo entonces y la que se viene haciendo por los distintos responsables de la Administración del Estado y del Gobierno socialista en los últimos meses.

Ciñéndome concretamente a las enmiendas, vamos a rechazar la número uno, formulada por el señor Barbuzano, porque no consideramos conveniente hacer un proyecto de ley independiente para regular lo mismo que este artículo 62 que es lo que quiere que se haga el señor Barbuzano. No nos parece correcto hacer una ley distinta de los presupuestos generales del Estado para la reglamen-

tación de las sanciones por el incumplimiento de las normas para la aplicación del Número de Identificación Fiscal.

Quisiera, por lo menos, ajustarme un poco más a lo que me parece que es el contenido global respecto al Número de Identificación Fiscal, dando los argumentos de fondo de nuestro grupo, algunos de los cuales ya hemos manifestado en otros foros.

Esta enmienda no la vamos a aceptar por varias razones. En primer lugar, la normativa que establece y regula el Número de Identificación Fiscal no es esta ley de presupuestos generales del Estado, sino la 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en su artículo 113. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 1990 lo que incorpora al artículo 83 de la Ley General Tributaria es un aspecto relativo al uso de dicho Número de Identificación Fiscal que sólo fue parcialmente contemplado en la Ley de 1987, que es el régimen a sancionar aplicable, el cual puede parecer disparatado o no, como apreciación absolutamente legítima. Pero es lo único que hace, sin entrar en la propia implantación del Número de Identificación Fiscal, que ya está normativizado desde la Ley de Presupuestos del año 1987.

Se puede pensar que es o no el vehículo normativo más adecuado para recoger este tipo de normas, pero es indiscutible, y me refiero al núcleo de la enmienda del Grupo parlamentario de Convergencia y Unión, la validez constitucional de la inclusión de normas de gestión tributaria en las leyes de presupuestos.

En efecto, hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional reiterando que, si bien el número de la ley de presupuestos tiene que ser la previsión de ingresos y la autorización de gastos, no es ése el contenido exclusivo y puede incluir regulaciones que estén relacionadas con previsiones de ingresos, autorizaciones de gastos o con los criterios de política económica en los que se sustentan.

Abundando aún más y en base a la enmienda número 82 del Grupo Parlamentario Popular sobre el Número de Identificación Fiscal, sólo me resta decir que la normativa, tanto legal como reglamentaria, de este Número de Identificación Fiscal no supone, desde nuestro punto de vista, incremento de las obligaciones de identificación, sino garantía de que dicha identificación se efectúe correctamente. No cabe entrar a tratar el aspecto de la identificación de las personas jurídicas, puesto que no hay en esa materia ninguna novedad.

Respecto a las personas físicas, se configura el Número de Identificación Fiscal con el Documento Nacional de Identidad, con la adición de un código de verificación, ya previsto en la propia normativa reguladora del Documento Nacional de Identidad. No se establecen obligaciones de información ni se prevé el uso de ella, independientemente de la apreciación que tenga el portavoz del Grupo Popular sobre el uso que de la información haga la Administración del Estado. Es una apreciación absolutamente distinta de lo que establece la normativa que en este momento estamos regulando.

Por ejemplo, el Consejo de Estado, en su dictamen, se-

ñala, refiriéndose al Real-Decreto regulador del Número de Identificación Fiscal, que la norma consultada ni establece la obligación de declarar ni pretende regular el uso de la información tributaria informatizada y, por tanto, ella misma no incurre en el terreno del artículo 18 de la Constitución. No puede reprocharse defecto alguno al proyecto —tampoco al artículo 62 de la Ley de Presupuestos de 1987, a la que antes hice referencia— que se limita a fijar el régimen sancionador.

Por lo tanto, todo lo relativo al NIF gira en torno a la obligación de proporcionar información a la Administración tributaria y a las garantías del uso de dicha información, para que no suponga intromisión ilegítima en la intimidad. La valoración política, insisto, que del uso de la información hagan los respectivos grupos políticos, en este caso el grupo enmendante, no puede de ninguna de las maneras sustentar la argumentación de rechazo de la normativa que en este momento se está abordando en los presupuestos generales del Estado.

Al Grupo del Centro Democrático y Social' quiero manifestar nuestro agradecimiento por la retirada de su enmienda de veto al Título VI. Respecto a las tres enmiendas parciales que presenta este Grupo —la 557, 558 y 559—, quiero indicarle, por su propia argumentación, que no voy a entrar en su contenido. Me parece que hay elementos importantes a tener en cuenta en cada una de las tres enmiendas, pero tienen más encaje bien en el debate sobre el conjunto de la materia tributaria que se va a hacer en la ley de medidas urgentes o bien en los debates a que se ha referido su señoría sobre las nuevas leyes, no solamente la del IRPF, sino otras más respecto al impuesto indirecto y otros, que van a entrar en las Cámaras en los próximos meses como consecuencia de los compromisos contraídos por el Gobierno.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Se abre un turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Barbuzano por tiempo de tres minutos.

El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

No creo que sea necesario repetir que no pretendía entrar en el fondo de la cuestión. En la documentación que me manda el Congreso de los Diputados y el Senado veo proyectos de ley que modifican uno o dos artículos de otra Ley; por tanto, no veo que hubiera problema.

Usted sabe, señoría, igual que yo, que es totalmente discutible que una Ley de Presupuestos de 1988, por ejemplo, o de 1987, en determinadas materias, continúe en vigor hasta hoy día y haya que estarse remitiendo a presupuestos de hace tres años. Sabe que esto es una discusión digamos constitucional que está planteada entre verdaderos expertos y cabezas jurídicas de este país. Existen esas sentencias del Tribunal Constitucional, como usted dice, y se refieren a ingresos y gastos y política tributaria. Si yo, como ciudadano, quiero saber cómo interpreta el Constitucional ingresos y gastos y política tributaria,

empiezo a llevar al Constitucional la ley de presupuestos por artículos, pero imagínese usted el lío que se puede ocasionar.

No digo nada más. Me parece bien que se rechace, pero no me ha contestado. Hay que diferenciar entre el que se olvida y el que lo hace adrede; no es lo mismo olvidarse que no facilitar, como dice el texto. No entrábamos en el fondo, únicamente en la forma; lo demás son simplemente matizaciones, que no significan que vaya en contra de nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Centro Democrático y Social, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el Senador Quetglas.

El señor QUETGLAS ROSANES: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, quisiera abundar en las palabras del Senador portavoz del Grupo Socialista cuando hablaba de la devaluación del debate. No me he querido referir al tiempo que dura el debate; he pretendido decir que desde la oposición no hay nada más frustrante que le digan a uno: tiene usted toda la razón, pero no le vamos a aprobar su enmienda. Eso devalúa el debate de verdad y es un argumento que empezamos a oír con exagerada frecuencia. Y no puedo hacer otra cosa que decir: le doy las gracias por reconocer mis argumentos, pero la coherencia le obligaría a aceptar mi enmienda y no a decir que no es oportuna, porque, si la ley de presupuestos es oportuna para introducir modificaciones en la Ley General Tributaria, en la Ley General Presupuestaria, en todos los distintos tipos impositivos que están regulados por Ley en este país, ¿por qué no aceptar unas modestísimas enmiendas de la oposición que usted reconoce que mejorarían el sistema tributario, aunque sea muy parcialmente?

Lamentamos la falta de argumentos y esperamos, con una esperanza que se difumina en el horizonte, lógicamente, porque esto está sucediendo demasiado a menudo, que en la próxima reforma tributaria, al menos, se vean recogidos estos criterios. Entonces, se lo reconocemos y nos daremos por satisfechos, pero está noche no podemos hacerlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por Convergència i Unió. (Pausa.)

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.

El señor ORTIZ GONZALEZ: Con mucha brevedad, señor Presidente.

Quiero hacer dos matizaciones. En primer lugar, quiero recordarles que el Consejo de Estado, en ese dictamen al que se ha referido, recordó, entre otras cosas, al Gobierno Socialista que las sanciones estaban amparadas por el principio de reserva de ley y que tenían que hacerlo por ley. Pero ustedes, en lugar de elaborar un proyecto específico, han colado este asunto de rondón —legítimamente, pero de rondón, si me permite la expresión— una

vez más en la ley de presupuestos de este año. El Consejo de Estado les dijo las cosas a las que usted se ha referido y algunas más. Les dijo: les recuerdo que en materia de sanciones, para que puedan legislar sobre sanciones, tienen que ir a una norma con rango de ley. Podría haber sido mediante un proyecto autónomo, pero ustedes han preferido incorporarlo a la ley de presupuestos, legítimamente.

Por consiguiente, no hablamos de un problema de constitucionalidad. Nadie ha discutido su constitucionalidad. Después de una famosa sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que la ley de presupuestos era a todos los efectos una ley ordinaria y que, por el principio de reserva de ley, también quedaba amparada, muy poco hay que decir. Es un problema de devaluación de garantías para el ciudadano y, por tanto, de sentido común, que está más allá de la constitucionalidad.

Con este documento se dan datos, que pueden ser confidenciales, a particulares. Si ya es discutible el sigilo de la administración tributaria —pero vamos a aceptarlo—, si ya es discutible el sigilo de los obligados a secreto —como los bancos o las entidades financieras, y es discutible—, excuso decirle en la medida en que es discutible que los particulares ordinarios, empresarios, personas físicas ordinarias, tengan en su poder datos de cualesquiera personas en aquellos supuestos en los cuales haya sido preceptivo que la documentación vaya amparada por este Número de Identificación. No es un problema de constitucionalidad. Mi Grupo no cuestiona de ninguna manera la constitucionalidad, sino simplemente la devaluación, no del debate, señor Presidente, sino de las garantías que están en el sentido común. No todos los ciudadanos españoles son capaces de administrar y de manejar con el debido sigilo informaciones a las que tienen acceso como consecuencia del juego de este documento. Y, en los tiempos en los que se ha inventado el ordenador, donde pueden estar registrados millones de datos en poder de un particular, una medida de prudencia habría obligado a legislar en profundidad sobre esta materia antes de meter de rondón tres o cuatro párrafos en un proyecto de ley de presupuestos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Moreno, en nombre del Grupo Socialista.

El señor MORENO MONROVE: Muy brevemente.

Ya para finalizar, quiero decir al portavoz del CDS que no es que yo haya dicho que sus argumentos son muy buenos pero, a pesar de ello, no le admitimos la enmienda. He dicho que no voy a entrar en el fondo de la cuestión —por lo visto, es importante matizar estos temas—; que creo que hay elementos importantes para el debate posterior y que éste no es el escenario para ese debate. Lógicamente, es legítimo que usted diga lo contrario porque

es una manera completamente válida de hacer oposición a unos presupuestos como los que estamos en estos momentos debatiendo, pero su señoría ha dicho hace muy pocos minutos que reconoce que el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas más otros impuestos indirectos anunciados por el propio señor Borrell van a incorporarse inmediatamente como proyectos de Ley y parece lógico que cuestiones importantes como las que forman parte de esas enmiendas queden incorporados a ese debate mucho más global y mucho más profundo que el que estamos celebrando ahora. En cualquier caso, el Título VI de esta ley está compuesto exclusivamente por tres artículos porque todas las normas tributarias están en otra ley distinta. Por tanto, de nuevo digo que es otro escenario. ¿Por qué tiene que ser en éste? Me parece dialécticamente importante lo que afirma porque con ello hace oposición, pero también me parece absolutamente razonable que nosotros rechacemos esa enmienda, con el reconocimiento de que hay elementos importantes para la reflexión futura.

Respecto al Senador Ortiz, muy brevemente, deseo decirle que no voy a insistir en el Número de Identificación Fiscal, porque ya he expuesto que su implantación no es de los presupuestos de 1990, sino que desde hace dos o tres años aparece ya en la Ley de Presupuestos, de 1987 para el año 1988; estamos estableciendo exclusivamente el régimen sancionador, con el que se puede estar o no de acuerdo, que puede ser incluso disparatado, según dice su señoría, pero que a nosotros, sin embargo, nos parece tremendamente razonable, porque es un instrumento clave para la lucha contra el fraude fiscal. Parece que no hemos hablado para nada, por lo visto, del régimen sancionador. Volvemos al debate sobre la existencia o no del Número de Identificación Fiscal, sobre el que nosotros estamos muy orgullosos, primero, de que exista, y, segundo, de que haya una importante mayoría ya de parlamentarios de acuerdo con su contenido, porque todos sabemos que es un instrumento muy importante en la lucha contra el fraude fiscal.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llegados a esta hora, invocando el Reglamento, que habla de cinco horas —que ya hemos cubierto—, y teniendo en cuenta que el Título VII es más largo y más denso de lo que ha sido el Título VI, tan breve —aunque tan devaluado—, la Mesa, aunque no tiene inconveniente en que si sus señorías lo piden por una mayoría notoria ventilemos el Título VII, sugiere que empecemos mañana a las nueve cuarenta y cinco.

¿Les parece a sus señorías que levantemos la sesión, para empezar a las diez menos cuarto y debatir el Título VII? (*Asentimiento.*)

Se levanta la sesión.

Eran las nueve horas y diez minutos.